REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali, 1 7 ABO ¿Otá

Auto Sustanciación No. W?

Proceso No.: 76001-33-33-008-2016-00215-00

Demandante: Doris Guzmán Vergara y otros

Demandado: Nueva E.P.S.

Corporación Comfenalco Valle - Universidad Libre - En

Liquidación

Angiografía de Occidente S.A.

Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S.

Instituto de Diagnóstico Médico S.A.- IDIME - En Liquidación Medio de Control: Reparación Directa

La señora Doris Guzmán Ver gara y otros, por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, consagrado en el artículo 140 del C.P.A.C.A., instauran demanda contra Nueva E.P.S., Corporación Comfenalco Valle - Universidad Libre - En Liquidación, Angiografía de Occidente S.A., Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S., Instituto de Diagnóstico Médico S.A.- IDIME - En Liquidación, con el fin de que se declare la responsabilidad de las entidades referenciadas, por los perjuicios inmateriales causados a los demandantes, al considerar que dichas entidades prestaron el servicio médico en forma deficiente e inoportuna, lo que conllevó al deceso del señor Luís Carlos Ibarguen Díaz, el día 27 de mayo de 2014,

Ahora bien, procede el Despacho a calificar la demanda, con el objeto de analizar que el contenido de la misma cumpla con los requisitos para su interposición.

Una vez revisado el escrito de demanda, se advierte que debe dar estricto cumplimiento a lo ordenado en los numerales 1o y 3o del artículo 162 Ib., que dispone que los hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones frente a cada uno de los integrantes del extremo pasivo deben estar debidamente determinados. Partiendo de lo anterior, es claro que la descripción de los hechos debe ser organizada y orden cronológico sin que pueda conllevar a equívocos, pues sustentan las pretensiones y hace parte del asunto puesto en consideración.

En el mismo sentido, con relación a la descripción de los hechos, cabe destacar que se consignaron diversas apreciaciones subjetivas, pretendiendo con ello que se endilgue una orden judicial a múltiples entidades que se enlistan indiscriminadamente, sin tener en cuenta la competencia o injerencia de cada una de ellas.

En efecto, deberá ceñirse a describir aquellos que se relacionen con las pretensiones solicitadas frente a la competencia de la o las entidades presuntamente responsables de los perjuicios que pretende sean reconocido, puesto que dicho actuar, se traduce en un desgaste en la defensa judicial por cada una de las entidades, así como del aparato judicial, toda vez que la demanda no puede basarse en aseveraciones, sin tener en cuenta que gozan de personería jurídica, y desconociendo la competencia de cada una de las entidades que llama a responder, por los hechos ocurridos el día 27 de mayo de 2014.

Conviene recordar que la competencia funcional obedece a la distribución de funciones entre los diferentes jueces y específicamente dependiendo de la cuantía en los asuntos puestos en consideración, dando origen así a las instancias de conocimiento y revisión. En efecto los artículos 149 a 155 del C.P.A.C.A.. regulan el conocimiento de los asuntos de los Jueces Administrativos, Tribunales

Administrativos y el Consejo de Estado, ya sea en única, primera o segunda instancia.

De lo anterior se desprende que la cuantía debe ser estimada, y no solo enunciar la suma que pretendida, incumpliendo así lo ordenado en el artículo 157 del C.P.A.C.A.

Por su parte, la normatividad enunciada, establece los parámetros de interpretación y fórmula a aplicar que se deben tener en cuenta en el momento de determinar la competencia por razón de la cuantía.

*"Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía.* Para efectos de competencia, cuando sea dei caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen.

En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos. tasas: contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

“(...y

La estimación razonada de la cuantía, que en la demanda señaló que los perjuicios ascienden a “$68.950.000”, máxime si se tiene en cuenta que solo se solicitaron perjuicios inmateriales en la modalidad de perjuicios morales, lo anterior tiene por objeto determinar la competencia del Juez y el procedimiento a seguir, aspecto este que debe quedar definido desde que inicia la controversia, al tenor de lo dispuesto en el numeral 6o del artículo 155 del C.P.A.C.A. Competencia de los Jueces Administrativos en única instancia. Los jueces administrativos conocerán en única instancia: "... 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500)'salarios mínimos legales vigentes. ...”

Adicionalmente, debe aclararse lo consignado en los poderes obrantes a folios 15 y 16 del expediente, toda vez, que se indicó que la muerte del señor Luis Carlos Ibarguen Díaz, se originó como consecuencia de la “falla en la prestación del servicio de salud estando a órdenes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - ÍNPEC".

Soporte Jurisprudencial

En relación a la oportunidad que tiene el juez para exponer las falencias de la demanda, el H. Consejo de Estado ha sostenido:

"El artículo 103 de la Ley 1437, expresamente dispone que "/os procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico

“Por su parte, el artículo 4o del Código de Procedimiento Civil prescribe que ‘el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial'', lo que se refleja en el deber consagrado en el numeral 1 del artículo 37 ibidem de ‘dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir su paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran ".

“En virtud de la finalidad del proceso judicial —la efectividad de los derechos— el juez goza de amplias potestades de saneamiento, en aras de que el proceso se ritúe conforme al procedimiento legal y se profiera una sentencia de mérito al verificarse el cumplimiento de los

1 $344.727.000

presupuestos de validez y eficacia del proceso, potestades de las que puede hacer uso en cualquier etapa del mismo, por ejemplo, al momento de estudiar la demanda para su admisión o en la audiencia inicial, etapa procesal en la cual, acorde con lo dispuesto en el artículo 180.5 de la Ley 1437, el juez, de oficio o a petición de parte, debe decidir los vicios que se hayan presentado y adoptar las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias.

"Así, la facultad de saneamiento le impone al juez la obligación de revisar la regularidad del proceso, la existencia de irregularidades o vicios y subsanarlos, para que el proceso pueda seguir y culminar normalmente con sentencia de mérito.

"4.2.2. La potestad-deber del juez de sanear el proceso en cada etapa procesal se funda en la regla contenida en el artículo 25 de la Ley 1285, según la cual “agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades dentro del proceso, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes en aras de evitar dilaciones injustificadas ', salvo aquellas otras irregularidades que "comporten una grave afectación del núcleo esencial de las garantías constitucionales de las cuales son titulares los sujetos procesales", de acuerdo con la Sentencia C-713 de 2008 que declaró exequible el articulo 25 de la Ley 1285. “(...)2” (N.f.d.t.o.)

En este sentido, la demanda habrá de inadmitirse conforme lo dispone el artículo

170 del C.P.A.C.A, con el objeto de que subsane las falencias descritas, aportando

las respectivas copias para la entidad demandada.

En consecuencia, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Calí,

RESUELVE:

1. Inadmítase la presente demanda.
2. Conceder el término de diez (10) días a fin de que se corrija los defectos antes anotados, so pena de rechazo, de conformidad con el artículo 170 del C.P.A.C.A.
3. Reconózcase personería para actuar como apoderado de la parte demandante al doctor Manuel Antonio Echavarría Quiroz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.667.792 y portador de la tarjeta profesional de abogado No. 115.603 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del mandato a él otorgado, y como apoderado sustituto al abogado Jhon Fernando Ortiz Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.446.433 y T.P. 161.759 C.S.J. Se advierte que en atención a lo previsto en el artículo 74 del C.G.P. no podrán actuar simultáneamente.

Notífiquese y Cúmplase,

¡^^oTlSntono^forérí

Juez

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTIAGO DE CALI NOTIFICACION POR ESTADO ELECTRÓNICO

La suscrita Secretaria certifica que la anterior providencia se notificó a la(s)

parte (s) por anotación en el ESTADO ELECTRÓNICO No. el cual

se insertó en los medios inforrriáticos de la Rama Judicial el día / E ARO 7Pt5 Se certifáeá'de igual manera que se envió mensaje de datos a quienes suministráronos ^dirección electrónica.



CAROLINAVbERNÁNDEZ MURILLO Secretaria

‘ Auto 2012-00173 de septiembre 26 de 2013 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Rad.: 08001-23-33-004-2012-00173-01 (20135)Consejero Ponente Dr. Jorge Octavio Ramirez Ramírez Proceso Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Sociedad Dormimundo Ltda Demandado: U.A.E. DI AN

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali

Auto de Sustanciación N° rM

Medio de Control:

Radicado No: Demandante: Demandado:

76001-33-33-008-2014-00214-00

FONDECOM

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

CONSIDERACIONES

Que mediante Auto de Sustanciación No. 829 de fecha agosto 02 de 2016 proferido dentro de la audiencia inicial que tuvo lugar el mismo día este Despacho fijó como fecha para llevar a cabo la audiencia de pruebas de que trata el artículo 181 del CPACA el día 1o de septiembre de 2016 a las DIEZ Y MEDIA DE LA MAÑANA (10:30 AM)

Que una vez verificada la agenda del Despacho la audiencia programada para el proceso de referencia se cruza con otra por lo que es necesario reprogramarla.

Por lo anterior este Despacho resuelve,

1. Señálese la hora de las DIEZ (10:00) DE LA MAÑANA DEL PRÓXIMO PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016) para que tenga lugar la Audiencia de pruebas, establecida en el artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Advirtiéndole a las partes sobre las consecuencias procesales por su inasistencia a dicha audiencia, establecidas en el numeral 4 del artículo 180 del CPACA.

RESUELVE:

Notifíquese

r

Juez.



r

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

El auto anterior sl\* notifica por: Estado No.



REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI



Santiago de Cali

Auto de Sustanciación N° Qfrfl

Medio de Control:

Radicado No: Demandante: Demandado:

76001-33-33-008-2013-00367-00 HÉCTOR JULIO QUIMBAYO RONDÓN Y OTROS MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y EMCALI EICE ESP

REPARACIÓN DIRECTA

En vista de los informes secretariales que anteceden, el Despacho,

1. Téngase por contestada la demanda por parte de las llamadas en garantía ALLIANZ SEGUROS S.A. y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
2. Señálese la hora de la UNA Y QUINCE (01:15) DE LA TARDE DEL PRÓXIMO OCHO (08) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016) para que tenga lugar la Audiencia Inicial, establecida en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Advirtiéndole a las partes sobre las consecuencias procesales por su inasistencia a dicha audiencia, establecidas en el numeral 4 del artículo 180 del CPACA.

RESUELVE:

Notifíquese

n

Juez.



NOTIFICACIÓN POR ESTADO

F.l auto anterior .se notifica por: Estado No.



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali

Auto de Sustanciación N°

Medio de Control:

Demandante:

Demandado:

Llamado en garantía: Radicado No:

REPARACIÓN DIRECTA JHON JAMES ARBOLEDA BENAVIDES NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE; INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS; UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. ASEGURADORA CÓNDOR S.A. 76001-33-33-008-2013-00075-00

CONSIDERACIONES

Que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Suroccidente, en respuesta al Oficio No. MLF 1128 radicó ante la Oficina de Apoyo un Ofició de No. GRCOPPF-DRSOCCDTE-01509-2016 de fecha agosto 08 de 2016, en el cual informa al despacho que se ha fijado fecha para la valoración por lesiones personales del señor JHON JAMES ARBOLEDA BENAVIDEZ el día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 09:00 AM la cual será practicada en la Institución ubicada en la CALLE 4B No. 36-01 de la ciudad.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Auto Interlocutorio No. 625 de fecha julio 25 de 2016, advirtió este Despacho que las costas que se generen por esta prueba serán asumidas en su totalidad por la parte demandante, quien deberá proveer las copias respectivas y hacer presentar al afectado a los sitios e fechas y horas que se indiquen.

En virtud de lo expuesto este Despacho,

1. Poner en conocimiento del apoderado de la parte demandante, el oficio No. GRCOPPF-DRSOCCDTE-01509-2016 de fecha agosto 08 de 2016 emanado del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Suroccidente, para que realice las diligencias que le corresponden, so pena de que se declare desistida la prueba decretada.

RESUELVE:

Notifíquese

r

Juez.



NOTIFICACIÓN POR ESTADO

El auto anterior se notifica por: Estado No.

De 1 **fl AGO 20 IS**



REPÚBLICA DE COLOMBIA

W

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali, 1 ? flftn

Auto Sustanciación No.&jo;

Proceso No.: 76001-33-33-008-2016-00202-00

Demandante: Leonardo Arturo Leyton Martínez y otros

Demandado: Municipio de Santiago de Cali

Nación - Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Vías - INVIAS Agencia Nacional de Infraestructura -ANI Sociedad de Ferrocarril del Pacífico S.A.S.

Seguros Generales Suramericana S.A.

Medio de Control: Reparación Directa

El señor Leonar Arturo Leyton Martínez y otros, por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, consagrado en el artículo 140 del C.P.A.C.A., instauran demanda contra Municipio de Santiago de Cali, Nación - Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías - INVIAS, Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, Sociedad de Ferrocarril del Pacífico S.A.S., Seguros Generales Suramericana S.A., con el fin de que se declare la responsabilidad de las entidades referenciadas, por los perjuicios materiales e inmateriales causados a los demandantes, al considerar que dichas entidades omitieron el deber de señalar la intersección ubicada en la Avenida 4 Norte calle 34B de este municipio, lo que ocasionó el accidente de tránsito donde resultó lesionado el señor Leonardo Arturo Leyton Martínez, quien se desplazaba en motocicleta al colisionar con un tren que circulaba por la dirección citada, el día 03 de mayo de 2014.

Ahora bien, procede el Despacho a calificar la demanda, con el objeto de analizar que el contenido de la misma cumpla con los requisitos para su interposición.

Una vez revisado el escrito de demanda, se advierte que debe dar estricto cumplimiento a lo ordenado en los numerales 1o y 3o del artículo 162 Ib., que dispone que los hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones frente a cada uno de los integrantes del extremo pasivo deben estar debidamente determinados. Partiendo de lo anterior, es claro que la descripción de los hechos debe ser organizada y orden cronológico sin que pueda conllevar a equívocos, pues sustentan las pretensiones y hace parte del asunto puesto en consideración.

En el mismo sentido, con relación a la descripción de los hechos, cabe destacar que se consignaron diversas apreciaciones subjetivas, pretendiendo con ello que se endilgue una orden judicial a múltiples entidades que se enlistan indiscriminadamente, sin tener en cuenta la competencia o injerencia de cada una de ellas.

En efecto, deberá ceñirse a describir aquellos que se relacionen con las pretensiones solicitadas frente a la competencia de la o las entidades presuntamente responsables de los perjuicios que pretende sean reconocido, puesto que dicho actuar, se traduce en un desgaste en la defensa judicial por cada una de las entidades, así como del aparato judicial, toda vez que la demanda no puede basarse en aseveraciones, sin tener en cuenta que

gozan de personería jurídica, y desconociendo la competencia de cada una de las entidades que llama a responder, por los hechos ocurridos el día 03 de mayo de 2014.

Conviene recordar que la competencia funcional obedece a la distribución de funciones entre los diferentes jueces y específicamente dependiendo de la cuantía en los asuntos puestos en consideración, dando origen así a las instancias de conocimiento y revisión. En efecto los artículos 149 a 155 del

1. P.A.C.A., regulan el conocimiento de los asuntos de los Jueces Administrativos, Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado, ya sea en única, primera o segunda instancia.

De lo anterior se desprende que la cuantía debe ser estimada, y no solo enunciar la suma que pretendida, incumpliendo así lo ordenado en el artículo 157 del C.P.A.C.A.

Por su parte, la normatividad enunciada, establece los parámetros de interpretación y fórmula a aplicar que se deben tener en cuenta en el momento de determinar la competencia por razón de la cuantía.

*“Articulo 157. Competencia por razón de ia cuantía.* Para efectos de competencia, cuando sea del caso, ¡a cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen.

En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones. la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

La estimación razonada de la cuantía, tiene por objeto determinar la competencia del Juez y el procedimiento a seguir, aspecto este que debe quedar definido desde que inicia la controversia, al tenor de lo dispuesto en el numeral 6o del artículo 155 del C.P.A.C.A. Competencia de los Jueces Administrativos en única instancia. Los jueces administrativos conocerán en única instancia: "... 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500)’salarios mínimos legales vigentes. ...”

**Soporte Jurisprudencial**

En relación a la oportunidad que tiene el juez para exponer las falencias de la demanda, el H. Consejo de Estado ha sostenido:

‘El artículo 103 de la Ley 1437. expresamente dispone que “los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico ’.

‘ Por su parte, el articulo 4o del Código de Procedimiento Civil prescribe que “el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustanciar, lo que se refleja en el deber consagrado en el numeral 1 del articulo 37 ibidem de “dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir su paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad portas demoras que ocurran".

S344 727 000

“En virtud de la finalidad del proceso judicial —la efectividad de los derechos— el juez goza de amplias potestades de saneamiento, en aras de que el proceso se ritúe conforme al procedimiento legal y se profiera una sentencia de mérito al verificarse el cumplimiento de los presupuestos de validez y eficacia del proceso, potestades de las que puede hacer uso en cualquier etapa del mismo, por ejemplo, al momento de estudiar la demanda para su admisión o en la audiencia inicial, etapa procesal en la cual, acorde con lo dispuesto en el artículo 180.5 de la Ley 1437, el juez, de oficio o a petición de parte, debe decidir los vicios que se hayan presentado y adoptar las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias.

‘Así, la facultad de saneamiento le impone al juez la obligación de revisar la regularidad del proceso, ia existencia de irregularidades o vicios y subsanarlos, para que el proceso pueda seguir y culminar normalmente con sentencia de mérito.

4.2.2. La potestad-deber del juez de sanear el proceso en cada etapa procesal se funda en la regla contenida en el artículo 25 de la Ley 1285. según la cual “agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades dentro del proceso, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes en aras de evitar dilaciones injustificadas", salvo aquellas otras irregularidades que “comporten una grave afectación del núcleo esencial de las garantías constitucionales de las cuales son titulares los sujetos procesales", de acuerdo con la Sentencia C-713 de 2008 que declaró exequible el artículo 25 de la Ley 1285.

■(.../"(N.f.d.t.o.)

En este sentido, la demanda habrá de inadmitirse conforme lo dispone el artículo 170 del C.P.A.C.A, con el objeto de que subsane las falencias descritas, aportando las respectivas copias para la entidad demandada.

En consecuencia, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, RESUELVE:

1. Inadmítase la presente demanda.
2. Conceder el término de diez (10) días a fin de que se corrija los defectos antes anotados, so pena de rechazo, de conformidad con el artículo 170 del C.P.A.C.A.
3. Reconocer personería para actuar al doctor Alvaro Jóse Torres Rubio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.786.798 y portador de la Tarjeta Profesional No. 96.320 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte demandante, en los términos del mandato a él otorgado.

Notifíquese y Cúmplase,

M0N

Juez

2 Auto 2012-00173 de septiembre 26 de 2013 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Rad. 08001-23-33-004-2012-00173-01 (20l35)Consejero Ponente Dr. Jorge Octavio Ramirez Ramirez Proceso Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Sociedad Dormimundo Ltda.Demandado: U.A.E DIAN



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali,

Auto de Sustanciación N° •

Radicado No: 76001-33-33-008-2013-00318-00

Demandante: JOEL RAMÓN LÓPEZ Y OTROS

Demandado: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE, MUNICIPIO DE

SANTIAGO DE CALI, EMSSANAR Y HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Llamado en garantía: LA PREVISORA S.A.

Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA

CONSIDERACIONES

1. Que mediante Auto Interlocutorio No. 809 de fecha agosto 26 de 2015, este Despacho decretó la práctica de unas pruebas solicitadas tanto por la parte demandante como por las entidades demandadas, a saber:

* PARTE DEMANDANTE:

Prueba Pericial: Solicitó la parte actora enviar a la señora LETICIA CALVO, a los médicos legistas de esta ciudad y a la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, para que evalúen las lesiones padecidas por la demandante, su grado de incapacidad y daño a la vida en relación, de conformidad con los hechos narrados en la demanda.

La prueba fue decretada como solicitud de dictamen pericial, y se le indicó al apoderado que las costas que se generasen por esta prueba serían asumidas en su totalidad por la parte que las solicita, quien deberá proveer las copias respectivas y hacer presentar al afectado a los sitios, fechas y horas que se indiquen.

Oficios: Solicitó que se oficie a la Clínica Rey David, a fin de que remita copia de la historia clínica de la señora LETICIA CALVO, transcrita a máquina, quien ingreso a dicho centro médico, remitida el Hospital Universitario del Valle; la cual fue decretada por este Despacho.

Testimoniales: Solicitó que se hiciera comparecer a los señores SANDRA LIZETH ROSERO, MARÍA CLAUDIA REDONDO GÁLVIZ, LILIANA GRIJALBA VALENCIA, para que depongan respecto de los hechos de la demanda, convivencia y dolor moral que padecieron los demandantes, los cuales podrán ser citados en la carrera 3 # 11-32 edificio Zaccour Of. 616-617.

Se ordenó por este Despacho la práctica de la prueba testimonial y se indicó que los testigos serían citados por intermedio del apoderado judicial.

* PARTE DEMANDADA (HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS)

Oficios: Solicitó el apoderado que se se oficie al Departamento de Estadística y archivo clínico de Red Salud de Oriente ESE, para que se allegue historia clínica # 66925045 de la señora LETICIA CALVO, quien inicialmente fue atendida el 27 de octubre de 2009 y posteriormente el 1 de marzo de 2010; la cual fue decretada por este Despacho.

Testimoniales: Solicitó que se hiciera comparecer a los a los doctores: Dra. CAROLINA RUIZ AYALA, médico general, Dr. ALDEN POOL GÓMEZ ALFÉREZ, médico especialista en cirugía general, Dr. JORGE MILLÁN CIFUENTES, médico especialista en cirugía general, Sra. RUBIELA PALACIOS, auxiliar de enfermería, Dra. Alicia Carolina Lozano, médico especialista en anestesiología, Dr. LUIS EDUARDO MIRANDA GAITÁN, médico

coordinador de servicio de cirugía general, quienes podrán ser ubicados en la carrera 4 # 17-67 barrio san Nicolás, a fin de que depongan sobre los hechos de la demanda, la contestación y en especial sobre el tipo de atención medica — asistencial, brindada a la señora CALVO, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se produjo su evolución, procedimientos y tratamientos a que fue sometida en el Hospital San Juan de Dios.

Se ordenó por este Despacho la práctica de la prueba testimonial y se indicó que los testigos serían citados por intermedio del apoderado judicial.

Pericial: Solicita designar un perito médico especialista en cirugía general, para que previo envió de la historia clínica # 883656 remitida por el Hospital San Juan de Dios, y las otras historias clínicas a que hubiere dado lugar la atención médica de la señora LETICIA CALVO, se rinda dictamen médico pericial resolviendo los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del acápite “DICTAMEN MEDICO PERICIAL” visible a folio 426 del expediente.

Este Despacho consideró necesario instar al apoderado de la parte demanda Hospital san Juan de Dios, para que a su cargo realice y presente la prueba pericial requerida, la cual deberá ceñirse a lo dispuesto en los artículos 218, 219 del CPACA y 226 a 235 del C.G.P., y para lo cual contará con el término de treinta (30) días para su entrega, se le aclaró también, que las costas que genere su práctica serían asumidas en su totalidad por la parte demandada Hospital San Juan de Dios, quien deberá proveer las copias respectivas de la historia clínica o lo que se requiera.

Se le manifestó al apoderado de la parte demandada que de no darse cumplimiento a lo ordenado se entendería desistida la prueba.

* PARTE DEMANDADA (HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE)

Testimoniales: Solicitó que se sirviera recepcionar la declaración de los profesionales de la salud doctores: MAURICIO MILLÁN, cirujano general, GUILLERMO FLÓREZ, cirujano general, ADOLFO GONZÁLEZ, médico general, ALEJANDRA BENAVIDEZ, médico general, DIANA CRISTINA MARULANDA, cirujano general, quienes podrán ser ubicados en la calle 5 # 36-08 de la ciudad de Cali, a fin de que depongan sobre lo que les conste acerca de los hechos de la demanda e ilustren al despacho sobre la materia científica objeto de estudio.

Se ordenó por este Despacho la práctica de la prueba testimonial y se indicó que los testigos serían citados por intermedio del apoderado judicial.

1. Que mediante oficios Nos. MLF 972, 973, 974 y 975 fueron solicitadas por este Despacho las pruebas decretadas.
2. Que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Suroccidente, en respuesta al Oficio No. MLF 972 radicó ante la Oficina de Apoyo un Ofició de No. GRCOPPF-DRSOCCDTE-10366-2016 de fecha julio diecinueve (19) de dos mil dieciséis (2016), en el cual informa al despacho que "...no se cuenta con la documentación necesaria para realizar un análisis completo y objetivo dentro del contexto del caso, que permita dar respuestas al requerimiento de la Autoridad y de esta manera brindar un adecuado soporte técnico - científico a la administración de justicia”, para lo cual requiere del aporte de unos documentos.
3. Que mediante Auto de Sustanciación No. 805 de fecha julio veintiocho (28) de dos mil dieciséis (2016), este Despacho resolvió requerir al apoderado de la parte demandante para que compareciera al Despacho a fin de cumplir con lo solicitado en el oficio reseñado.
4. Que hasta la fecha de expedición de la presente providencia no ha sido aportada ninguna de las pruebas solicitadas, además de que el apoderado de la parte demandante no ha aportado la documentación requerida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En virtud de lo expuesto este Despacho,

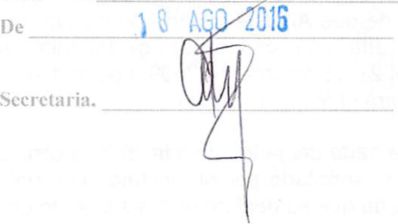
RESUELVE:

1. Requerir por segunda vez a la Clínica Rey David a fin de que Remita copia de la historia clínica de la señora LETICIA CALVO, identificada con cédula de ciudadanía No. 66925045, quien ingresó al centro médico CLÍNICA REY DAVID, remitida del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE, conceptuando sobre el estado en que llegó la paciente, por secretaría se librará el respectivo oficio.
2. Requerir por segunda vez al Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca a fin de que Remita copia auténtica del proceso disciplinario que se adelantó por la queja presentada por la señora LETICIA CALVO, identificada con cédula de ciudadanía No. 66925045, el día 18 de abril de 2013, por secretaría se librará el respectivo oficio.
3. Requerir por segunda vez al Centro de Salud Diego Lalinde, Sede administrativa de la Red de Salud Centro a fin de que Allegue historia clínica No. 66925045 de la Señora LETICIA CALVO, identificada con cédula de ciudadanía No. 66925045, quien inicialmente fue atendida el 27 de octubre de 2009 y posteriormente el 1 de marzo de
4. por secretaría se librará el respectivo oficio.
5. Requerir al apoderado de la parte demandante a fin de que comparezca al Despacho a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses so pena de que se declare el desistimiento de la prueba.
6. Requerir al apoderado de la parte demandada Hospital San Juan de Dios a fin de que de cumplimiento con la prueba solicitada y decretada por este Despacho como prueba pericial a cargo de la entidad a la que representa.
7. Solicitar a la Junta Regional De Calificación De Invalidez Del Valle Del Cauca mediante oficio por Secretaría a fin de que asigne una cita a la Señora LETICIA CALVO, identificada con cédula de ciudadanía No. 66925045, con el fin de que sea evaluada por los daños que se le ocasionaron con los hechos narrados en la demanda, se fije su grado de incapacidad y daño a la vida en relación.
8. Señálese la hora de las nueve de la mañana (09:00 AM) del día veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciséis (2016) para llevar a cabo la audiencia de pruebas de que trata el artículo 181 del CPACA.
9. Requerir a los apoderados de la parte demandante y demandada (Hospital San Juan de Dios y Hospital Universitario del Valle), para que se acerquen al Despacho a fin de que se les entregue los respectivos oficios para la comparecencia de los testigos a la audiencia de pruebas.

Notifíquese,

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

E! auto anterior se notifica por: Estado No.



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali,

Auto Interlocutorio No.

ACCION:

ACCIONANTE

DEMANDADO

VINCULADOS

RADICACIÓN:

DE TUTELA - Incidente de desacato Julián Andrés Mendoza Rivera CAPRECOM EPS

INPEC- CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE JAMUNDÍ; CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2015; UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS y CARCELARIOS - USPEC y; LA FIDU PREVISORA.

2016-00038

1. ANTECEDENTES.

Mediante Sentencia No. 024 del 25 de febrero de 2016, proferida por este Juzgado, en su parte resolutiva ordenó:

*“PRIMERO.- TUTELAR* el derecho fundamental a la salud del señor Julián Andrés Mendoza Rivera identificado con T.D. 3663, en los términos de la parte considerativa de esta providencia. *SEGUNDO.- ORDENAR* al INPEC- CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE JAMUNDÍ y a CAPRECOM en liquidación, que una vez notificados de la presente decisión y en el término de (48) horas, de manera conjunta y coordinada, autoricen y suministren el servicio de salud requerido por el señor Julián Andrés Mendoza Rivera identificado con T.D. 3663, desde el año 2013, de tal forma, que sea tratado por un médico especialista, para que proceda a emitir un diagnostico a los síntomas de salud que presenta y ordene el tratamiento médico correspondiente. *TERCERO.- ADVIÉRTASELE* a INPEC- CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE JAMUNDÍ y a CAPRECOM en liquidación, se abstengan de reiterar la omisión correspondiente a las autorizaciones de las órdenes médicas impartidas por el médico tratante, so pena de hacerse acreedora a las sanciones de Ley. *CUARTO.-* En firme esta sentencia de tutela, y en caso de no ser impugnada remítase a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión *QUINTO.-* Contra el presente fallo procede su impugnación ante el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

(...)"

El Despacho mediante auto interlocutorio No. 307 (fl.2), admitió y avocó el conocimiento del incidente de desacato formulado, igualmente requirió a las partes accionadas a fin de que dieran informe sobre el cumplimiento del fallo emitido por este despacho, para lo cual se libraron los oficios correspondientes (fls. 3-8).

A la notificación, el INPEC guardó silencio; el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015 y La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, respondieron que no es de su competencia la atención en salud de las personas privadas de la libertad y por lo tanto solicitaron su desvinculación dentro del presente trámite incidental (fls.9-43).

De igual forma, indica la apoderada del USPEC que la señora Isabel Cristina

f

Martínez Coral no había tornado posesión del cargo, información que fue corroborada con la entidad, confirmando con la secretaria de Dirección de la entidad (Cristina Pomar, telf. 091-4864130), que la Directora (e), era la señora Claudia Alejandra Gélvez Ramírez hasta el día de ayer - (11-07-16)- y, que a partir de la fecha, -(12-07-16), asumió en el cargo como directora la señora María Cristina Palau Salazar.

Visible a folio 44, el accionante allega escrito, manifestando al despacho que el INPEC no le ha dado cumplimiento al fallo de tutela proferido dentro del trámite de acción de tutela.

Mediante auto interlocutorio No. 610 (fl.45), este despacho judicial dio apertura al incidente de desacato dentro del proceso de la referencia, requiriendo al (i) representante de la Fiduprevisora S.A. en calidad de agente liquidador de CAPRECOM EICE; (ii) al representante del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, (iii) a la Directora General de La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, y (iv) al Director del Centro Penitenciario y Carcelario de Jamundí, para que en un término no mayor a (48) horas, dieran cumplimiento a la sentencia no. 024 del 25 de febrero de 2016 proferida por este Despacho Judicial, dentro del proceso de la referencia.

1. La Fiduprevisora S.A., visible a folios 69 a 70, indica al despacho que para el caso que nos ocupa, ostenta dos calidades, una como agente liquidador de CAPRECOM EICE y otra, como vocera del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015.

Explica como agente liquidador que, de conformidad al Decreto 2519 del 28 de diciembre de 2015, mediante el cual el gobierno nacional ordenó la liquidación de CAPRECOM EICE, sólo puede proferir actuaciones administrativas en caminadas a su liquidación y por lo tanto de conformidad a la Ley, no ostenta ninguna facultad frente a los temas relacionados con la contratación del servicio de salud para la población privada de la libertad (fl.69).

Ahora bien, como Fiduprevisora S.A. vocera del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, indica que existe un contrato de fiducia mercantil suscrito entre el Consorcio en mención (integrado por la Fiduprevisora SA y la Fiduagraria SA) y la USPEC, cuyo objeto consiste en: "administrar y pagar con los recursos dispuestos por el fideicomitente en el Fondo Nacional de las Personas Privadas de la Libertad”.

Aclara que, a través del contrato de prestación de servicios No. 59940-001-

1. se estableció la prestación del servicio de salud a la población carcelaria desde el 30 de diciembre de 2015 entre el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015 y la Fiduprevisora SA en calidad de agente liquidador de CAPRECOM, con el objeto de contratar la prestación del servicio de salud a la población privada de la libertad, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud para la población privada de la libertad por un término de tres (3) meses.

Agrega que debido a la imposibilidad de CAPRECOM en liquidación, de cumplir con la prestación del servicio de salud a la población privada de la libertad, se suscribió entre el Patrimonio Autónomo PAP Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015 y la Fiduprevisora SA, el Otrosí No. 1 al contrato de prestación de servicios No. 59940-001-2015, en el cual se dispuso que CAPRECOM en liquidación no tendrá la facultad para celebrar nuevos contratos para la prestación integral del servicio de salud a la población privada de la libertad en ejecución del contrato No. 59940-001-2015, asumiendo desde el 30 de enero

2

de 2016 dicha contratación el Consorcio.

Finaliza afirmando que, teniendo en cuenta lo expuesto, el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, es competente para contratar la prestación del servicio de salud a la población privada de la libertad y que el INPEC, en el proceso de asignación de citas y traslado para los procedimientos ambulatorios y de otros niveles de complejidad corresponde por competencia al INPEC (fl-70).

La apoderada de CAPRECOM en Liquidación (fls. 71-77), en escrito allegado al plenario, reiteró lo expuesto por la FIDUPREVISORA SA., en razón a los términos en que se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 59940- 001-2015 y el Otrosí No. 1 dentro de dicha relación contractual (fl.73).

1. Por su parte el gerente del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL
2. allega respuesta visible a folios (85-88), manifestando al despacho que el Fondo de Atención en Salud de la Personas Privadas de la Libertad es una cuenta especial de la Nación creada en virtud de la Ley 1709 de 2014, la USPEC suscribió con el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, (...) el contrato de fiducia mercantil no. 363 de 2015 con el objeto de destinar los recurso que reciba la fiduciaria deben destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la atención integral en salud y la prevención de la enfermedad de la PPL a cargo del INPEC (...)” (fl. 85).

Por lo anterior, El Consorcio propone como excepción la de falta de legitimación en la causa por pasiva, sustentando que, no tiene competencia alguna frente a la prestación del servicio médico asistenciales, dado que al Patrimonio Autónomo conformado en virtud del contrato de fiducia mercantil, no le fue asignada ninguna obligación relacionada con la prestación de servicios médicos que por Ley están reservadas a las E.P.S., I.P.S. y las E.S.E., y demás entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social en Colombia, dentro del marco de la Ley 100 de 1993 (fl.85 vuelto).

Agrega el Gerente del Consorcio que es un administrador fiduciario de los recursos del Patrimonio Autónomo Fondo de Atención en Salud de la Personas Privadas de la Libertad, en desarrollo de sus obligaciones contractuales y en virtud de la existencia del Patrimonio Autónomo, por instrucciones del Consejo Directivo del Fondo de Salud, suscribe la contratación de la prestación de los servicios de salud de la población privada de la libertad previamente instruida por la USPEC (...) (fl.87).

Finaliza solicitando, sea desvinculado el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL, dado que no sólo carece de legitimación en la causa por pasiva, sino que además, no ostenta ninguna capacidad jurídica que le permita prestar los servicios de salud y de alimentación controvertidos por el accionante (...). Solicita se requiera al Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí - Sindicados, a efectos de que le preste la atención médica que requiere el accionante (fl.88).

1. De otro lado, la USPEC en escrito visible a folios 89-98, sustenta su defensa dentro del proceso de la referencia en los siguientes términos:

Hace un resumen del trámite surtido dentro del presente trámite incidental ante este despacho judicial, a su vez aclara, que una vez conoció de las pretensiones del actor y debido a la falta de competencia funcional para la prestación del servicio médico a la población privada de la libertad, procedió a

3

oficiar a las entidades competentes sin obtener respuesta.

Precisa que la entidad no fue vinculada dentro del fallo de 25 de febrero de

1. que hoy se presume incumplido, pues ésta entidad no recibió orden alguna, mal podría hoy predicarse desacato de una orden respecto de la cual no fue sujeto pasivo y por lo tanto solicita al despacho declarar la nulidad de todo lo actuado.

En cuanto a la improcedencia del desacato por incompetencia funcional, el apoderado de la USPEC, afirma que el juez de tutela, debe evaluar el comportamiento de la autoridad obligada al cumplimiento de la orden judicial y para poder imponer la sanción de desacato, de dicha evaluación debe resultar de forma inequívoca que la renuencia proviene del dolo o la culpa. Es decir, el incumplimiento del fallo por sí solo no motiva la sanción por desacato, sino que debe estar probado que la autoridad fue negligente y desinteresada en acatarlo.

En este caso, no ha habido incumplimiento por cuanto la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC, no tiene competencia para ordenar el traslado o ubicación de la población privada de la libertad, teniendo en cuenta que dicha función se encuentra asignada otra entidad, tal y como lo hemos venido sosteniendo y ha quedado plenamente demostrado.

La entidad, respecto de la competencia para la prestación y seguimiento del servicio de salud a la población privada de la libertad en los establecimientos de reclusión del orden nacional, reiteró que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC, nunca ha tenido competencia para prestar el servicio de salud POS que venía prestando CAPRECOM EPS, a la población privada de la libertad a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, y en lo que correspondía a los servicios de salud no incluidos en dicho plan, NO POS, dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2496 de 2012, suscribiendo el contrato de seguro No. 341 de fecha 12 de diciembre de 2014, con QBE SEGUROS S.A., con la cual los internos por intermedio del INPEC y CAPRECOM EPS, podían solicitar atención complementaria no contemplada en el sistema POS.

Precisa que hasta el 31 diciembre de 2015, los servicios de salud a la población privada de la libertad le correspondían a CAPRECOM EPS, por cuanto se seguían aplicando las disposiciones del Decreto 2496 de 2012,"Por el cual se establecen normas para la operación del aseguramiento en salud de la población reclusa y se dictan otras disposiciones", que advertían en su parágrafo del artículo 13 sobre la continuidad de la prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad a través de la entidad promotora de salud que los venía garantizando, que venía a ser CAPRECOM EPS, conforme a contratos de administración de recursos y aseguramiento del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que celebró en su momento con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.

Indica en resumen, que dentro de las competencias otorgadas a la Unidad con la Liquidación de CAPRECOM EPS, tal y como se menciona anteriormente, y en atención a lo dispuesto en la Ley 1709 de 2015, se suscribió contrato de Fiducia mercantil No.363 de 2015, entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC y el CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015, cuyo objeto es “Celebrar contrato de Fiducia Mercantil de administración y pagos de los recurso dispuestos por el fideicomitente en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, en el cual se

4

encarga de administrar los dineros y garantizar los pagos dispuestos para la prestación del servicio de salud de las personas privadas de la libertad, con esto se garantiza la continuidad de la prestación de los servicios de médicos a los internos, con lo cual se va mejorar ostensiblemente la prestación del servicio; igualmente el fideicomiso tiene la facultad de suscribir contratos con las IPS y EPS los cuales colaboraban con la prestación eficaz de los servicios de salud.

En esa medida, la atención en salud que se solicita para la población privada de la libertad le corresponde prestarla al CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2015, conforme al contrato de Fiducia Mercantil No. 363 (3-1- 40993), el cual en su numeral 3.3 atinente a las OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS., estableció que le corresponde "5. Contratar los prestadores de servicios de salud para la PPL, privados, públicos o mixtos para la atención intramural y extramural, de baja, mediana y alta complejidad, y otros tipo de servicios a los que la USPEC o el FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD estén obligados de prestar

Finaliza el apoderado de la USPEC, solicitando, desvincular del presente trámite Incidental a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, toda vez que la entidad no tiene la competencia para asumir funciones que están por fuera de lo estipulado en el decreto de su creación, yendo en contra de la Constitución Política de Colombia.

1. El INPEC ha guardado silencio durante el trámite de acción de tutela y de este trámite incidental.
2. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

* Del cumplimiento del fallo de tutela, e incidente de desacato.

La Honorable Corte Constitucional, en Sentencia T - 763 de diciembre 7 de 1998, hizo precisiones sobre el cumplimiento del fallo de tutela, e incidente de desacato, que para resolver el presente caso se estima preciso recordar:

“En primer lugar es indispensable distinguir entre incumplimiento de una sentencia de tutela e incidente de desacato, en cuanto la responsabilidad objetiva es predicable para lo primero pero no para lo segundo, lo normal es que dentro del término que señale el fallo de tutela, la orden sea cumplida. Pero, si excepcionalmente la autoridad responsable del agravio va más allá del término que se señale e incumple, el juez de tutela, al tenor del artículo 27 del decreto 2591 de 1991, debe agotarlos siguientes pasos obligatorios, uno a continuación del otro:

1. Si la autoridad obligada no cumple, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y para que obra el correspondiente procedimiento disciplinario contra el directo responsable del incumplimiento.
2. Si pasan cuarenta y ocho horas a partir del requerimiento al superior y la orden de tutela aún no se cumple, se ordena abrir proceso contra el superior.
3. En el mismo auto que ordene abrir proceso contra el superior, el Juez directamente adoptara todas las medidas para el cabal cumplimiento de la orden. Y para tal efecto mantendrá la competencia hasta tanto este restablecido el derecho.
4. Adicionalmente, el juez encargado de hacer cumplir el fallo PODRA (así lo indica el artículo 27 del decreto 25981 de 1991) sancionar por desacato. Es pues esta una facultad optativa, muy diferente al cumplimiento del fallo y que en ningún instante es supletoria de la competencia para la efectividad de la orden de tutela. Pueden, pues, coexistir al mismo tiempo el cumplimiento de la orden y el tramite del

5

desacato, pero no se pueden confundir el uno (cumplimiento del fallo) con el otro (el trámite de desacato).

Tratándose del cumplimiento del fallo la responsabilidad es objetiva porque no se predica de la autoridad responsable del agravio, sino de su superior y cuando se hubiere requerido al superior para que haga cumplirla orden en la tutela.

Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsable de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva.

Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudieron presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento. Y, si se trata del superior inmediato del funcionario.

Que ha debido cumplir la orden, tratándose de la tutela, adicionalmente ha debido existir una orden del juez requiriéndolo para que hiciere cumplir por el inferior del fallo de tutela, dándosele un término de cuarenta y ocho horas porque así expresamente lo indica el artículo 27 del decreto 2591 de 1991. (Sentencia T - 763 Diciembre 7 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero)”

Entonces, si tratándose del desacato, que no es más que un ejercicio del poder disciplinario y, por ello, la responsabilidad no puede ser objetiva sino subjetiva, el juzgador al decidir si impone o no sanción al infractor, debe examinar las causas por las cuales incumplió la orden de tutela, causas que necesariamente deben derivarse del material probatorio allegado, y en caso de existir motivos que justifiquen tal actitud, deben relevarse de la sanción, pues un desconocimiento de la prueba constituye una violación al debido proceso y por ende una vía de hecho.

* De la indebida integración del contradictorio.

El alto tribunal constitucional respecto de la indebida notificación del trámite de tutela, a una de las partes con interés en la ordenes que allí se imparta, en providencias de los años 2013 y 20161, la H. Corte, indicó que existen dos caminos para que el juez constitucional subsane dicha vulneración al debido proceso; la primera y en un sentido general, es la de declarar la nulidad de todo lo actuado con la consecuencia de retrotaer todas las actuaciones adelantadas. La segunda alternativa que indica la Corte de forma excepcional, es la de integrar al contradictorio a la parte sin notificar, en el momento procesal en que se encuentre la acción constitucional y así evitar afectar desproporcionadamente los derechos fundamentales del accionante, cuyo estado de debilidad debe ser manifiesta.

Al respecto la Corte sostuvo:

Cuando en sede de revisión la Corte advierte la indebida integración del contradictorio, existen dos remedios procesales para subsanarlo. Por un lado, de manera general, una omisión de este tipo implicaría declarar la nulidad de lo actuado, revocar la decisión o decisiones sometidas al examen de la Corte y ordenar la devolución del expediente al juez de primera instancia para que proceda a la vinculación y debida notificación de las partes o interesados, y surta de nuevo las actuaciones pertinentes.

Por el otro, la Corte podría directamente integrar el contradictorio en sede de revisión, toda vez que. en ciertos eventos, retrotraer todas las actuaciones y

1 Auto 065 de 2013 y Auto 071A de 2016.

6

devolver el expediente al juez de primera instancia afectaría desproporcionadamente los derechos fundamentales del accionante. Esta segunda opción se adopta cuando las circunstancias de hecho lo ameritan o se encuentran involucrados derechos fundamentales de personas cuyo estado de debilidad es manifiesto, y cuando la nulidad no haya sido propuesta por las partes (...)"

Con todo, el derecho de defensa y contradicción supone la garantía en cabeza de toda persona inmersa en un proceso judicial o administrativo de presentar pruebas y de controvertir aquellas que se alleguen en su contra. El ejercicio de este derecho se ve limitado cuando no se integra en debida forma el contradictorio, situación que se evidencia en el proceso de tutela, cuando el accionante dirige el amparo en contra de una parte pero existen otras personas o entidades que debieron ser vinculadas al proceso, ya sea por tener un interés directo en la decisión o por ser potenciales destinatarias de las órdenes de protección de derechos fundamentales.

Es obligación del juez constitucional subsanar esa irregularidad porque de lo contrario se vulneraría el derecho al debido proceso e implicaría una verdadera denegación de justicia sobre quienes no pudieron intervenir en el trámite. Cuando esa irregularidad se advierte en sede de revisión la Corte, por regla general, debe declarar la nulidad de lo actuado y devolver el expediente al juzgado que conoció en primera instancia para que este integre debidamente el contradictorio. *No obstante, en algunos casos puede hacerlo directamente en sede de revisión, cuando advierta que devolver el expediente al juez de primera instancia puede comprometer desproporcionadamente los derechos fundamentales del accionante.* (Resaltado fuera de texto)

(...)"

* De la sucesión procesal.

El artículo 68 del Código General del Proceso contempla lo relacionado con la figura de la sucesión procesal, al respecto manifiesta:

Artículo 68. Sucesión procesal.

(...)

Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.

(■■)"

La H. Corte Constitucional en sentencia t-127 de 2016, respecto de la reglamentación existente en el marco jurídico Colombiano para establecer responsabilidades administrativas, en cuanto a la implementación, iniciada a finales del año 2015, del Modelo de Atención en Salud para la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, teniendo en cuenta su proceso de transición y el proceso de liquidación de CAPRECOM, aclaró el panorama, en cuanto a la entidad encargada de la prestación de dicho servicio de salud, precisando sobre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, lo siguiente:

y...;

7

Mediante la ley 1709 de 2014 se reformaron, entre otras, algunas disposiciones de la ley 65 de 1993 -Código Penitenciario y Carcelario-, relativas a la prestación de los servicios de salud de las personas privadas de la libertad.

(...)

La reforma dispuso además, en el articulo 66, que el Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- deben diseñar un modelo de atención en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género para la población privada de la libertad, (...) Para ello creó el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad (...)

De acuerdo con la ley 1709. los recursos del fondo serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta en la cual el Estado tenga más del 90% del capital, (parágrafo 1° art. 66). Fue así como el 23 de diciembre de 2015 se suscribió el contrato de fiducia mercantil núm. 363 de 2015 entre la USPEC y el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015. integrado por la Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A., con el objeto de administrar y pagar los recursos dispuestos por el fideicomitente en el Fondo Nacional de Salud de *las* Personas Privadas de la Libertad.

(...)

En cumplimiento de lo señalado en la ley 1709 de 2004 el Gobierno expidió el decreto 2245 de 2015, con el objeto de reglamentar el esquema para *la* prestación de los servicios de salud de la población privada de libertad bajo *la* custodia y vigilancia del INPEC.

(...)

En desarrollo de lo dispuesto en la ley 1709 de 2014 y el decreto 2245 de 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 5159 de 2015. mediante la cual adoptó el Modelo de Atención en Salud para la población privada de la libertad, diseñado por ese ministerio y por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC (...)

*La Resolución 5159 de 2015 estableció igualmente, en el artículo* 3° *que la* *implementacíón del modelo de atención en salud corresponde a la Unidad de* *Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- en coordinación con el* *Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, para lo cual deben* *adoptar los manuales técnico administrativos que se requieran y adelantar* *los trámites necesarios ante el Fondo Nacional de Salud de las Personas* *Privadas de la Libertad*. *(Resaltado fuera de texto)*

Mediante el decreto 2519 de 2015 del 28 de diciembre de 2015. el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la Caja de Previsión Social Comunicaciones -Caprecom EICE-, proceso que es adelantado por la Fiduciaria La Previsora S.A (art. 6). (...)

El artículo 4° del decreto establece la prohibición para Caprecom de iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social. Sin embargo, aclara que conservará su capacidad jurídica únicamente para realizar los actos, operaciones *y* contratos necesarios en orden a efectuar su pronta liquidación, así como para adelantar las acciones que permitan la prestación oportuna y adecuada del servicio de salud a sus afiliados hasta que se produzca de manera efectiva su traslado y la asunción del aseguramiento por otra Entidad Promotora de Salud.

***De igual forma, dispone que deberá continuar con la prestación de servicios*** ***de salud a la población reclusa del INPEC. con cargo a los recursos del*** ***Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, hasta que***

***esta actividad sea asumida por la USPEC.*** *(Resaltado fuera de texto)*

En virtud de lo anterior, hasta el 31 de diciembre de 2015 la prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad le correspondía a la EPS Caprecom, debido al proceso de liquidación en el que se encuentra inmersa esa entidad.

Posteriormente y con el fin de garantizar la prestación del servicio de salud, la USPEC y el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015 suscribieron un contrato de fiducia mercantil, en el cual se estableció que los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad que recibirá la fiduciaria deben destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la atención integral en salud y prevención de la enfermedad de esa población. Así mismo, se estableció como una de las obligaciones del contratista la de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad.

(...y

* De la transición administrativa para la prestación del servicio de salud de la población privada de la libertad.

Al respecto, la H. Corte Constitucional, manifestó que el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad debe ser garantizado en condiciones de igualdad, no solo porque se encuentra estrechamente vinculado con los derechos a la vida y a la dignidad humana, sino también por la relación especial de sujeción del interno con el Estado y la ausencia de justificación para su limitación dentro del marco general del derecho punitivo.

Sustentó dicho pronunciamiento, reiterando lo manifestado en T-762 de 2015, indicando que el deficiente sistema de salud en las cárceles, que se evidencia por las demoras excesivas en la atención, la ausencia de personal médico en el interior de los centros de reclusión, la ausencia de contratos o el represamiento de las solicitudes de procedimientos y autorización de medicamentos, entre otros, sigue siendo una de las problemáticas estructurales del sector penitenciario y carcelario del país.

**Además, aclaró que, *no pueden las entidades accionadas. específicamente*** ***la USPEC, asegurar que la obligación de ia prestación del servicio de*** ***salud para las personas privadas de la libertad corresponde*** ***exclusivamente al Consorcio. El haber suscrito un contrato de fiducia*** ***mercantil, donde se estableció como una de las obligaciones del*** ***contratista la de garantizar la continuidad en la prestación de los*** ***servicios de salud a la población privada de la libertad, no exonera la*** ***responsabilidad principal a cargo de la USPEC de establecer las*** ***condiciones para gue la entidad fiduciaria contrate la prestación integral y*** ***oportuna de los servicios de salud para esa población: es decir, no*** ***elimina sus deberes como principal obligada.***

1. Sentencia T-127 de 2016.

9

En virtud de lo anterior ordenó, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, como entidad sobre la cual recae la obligación principal de prestación del servicio de salud a la población privada de la libertad, que inicie las actuaciones pertinentes, a través de la EPS que esté prestando el servicio de salud en Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Picota de Bogotá, para que se garantice la atención integral y necesaria en salud de los accionantes y suministre los medicamentos y el tratamiento médico necesario para las patologías que los aquejan. De igual forma, ordenará a la dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Picota de Bogotá que disponga de lo necesario para que a los accionantes les sea prestado el servicio de salud de manera oportuna, adecuada y eficaz. (Resaltado fuera de texto)

Por lo tanto en la sentencia T-127 de 2016, la H. Corte, revocó dos sentencias de tutela del año 2015, en las que los jueces constitucionales habían negado la protección del derecho fundamental a la salud de dos personas privadas de la libertad, por lo cual, ordenó de conformidad al ordenamiento jurídico, al INPEC y al USPEC, vinculadas en sede de revisión, prestar el servicio de salud requerido por los accionantes.

Sumado a lo anterior, la Corte en dicha decisión advierte de forma categórica a las entidades accionadas y vinculadas en sede de revisión, que la transitoriedad de la prestación del servicio de salud a la población carcelaria no puede afectar el goce efectivo del derecho a la salud de esa comunidad, así:

Así mismo, le advertirá al Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Picota de Bogotá, a Caprecom EICE en liquidación, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- que: (i) la transitoriedad no puede afectar bajo ningún punto de vista el goce efectivo del derecho a la salud; (ii) las personas privadas de la libertad no tienen por qué asumir las consecuencias de una transición administrativa, ni los cambios de las autoridades competentes y encargadas de asumir la prestación de ese servicio; y (iii) las autoridades penitenciarias y carcelarias están en la obligación de adoptar todas las medidas que consideren necesarias para garantizar de manera oportuna y efectiva el acceso a los tratamientos, medicamentos y servicios de salud a esa población, con independencia de los trámites administrativos o cambios estructurales que sufra el sistema carcelario. Bajo ese entendido, en ejercicio de sus funciones, deben garantizar en todos los casos el acceso oportuno, adecuado y eficaz a los servicios de salud. (Negrilla fuera de texto)

(...)"

* Del caso concreto.

Los hechos expuestos por el accionante y que motivaron la acción de tutela, fueron los siguientes:

“(...) PRIMERO. Me encuentro recluido en el centro penitenciario de Jamundí, (...) donde tienen contratada a la EPS CAPRECOM para que vele por la salud de la población reclusa.

SEGUNDO. Desde el año 2013, padezco de unos gangleos(sic)en el cuello, axilas, en la parte pélvica y en las articulaciones, motivo por el cual el 28 de agosto de 2013, el 27 de septiembre de 2013, el 02 de mayo de 2014, el 31 de octubre de 2014 y el 06 de febrero de 2015, solicité invocando el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, a los encargados de la EPS CAPRECOM, que fuera valorado por un especialista para recibir un tratamiento de acuerdo al estado de salud que

10

presento.

TERCERO. El 08 y 22 de octubre de 2013, (...) el Subdirector de Estructura 2 del complejo, responde a mis peticiones, indicando que ya se había programado por parte de CAPRECOM EPS la atención médica solicitada.

CUARTO. Los días 26 de octubre y 24 de noviembre de 2015, fui valorado por el médico general Wendy Roa Gil, quien me remitió donde el Urólogo y me ordenó unos medicamentos para cada mes, los cuales me fueron entregados solo en dos oportunidades, lo que ha dilatado el tratamiento.

QUINTO. El 23 de julio de 2014, la administradora de CAPRECOM Dra. Ángela Palacios, me informa que al realizar la consulta en la base de datos de afiliados y teniendo en cuenta la prioridad de mi historia clínica, una vez se cumplan los trámites administrativos, seré atendido de acuerdo a la agenda de la IPS asignada, mientras tanto me prestarían la atención con médico general y el suministro de medicamentos, servicios que desde entonces y hasta la fecha, no me han sido suministrados.

SEXTO. Coloco de presente que debido a la falta de atención médica oportuna, mi estado de salud se ha ido deteriorando (...)"

Este despacho judicial en Sentencia No. 024 del 25 de febrero de 2016, tuteló el derecho fundamental a la salud del señor Julián Andrés Mendoza Rivera, en consecuencia ordenó a las entidades accionadas - INPEC CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE JAMUNDÍ y, a CAPRECOM en LIQUIDACIÓN, la autorización y suministro del servicio de salud requerido por el accionante, desde el año 2013, de tal forma, que sea tratado por un médico especialista, para que proceda a emitir un diagnostico a los síntomas de salud que presenta y ordene el tratamiento médico correspondiente.

Aclara el despacho que, pese haber sido notificadas las dos entidades accionadas, ninguna se pronunció, tal y como quedó consignado en el acápite “RESPUESTA DE LA PARTE ACCIONADA y VINCULADA”3 de la sentencia del 25 de febrero de 2016; en el sentido de dar contestación a las pretensiones de la demanda o informando al despacho de las recientes decisiones administrativas sobre el cambio en la prestación del servicio de salud a la población privada de la libertad, debiendo correr traslado a las entidades encargadas, teniendo en cuenta las disposiciones normativas que existen en cuanto a la competencia administrativa.

De acuerdo al referente jurisprudencial traído al plenario y teniendo en cuenta el estado de salud en el que dice encontrarse el accionante, **(situación que no ha sido controvertida ni abordada por las entidades accionadas o las vinculadas),** la cual empeora teniendo de presente la situación carcelaria por la que atraviesa nuestro país, este despacho considera oportuno precisar que, si bien el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015 y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, no fueron notificados de la acción de tutela promovida por el señor Julián Andrés Mendoza Rivera, esa omisión procesal quedó subsanada con el Auto 307 (fl.2), mediante el cual se les notificó del caso de la referencia, requiriéndoseles para que previo apertura al incidente de desacato dieran cumplimiento a la orden impartida por este despacho en la sentencia 024 de 2016; adjunto a dicho auto se les remitió copia de la sentencia aludida y de los memoriales remitidos por el accionante (fls. 3-7 y 26).

Notificación anterior que fue confirmada por las mencionadas, quienes ejercieron su legítimo derecho a la defensa, manifestando no solo del incidente

3 Visible a folios 22 al 30 y 32, este despacho, notificó a las entidades, en garantía a sus derechos fundamentales de defensa y al debido proceso, se le remitió copia de la admisión de la demanda y del traslado a fin que diera contestación al escrito de tutela y hasta la fecha no han realizado pronunciamiento alguno.

11

de nulidad propuesto por la USPEC, sino que también, de su falta de competencia para la prestación del servicio de salud a la población privada de la libertad (fls. 9-22 y 28-43).

Argumento de defensa -Falta de competencia-, que como bien lo dejó claro la Corte Constitucional, no corresponde al marco jurídico que impera y por lo tanto es deber legal de las entidades accionada y vinculadas, atender la prestación del servicio de salud, en procura de la preservación de los derechos fundamentales de la personas privadas de la libertad.

De acuerdo a lo anterior, en el presente caso se tiene que a la fecha, que las entidades vinculadas INPEC - CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE JAMUNDÍ; EL CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2015; y LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS y CARCELARIOS - USPEC, no han dado cumplimiento a lo resuelto por este despacho en la sentencia de tutela no. 024 del 25 de febrero de 2016.

En este sentido, no encontrando justificación alguna al comportamiento de las mencionadas, cuando habiendo transcurrido un tiempo prudencial no ha atendido con prontitud las órdenes impartidas por esta operadora judicial en el fallo de tutela ya referenciado en líneas que antecede, las entidades se hacen acreedoras a la sanción establecida en la Ley.

1. DECISIÓN

En razón de lo expuesto, este Despacho habrá de imponer a la entidad demandada las condenas previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

En consecuencia, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali,

RESUELVE

PRIMERO.- DECLARAR que el CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2015; LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS y CARCELARIOS - USPEC y El INPEC - CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE JAMUNDÍ en calidad de accionadas, incumplieron con lo dispuesto en la Sentencia No. 024 del 25 de febrero de 2016, proferida por este despacho.

SEGUNDO.- IMPONER al señor Mauricio Iregui Tarquino representante del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, a la señora María Cristina Palau Salazar Directora General de La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, y al señor Carlos Alberto Monroy Guevara Director del Centro Penitenciario y Carcelario de Jamundí, como sanción por el desacato a la Sentencia No. 024 del 25 de febrero de 2016, en la cual se amparó el derecho fundamental a la salud del señor Julián Andrés Mendoza Rivera identificado con T.D. 3663, multa compartida, equivalente a un (1) Salario Mínimo Legal Vigente, que deberán consignar en la cuenta No. 30070000030-4 del Banco Agrario, denominada DTN - Multas y Cauciones - Consejo Superior de la Judicatura, (Según Circular 036 del 25 de febrero de 2002).

TERCERO.- REQUERIR al señor Mauricio Iregui Tarquino representante del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, a la señora María Cristina Palau Salazar Directora General de La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, y al señor Carlos Alberto Monroy Guevara Director del Centro Penitenciario y Carcelario de Jamundí, ordenen a los funcionarios

12

competentes según sus funciones respectivas, dar cumplimiento al fallo proferido por este despacho mediante Sentencia 024 del 25 de febrero de 2016, en la cual se amparó el derecho fundamental a la salud del señor Julián Andrés Mendoza Rivera identificado con T.D. 3663, ordenando a las accionadas, que una vez notificados de la presente decisión y en el término de (48) horas, de manera conjunta y coordinada, autoricen y suministren el servicio de salud requerido por el señor Julián Andrés Mendoza Rivera identificado con T.D. 3663, desde el año 2013, de tal forma, que sea tratado por un médico especialista, para que proceda a emitir un diagnostico a los síntomas de salud que presenta y ordene el tratamiento médico correspondiente.

**CUARTO.- PREVÉNGASE** al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL

1. a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, y al Centro Penitenciario y Carcelario de Jamundí, para que de manera conjunta y coordinada, autoricen y suministren el servicio de salud requerido por el señor Julián Andrés Mendoza Rivera identificado con T.D. 3663, de conformidad a lo ordenado por este despacho judicial en sentencia No. 024 del 25 de febrero de
2. so pena de incurrir en las sanciones previstas en la Ley.

**QUINTO.- ADVERTIR** a CAPRECOM en Liquidación, al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, al Centro Penitenciario y Carcelario de Jamundí y, al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, que las decisiones administrativas adoptadas, en cuanto al modelo de la prestación del servicio de salud a la población privada de la libertad, no debe interrumpir el goce efectivo del derecho a la salud de dicha comunidad.

**SEXTO.-** Consúltese esta providencia con el superior Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591, en efecto suspensivo.

**SÉPTIMO.-** Líbrense los oficios pertinentes para el cumplimiento de lo aquí ordenado.

**OCTAVO.-** Entérese por el medio más expedito a las partes que actuaron en el presente proceso, sobre esta determinación.

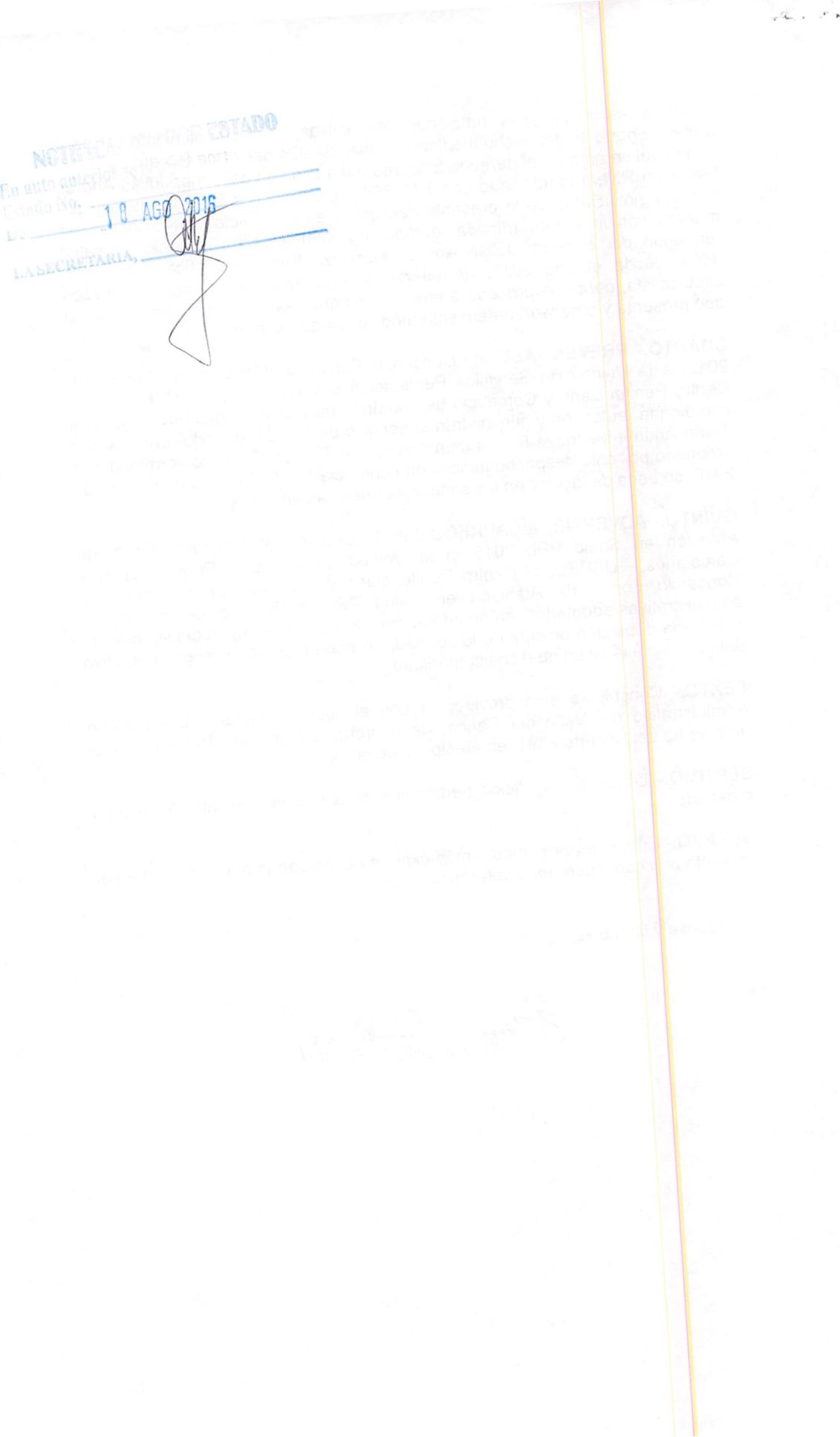
Notifíquese y Cúmplase,

La Juez



JCO.

13



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali, T 7 k. ' - ^

Auto Interlocutorio S.E No. '1\*0

Proceso N°: 76001-33-33-008-2016-00220-00

Demandante: Luis Hernando Guerrero Díaz

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral

El señor Luís Hernando Guerrero Diaz, a través de apoderado judicial, promueve ante este despacho medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter laboral, contra la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual pretende que se declare la nulidad de los actos administrativos que se relacionan a continuación:

® Oficio No. DS-06-12-6-SAJ-004 del 04 de enero de 2016 emitido por la entidad demandada, por medio de la cual negó el reconocimiento de la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013, como factor salarial (folios 37 y 38).

• Resolución No. 2-508 del 03 de marzo de 2016 por medio del cual resolvió el recurso de apelación, y confirmó la decisión adoptada en el oficio No. DS-06-12-6-SAJ-004 del 04 de enero de 2016 (folios 45 a 47).

A título de restablecimiento del derecho solicita que se condene a la Fiscalía General de la Nación, a reconocer dicha bonificación como factor salarial y se incluya así en la liquidación de las prestaciones sociales percibidas por el demandante, a partir dei 01 de enero de 2013, hacía el futuro, como consecuencia de la inaplicación parcial de dicha norma.

En esta medida, existe un interés indirecto en las resultas del proceso, teniendo en cuenta que dicha bonificación judicial también es percibida por esta administradora de justicia, en las mismas condiciones que de la parte actora, atendiendo lo dispuesto en los Decretos 383 de 2013 y 257 de 2015, toda vez, que aludida bonificación aludida constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Así, para esta operadora de justicia existen motivos que pueden parcializar cualquier tipo de decisión que se tome en el presente asunto.

En consecuencia y conforme a lo expuesto me declaro impedida, para conocer del presente asunto, por estar inmersa en la causal prevista de recusación señalada en el numeral 1o del artículo 141 Código General del Proceso, por remisión del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011 al 150 del C.P.C., el cual debe entenderse Código General del Proceso, que reza:

Articulo 141 Causales de Recusación Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, segundo de afinidad o interés directo o indirecto en el proceso.

Cuando la norma se refiere a “interés en el proceso", como causal de impedimento, la jurisprudencia1 lo ha entendido como una expectativa manifiesta por la posible utilidad o menoscabo, no solo de índole patrimonial, sino también intelectual o moral, que la solución del asunto podría acarrear al funcionario judicial o a sus parientes cercanos comprometiendo la imparcialidad del juzgador, tornando imperiosa por parte de esta administradora de justicia la separación del conocimiento de este debate.

Así las cosas, y con el fin dar cumplimiento a las disposiciones que exigen se garantice la adecuada imparcialidad en los procedimientos jurisdiccionales, debo separarme del conocimiento del asunto; teniendo en cuenta que la bonificación judicial, se reconoció en las mismas condiciones para ambas entidades, así:

|  |  |
| --- | --- |
| Decreto 382 del 06 de marzo de 2013  "Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan oirás disposiciones."' | Decreto 383 del 06 de marzo de 2013  ‘ Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.'' |
| “ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen ligiéndose por el decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. ...” (Se destaca). | ARTÍCULO 1. Créase para los seividores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 11Ó de 1993: 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.  " (Se destaca) |

En estas condiciones, el presente asunto será remitido a quien deba reemplazarme, del mismo ramo y categoría que me sigue de conformidad con el artículo 131 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011.

Por lo anterior, el Despacho

RESUELVE:

1. Remitir el presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, al Juzgado Noveno Oral Administrativo del Circuito de Cali, por los motivos expuestos de este proveído.
2. Comunicar a la parte actora que el proceso fue enviado a otro Juzgado.
3. Anotar su salida en el módulo registro de actuaciones del Sistema Justicia Siglo XXI.

Notifíquese y Cúmplase,

I^MICaToÑ D^^TORERff5/

Juez

|  |  |
| --- | --- |
| JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATE NOTIFICACION POR  La suscrita Secretaria certifica que la anteri por anotación en el ESTADO ELECTRÓN los medios informáticos de la Rama Judicia  Se certifica de igual manera que«¡i£- suministraron su dirección electróniÍa\My CAROLINA  Secre | VO ORAL DE SANTIAGO DE CALI ESTADO ELECTRÓNICO  or providencia se notificó a la(s) parte (s) CO No el cual se insertó en  el día 1 q táQ 7C1S  -envió mensaje de datos a quienes  ■NDEZ MURILLO a rip |
|  |  |

' C.S.J. Sala Penal Proceso No. 14104 del 16 de junio de 1SS8

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali,

Auto Interlocutorio N° '\*\?& •

Proceso No.: 76001-33-33-08-2016-00208-00

Demandante: Nestle de Colombia S.A

Demandado: Municipio de El Cerrito

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho-Tributario

El primer suplente del gerente general de Nestle Colombia S.A., a través de apoderado judicial, instaura demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter tributario, contra el Municipio de El Cerrito, en el que pretende la nulidad de la Liquidación de Aforo No. 248-11-28-668 del 08 de mayo de 2015 y la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración, notificada el 28 de marzo de 2016, y como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho, condenando al Municipio de El Cerrito Cesar cualquier proceso de cobro de la suma discutida.

Respecto de la admisión se procede en los siguientes términos:

Es competente este Despacho para asumir el conocimiento del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter tributario en primera instancia por los factores funcional, territorial y de cuantía según lo establece el artículo 104, 155 Núm. 3, 156 numeral 8 y 157, además fue presentada en término según lo dispuesto en el artículo 164, Núm. 2, literal d de la Ley 1437 de 2011.

No se notificará a la Agencia Nacional de la defensa Jurídica, por cuanto no se encuentra una entidad del orden nacional conforme lo establece el Decreto 1365 de 2013.

Una vez reunidos los requisitos legales establecidos en los artículos 162,166, el despacho procederá a la admisión de la demanda en los términos del artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia se,

DISPONE:

1. Admítase el Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho-Tributario, promovida a través de apoderado judicial, por el primer suplente de Nestle Colombia S.A. contra el Municipio de El Cerrito.
2. Notifíquese por estado al demandante.
3. Notificar Personalmente a los siguientes sujetos procesales:

* Representante legal del Municipio de El Cerrito o a quien o a quien haya delegado la facultad de recibir notificaciones.
* Agente del Ministerio Público delegado ante este despacho

1. La notificación que se surtirá en la forma y términos señalados en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, efectuándose traslado a las partes por el término de 30 días establecido en el artículo 172 de la enunciada Ley. Para tal evento las copias de la demanda y sus anexos quedarán en Secretaría a disposición de los notificados.
2. Ordenase a la parte demandante depositar por concepto gastos del proceso la suma de cuarenta mil pesos ($40.000,oo), a favor del Juzgado en la cuenta No. 469030064141 Convenio No. 13193, del Banco Agrario de Colombia, para lo cual se concede un plazo de tres (3) días, so pena de dar aplicación al artículo 178 de la Ley 1437 de 2011
3. Con la contestación de la demanda se deberá aportar todas las pruebas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer, así como la totalidad del expediente administrativo que contenga los actos preparatorios y antecedentes de la actuación objeto del presente litigio y que se encuentran en su poder. La inobservancia de estos deberes constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto. (Artículo 175 C.P.A.C.A)
4. Reconocer personería para actuar como apoderada de la parte demandante a la Doctora Adriana María Nassar Hernández identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.018.839 y la tarjeta de abogado No. 71.340 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el poder a ella otorgado. Igualmente se le reconoce poder al apoderado judicial Dr. Juan Carlos Salazar Torres identificado con cédula de ciudadanía No. 79.154.245 y portador de la tarjeta profesional No. 38.501. Se advierte que no podrán actuar simultáneamente.

Notifíquese y Cúmplase,

M^NICA LONDOÍ



Juez

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali, '¡2 AGO 2015

Auto Interlocutorio No.

Proceso No.: 76001-33-33-008-2016-00205-00

Demandante: Ana Leticia Mejía Valencia

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - U.G.P.P.

La señora Ana Leticia Mejía Valencia, por conducto de apoderado judicial, solicita que se condene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- U.G.P.P., a reconocer y pagar pensión de sobrevivientes, la cual fue negada a través de la Resolución No. UGM 034282 del 21 de febrero de 2012.

Ahora bien, se advierte que la presente demanda fue instaurada en la jurisdicción ordinaria - laboral, y mediante la providencia No. 2598 del 08 de julio de 2016, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, rechazó la demanda por falta de jurisdicción y ordenó la remisión de la actuación a esta jurisdicción.

Por lo anterior, deberá adecuar la demanda, determinando cuál es el medio de control que pretende ejercer, atendiendo lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, normatividad que entró en vigencia el 02 de julio de 2012, en relación al tema el H. Consejo de Estado, ha precisado frente al asunto:

‘La vigencia de la Ley 1437 de 2011 se estableció para el 02 de julio de 2012, es decir, transcurrido un término de dieciocho (18) mes de expedición, con el propósito de que en ese lapso se hicieran presupuéstales, estructurales, orgánicos y pedagógicos necesarios debida implementación. El articulo 308 ibidem así lo señala:

"Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, asi como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior."

"En armonía con el precepto anterior, el artículo 309 ejusdem derogó, entre otras normativas, el Decreto Ley 01 de 1984:

"Artículo 309. Derogaciones. Deróganse a partir de la vigencia dispuesta en el artículo anterior todas las disposiciones que sean contrarias a este Código, en especial, el Decreto 01 de 1984 (...)".

“Como se advierte, las disposiciones transcritas hacen relación a los efectos de la vigencia de la ley procesal nueva que introduce modificaciones a la organización judicial, a los procedimientos y procesos, y a las competencias, esto es. determinan lo concerniente a la eficacia del nuevo código en el tiempo.

"Recuérdese que para resolver los conflictos suscitados por el tránsito de legislaciónl, la regla general es que la norma nueva rige hacia el futuro, al porvenir, lo que comporta que se aplica a los hechos producidos a partir de su nacimiento y hasta el momento de su derogación. La excepción es que la ley sea retroactiva, es decir, tenga fuerza para regular hechos ocurridos en el pasado o situaciones jurídicas pretéritas, o sea con anterioridad a su vigencia.

‘En el caso de las leyes procesales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y por tratarse de normas imperativas orden público, estas se aplican con efecto general e inmediato tanto a los procesos que se promuevan como a los procesos en trámite desde que comienzan a regir, sin perjuicio de que ciertas actuaciones iniciadas con antelación a su expedición, como los recursos interpuestos, la práctica de las pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias inicia los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, culminen al amparo de la ley procesal antigua, que tiene respecto de estas un efecto ultractivo o de supervivencia, es decir, conserva su fuerza vinculante para todas esas situaciones jurídicas y hasta su finalización.

“Sin embargo, observa la Sala que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo fijó una regla de tránsito de legislación diferente y especial a la general prevista en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, para evitar el conflicto que en el tiempo se pudiera presentar con ocasión de la reforma.

"Como se anotó, el articulo 308 dispuso, de una parte, su aplicación con efecto general e inmediato a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren desde el 2 de julio de 2012; y de otra, reservó la fuerza obligatoria de la ley antigua para las situaciones jurídicas surgidas con anterioridad a esa fecha pero que no se hubiesen agotado en ese momento. otorgándole un efecto ultractivo hasta su terminación.

'En conclusión, el nuevo código únicamente se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a las situaciones enteramente nuevas, nacidas con posterioridad a su vigor, y la ley antigua, en este caso el Decreto Ley 01 de 1984 y las normas que lo modifiquen o adicionen, mantienen su obligatoriedad para las situaciones jurídicas en curso, independientemente del momento en que culminen.

Así pues, deberá dar estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 162 del C.P.A.C.A. que dispone que ios hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones deben estar debidamente determinados. Partiendo de lo anterior, es claro que la descripción de los hechos debe ser organizada y orden cronológico sin que pueda conllevar a equívocos, pues sustentan las pretensiones y hace parte del asunto puesto en consideración.

Es de suma importancia que los fundamentos de derecho de las pretensiones, cuando se trate de la nulidad de un acto administrativo deberán indicar las normas violadas y explicarse el concepto de la violación, lo cual constituye uno de los requisitos más importantes de la demanda, habida cuenta que deberá invocar para tal efecto la normatividad y sustentación de los cargos, que estima vulnerados, evidenciando asi la ilegalidad de los actos que llegare a censurar, de este modo podrá hacer alusión a las decisiones adoptadas por el Alto Tribunal de esta jurisdicción, que se relacionen con el tema que pondrá en consideración de esta administradora de justicia.

Para una debida proposición jurídica completa de los actos administrativos, el artículo 163 de la Ley 1437 de 2011, establece que la formulación de las pretensiones deberá individualizarse con toda precisión.

Consejo de Estado - Sala de Consulta, veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014) Radicación interna: 2184 Número Único: 11001-03-06-000-2013-00517-00

Adicionalmente se observa que la demanda no contiene el lugar y dirección  
de las partes y el buzón electrónico para notificaciones judiciales de la  
entidad demandada, con el objeto de efectuar la notificación electrónica, tal  
como lo prevé el numeral 7 del artículo 162 y 167 Ib.

En cuanto al requisito de procedibilidad descrito en el artículo 161 de la Ley  
1437 de 2011, es pertinente resaltar el pronunciamiento del H. Consejo de  
Estado2, en el que sostuvo, que los asuntos de índole netamente laboral  
donde se debaten derechos irrenunciables e intransigibles, no son  
susceptibles de conciliación. En consecuencia, no se ahondará sobre éste  
aspecto en el presente asunto.

En este sentido, la demanda habrá de ordenarse la adecuación de la  
demanda, con el objeto de que subsane las falencias descritas, aportando  
las respectivas copias para la entidad demandada, así como el archivo  
magnético. Para tal efecto, se concederá el término de diez (10) días.

En consecuencia, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial  
de Cali, RESUELVE:

1. AVOCAR conocimiento del presente asunto.
2. Concédase el término de diez (10) a la parte actora con el fin de que  
   adecúe la demanda, y dé estricto cumplimiento a lo ordenado en los  
   artículos 161 a 167 del C.P.A.C.A., so pena de rechazo, de conformidad  
   con el artículo 170 Ib.
3. Reconózcase personería para actuar como apoderado de la parte  
   demandante al doctor Hernando Giraldo Duque, identificado con la  
   cédula de ciudadanía No. 14.977.199 y portador de la tarjeta  
   profesional de abogado No.42.424 del Consejo Superior de la  
   Judicatura, en los términos del mandato a él otorgado.

Notifíquese y Cúmplase,

IONICA LONDOÑO FORERO  
Juez

|  |  |
| --- | --- |
| JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO NOTIFICACION POR ES  La suscrita Secretaria certifica que la ant parte (s) por anotación en el ESTADO ELE se irjs^rtó. pgn - ^os medios informát  Se certifica de igual manera que ✓se er suministraron su dirección electrónica.)  CAROLINA HERJ^W Secretar | ORAL DE SANTIAGO DE CALI TADO ELECTRÓNICO  Brior providencia se notificó a la(s) ICTRÓNICO No. el cual eos de la Rama Judicial el  f/ió mensaje de datos a quienes  /  JEZ MURILLO a y |
| / |  |



Consejo de Estado - C.P Alfonso Vargas Rincón -Septiembre 1 de 2009/ Radicación 11001031500020090081700

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali,

Auto Interlocutorio N° -I bA.

Proceso No.: 76001-33-33-08-2016-00213-00

Demandante: Serviimportaciones S.A.S.

Demandado: Municipio de El Cerrito

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho-Tributario

El representante legal de la sociedad Servicios e Importaciones S.A.S., a través de apoderado judicial, instaura demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter tributario, contra el Municipio de El Cerrito, en el que pretende la nulidad de la Resolución No. 248-11-28-828 de julio 31 de 2015 y la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración, y como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho, declarando que la sociedad no está obligada a presentar y pagar el impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de El Cerrito.

Respecto de la admisión se procede en los siguientes términos:

Es competente este Despacho para asumir el conocimiento del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter tributario en primera instancia por los factores funcional, territorial y de cuantía según lo establece el artículo 104, 155 Núm. 3, 156 numeral 8 y 157, además fue presentada en término según lo dispuesto en el artículo 164, Núm. 2, literal d de la Ley 1437 de 2011.

No se notificará a la Agencia Nacional de la defensa Jurídica, por cuanto no se encuentra una entidad del orden nacional conforme lo establece el Decreto 1365 de 2013.

Una vez reunidos los requisitos legales establecidos en los artículos 162,166, el despacho procederá a la admisión de la demanda en los términos del artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia se,

DISPONE:

1. Admítase el Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho-Tributario, promovida a través de apoderado judicial, por el representante legal de Servimportaciones S.A.S. contra el Municipio de El Cerrito.
2. Notifíquese por estado al demandante.
3. Notificar Personalmente a los siguientes sujetos procesales:

* Representante legal del Municipio de El Cerrito o a quien o a quien haya delegado la facultad de recibir notificaciones.
* Agente del Ministerio Público delegado ante este despacho.

1. La notificación que se surtirá en la forma y términos señalados en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, efectuándose traslado a las partes por el término de 30 días establecido en el artículo 172 de la enunciada Ley. Para tal evento las copias de la demanda y sus anexos quedarán en Secretaría a disposición de los notificados.
2. Ordenase a la parte demandante depositar por concepto gastos del proceso la suma de cuarenta mil pesos ($40.000,oo), a favor del Juzgado en la cuenta No. 469030064141 Convenio No. 13193, del Banco Agrario de Colombia, para lo cual se concede un plazo de tres (3) días, so pena de dar aplicación al artículo 178 de la Ley 1437 de 2011
3. Con la contestación de la demanda se deberá aportar todas las pruebas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer, así como la totalidad del expediente administrativo que contenga los actos preparatorios y antecedentes de la actuación objeto del presente litigio y que se encuentran en su poder. La inobservancia de estos deberes constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto. (Artículo 175 C.P.A.C.A)
4. Reconocer personería para actuar como apoderado de la parte demandante al Doctor Víctor Hugo Becerra Hermida identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.892.103 y la tarjeta de abogado No. 145.940 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el poder a él otorgado.

Notifíquese y Cúmplase,



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Auto Interlocutorio No.

Santiago de Cali, ? AGO ¿úiS

Proceso No: 008 - 2015 — 00277 - 00

Demandante: JUAN MANUEL DUQUE MAYORGA

Demandado: CAPRECOM EPS- EMSSANAR E.P.S.

Acción: Incidente de Desacato

Mediante Sentencia no. 215 del 15 de septiembre de 2015, este Despacho judicial, en su parte resolutiva ordenó:

"(■■■)

*PRIMERO.- TUTELAR* el derecho Integral a la salud del señor Juan Manuel Duque Mayorga identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.493.994, en los términos de la parte considerativa de esta providencia. *SEGUNDO.- ORDENAR* a CAPRECOM EPS-S, que en el término de cuarenta y ocho horas (48), una vez notificada de la presente sentencia, restablezca el servicio de salud al señor Juan Manuel Duque Mayorga identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.493.994 y en consecuencia autorice y entregue los medicamentos, insumos y realice los procedimientos médicos ordenados por el médico tratante, estén o no en el POS, de acuerdo al cuadro clínico que presenta el accionante “Desnutrición Proteicocalorica Severa, debe utilizar pañales, tiene escaras en su cuerpo, sufre de incontinencia, es parapíéjico y sufre de calambres. *TERCEROTERCERO.- INAPLIQUESE* la excepción contenida en la Resolución 5521 de 2013 artículo 130, en cuanto a los tratamientos, medicamentos e insumos médicos, requeridos por el señor Juan Manuel Duque Mayorga identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.493.994. *CUARTO.- DESE* cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del numeral 2 artículo 7 de la Resolución No. 1479 del 06 de mayo de 2015, respecto al pago de los servicios o tecnologías prestados, sin cobertura en el POS. *QUINTO.-. NIÉGUENSE* las peticiones sobre ordenes futuras e indeterminadas *SEXTO.-* En firme esta sentencia de tutela, y en caso de no ser impugnada remítase a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión *SÉPTIMO.-* Contra el presente fallo procede su impugnación ante el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991

(..y

El Despacho mediante auto interlocutorio No. 408 (fl.5), admitió y avocó el conocimiento del incidente de desacato formulado, igualmente requirió a la parte accionada a fin de que diera informe sobre el cumplimiento del fallo emitido por este despacho, para lo cual se libró el oficio correspondiente (fls.6- 7).

Una vez notificada de la providencia mencionada, la entidad accionada allegó memorial explicando a (fls. 8-10 y 19-21), que:

“(...) Al incidentalista se le ha brindado el acceso al servicio público esencial a la salud (...).

EMSSANAR EPS asegura el tratamiento médico requeridos por los usuarios que se encuentren dentro del plan obligatorio de salud (...)



(...) que el día 27 de mayo de 2016, se acercó a las instalaciones de EMSSANAR EPS el accionante con ordenes médicas de los servicios médicos de silla de ruedas y cojín, lo cuales fueron autorizados mediante la orden de servicio no. 2016000987884 de fecha mayo 27 de 2016 para la IPS CIMEX.

(...) el accionante no allegó orden médica del servicio de colchón, tal como lo requiere dentro del incidente de desacato, por ello el mismo no se autorizó, debido a que ninguna prestadora de salud puede autorizar servicios sin que medie prescripción médica (...)

Bajo este entendido, está demostrado que nuestra entidad de ninguna manera ha sido reticente a la obediencia de sus deberes constitucionales, pues garante de la prestación del servicio de salud y en armonía con los tratados internacionales sobre Derecho Humanos ratificados por Colombia, así mismo jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la salud, y cumplidor de sus deberes ha formalizado la prestación de los servicios médicos requeridos, de acuerdo a los lineamientos establecidos por los médicos tratantes.

(...) respetuosamente solicito no sancionar por desacato y archivar las presentes diligencias, debido a que con la información dada y la documentación adjunta está demostrado el compromiso de nuestra entidad con la prestación de los servicios requeridos. Constituyéndose así el cumplimiento al mandato judicial.

Posteriormente, el despacho logró establecer comunicación con el accionante, quien manifestó no haber recibido lo insumos médicos ordenados por el médico tratante (silla de ruedas y cojín antiescara), de igual forma, radicó memorial y anexos (fl.26 - 28), en donde comunica que, pese haber sido ordenado por el médico tratante el colchón antiescara, una funcionaría de EMSSANAR le indicó que debía presentar una nueva acción de tutela, y agrega que, le están negando el transporte en ambulancia para las citas médicas.

En tal sentido y conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, como quiera que no se ha demostrado el cumplimiento de la sentencia No. 215 del 15 de septiembre de 2015, proferida por este despacho judicial, se procede a iniciar INCIDENTE DE DESACATO.

Así las cosas, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali,

DISPONE:

PRIMERO: Dar apertura al Incidente de Desacato en contra del señor Carlos Fajardo Pabón y/o quien haga sus veces, en calidad de representante legal de LA ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO EMSSANAR E.S.S., para que en un término no mayor a (48) horas, se sirvan dar cumplimiento a la sentencia no. 215 del 15 de septiembre de 2015 proferida por este Despacho Judicial.

SEGUNDO: Córrase traslado del presente incidente por el término de tres (03) días, conforme al artículo 52 del Decreto 2591 y el inciso segundo (2) del artículo 129 del Código General del Proceso, para que la accionada LA ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO EMSSANAR E.S.S., explique las razones por las cuales no ha acatado la orden de tutela, tal como lo denuncia el accionante JUAN MANUEL DUQUE MAYORGA.

TERCERO: Notífíquese personalmente al señor Carlos Fajardo Pabón y/o quien haga sus veces, en calidad de representante legal de LA ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO EMSSANAR E.S.S.,

2

\

de este auto por el medio más expedito y eficaz allegando copia del mismo y del memorial del accionante, notificación que se surtirá a través del correo electrónico institucional de la parte accionada, adicionalmente se libraran los oficios de rigor correspondientes, conforme al artículo 612 del Código General del Proceso y el articulo 16 del Decreto 2591.

Notifíquese y Cúmplase,



JCO.

3

r



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali

Auto Interlocutorio S.E N°

Proceso No.: Demandante: Demandado: Acción:

008-2014- 00317-00  
Hernán Pérez Romero

Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional  
Comisiones

Fue allegada solicitud de comisión, por parte del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Villavícencio ante el medio de reparación directa, a fin de que este despacho proceda a recibir la recepción del testimonio del señor José Adonay Guerrero Avendaño.

Conforme a lo anterior, para los fines del Despacho Comisorio, debe atemperarse a lo consagrado por el artículo 171 del CGP, por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, que establece:

Artículo 171. Juez que debe practicarlas pruebas.

El juez practicará personalmente todas las pruebas. Si no lo pudiere hacer por razón del territorio o por otras causas podrá hacerlo a través de videoconferencia, teleconferencía o de cualquier otro medio de comunicación que garantice la inmediación, concentración y contradicción.

*Excepcionalmente, podrá comisionar para la práctica de pruebas que deban* *producirse fuera de la sede del juzgado y no sea posible emplear los medios* *técnicos indicados en este artículo.*

Es prohibido al juez comisionar para la práctica de pruebas que hayan de producirse en el lugar de su sede, así como para la de inspecciones dentro de su jurisdicción territorial.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia podrá comisionar cuando lo estime conveniente.

Las pruebas practicadas en el exterior deberán ceñirse a los principios generales contemplados en el presente código, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales vigentes.” (Resaltado fuera del texto original)

En razón a lo anterior, teniendo claro que la comisión sólo procede de manera excepcional, en tratándose de la práctica de una prueba fuera del territorio, le es

dable al juez practicar las diligencias a través del sistema de videoconferencia, teleconferencia u otro medio de comunicación que garantice los derechos de las partes, a la voz del artículo 171 del CGP, por lo tanto, resulta improcedente el pedimento ya indicado.

Cabe resaltar que, este despacho ha adelantado el respectivo trámite en otras oportunidades para llevar a cabo videoconferencia, con la ayuda respectiva de la respectiva Dirección de Administración Judicial, a fin de obtener los instrumentos tecnológicos necesarios para cumplir con esa medida.

Por lo expuesto anteriormente, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del circuito judicial de Santiago de Cali,

1. DEVOLVER el expediente la comisión propuesta, con los insertos de rigor, por las razones aquí expuestas, a fin de que el juzgado de origen realice las gestiones necesarias para recepcionar el testimonio del señor José Adonay Guerrero Avendaño a través del sistema de videoconferencia, teleconferencia o de cualquier otro medio de comunicación que garantice la inmediación, concentración y contradicción.

Notifíquese y Cúmplase,

RESUELVE:



Juez

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali, nueve (09) de agosto de dos mil dieciséis (2016)

Auto Interlocutorio N0^\*

Proceso No.: 76001-33-33-008-2016-00223-00

Demandante: Luz Marina Galviz García

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral

La señora Luz Marina Galviz García, a través de apoderado judicial instaura demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, contra la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución No. 338025 del 28 de octubre de 2015, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición impetrada contra la Resolución No. 253682 del 20 de agosto de 2015, y ordenó reliquidar la pensión, con base en lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, promediando para la liquidación de dicha prestación económica los últimos diez (10) años de servicios.

A título de restablecimiento, solicita la reliquidación pensional con inclusión de la totalidad de factores salariales, devengados durante el último año de servicios, en aplicación a lo previsto en la Ley 33 de 1985.

Respecto de la admisión se procede en los siguientes términos:

Es competente este Despacho para asumir el conocimiento del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter Laboral en primera instancia por los factores funcional y de cuantía según lo establece el artículo 104 núm. 4, 155 núm. 2, 156 y 157, además fue presentada en término según lo dispuesto en el artículo 164, núm. 1. literal c) de la Ley 1437 de 2011.

En cuanto al requisito de procedibilidad descrito en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, es pertinente resaltar el pronunciamiento del H. Consejo de Estado1, en el que sostuvo, que los asuntos de índole netamente laboral donde se debaten derechos irrenunciables e intransigibles, no son susceptibles de conciliación. En consecuencia, no se ahondará sobre éste aspecto en el presente asunto.

Para efectos de la notificación personal de este proveído a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no habrá lugar al envío físico de la demanda, al tenor de lo dispuesto en el parágrafo del articulo 3o del Decreto 1365 de 2012.2

1 Consejo de Estado - C.P: Alfonso Vargas Rincón -Septiembre 1 de 2009/ Radicación-

11001031500020090081700.

Decreto 1365 de 2012 Articulo 3. Notificación de autos admisorios y de mandamientos de pago a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La notificación a la que se refiere el inciso 6 del articulo 612 de la Ley 1564 de 2012 de autos admisorios de demanda y de mandamientos de pago, únicamente será procedente cuando se trate de procesos donde se encuentren involucrados intereses litigiosos de la Nación, en los términos previstos en el parágrafo del articulo 2 del Decreto Ley 4085 de 2011 y el presente Decreto.

"Parágrafo. Para efectos de las notificaciones personales que se deban realizar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se entenderá que el correo electrónico cumple los mismos propósitos que el servicio postal

Una vez reunidos los requisitos legales establecidos en los artículos 162,166, el despacho procederá a la admisión de la demanda en los términos del artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia se,

DISPONE:

1. Admítase el Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho-Laboral, promovida a través de apoderado judicial, por la señora Luz Marina Galviz García, contra la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-
2. Notifíquese por estado a la parte actora.
3. Notificar Personalmente a los siguientes sujetos procesales:

* Representante Legal de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES- o a quien haya delegado la facultad de recibir notificaciones.
* Agente del Ministerio Público delegado ante este despacho.
* Al Representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, (artículo 197 C.P.A.C.A., parágrafo del artículo 3o del Decreto 1365 de 2012)

1. La notificación que se surtirá en la forma y términos señalados en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, efectuándose traslado a las partes por el término de 30 días establecido en el artículo 172 de la enunciada Ley. Para tal evento las copias de la demanda y sus anexos quedarán en Secretaría a disposición de los notificados.
2. Ordenase a la parte demandante depositar por concepto gastos del proceso la suma de cuarenta mil pesos ($40.000,oo), a favor del Juzgado en la cuenta No. 469030064141 Convenio No. 13193, del Banco Agrario de Colombia, para lo cual se concede un plazo de tres (3) días, so pena de dar aplicación al artículo 178 de la Ley 1437 de 2011
3. Con la contestación de la demanda se deberá aportar todas las pruebas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer, así como la totalidad del expediente administrativo que contenga los actos preparatorios y antecedentes de la actuación objeto del presente litigio y que se encuentran en su poder. La inobservancia de estos deberes constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto. (Artículo 175 C.P.A.C.A)
4. Reconózcase personería para actuar como apoderada de la parte demandante al doctor Mario Orlando Valdivia Puente, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.783.070 y portadora de la tarjeta

autorizado para enviar la copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, en los términos del artículo 197 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo En estos casos, no será necesaria la remisión física de los mencionados documentos''

profesional de abogado No. 63.722 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del mandato a él otorgado, En atención a lo previsto en el articulo 74 del C.G.P.

Notifíquese y Cúmplase,

•NICA LONDONO FORERO

Juez

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTIAGO DE CALI NOTIFICACION POR ESTADO ELECTRÓNICO

La suscrita Secretaria certifica que la anterior providencia se notificó a la(s)

parte (s) por anotación en el ESTADO ELECTRÓNICO No. el cual

se insertó en los medios informáticos de la Rama Judicial el

día ^ r Ann 2016 .

Se certifica de igual maner.

suministraron su dirección el

CAROLIN/

Secr

se envió mensaje de datos a quienes

NDEZ MURILLO

e ta ría



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali,

Auto de Interlocutorio N°

Proceso No.: 008-2016-00194-00

Demandante: Luis Antonio Descange Genoy

Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho-laboral

El señor Luis Antonio Descange Genoy, a través de apoderado judicial, instaura demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con el fin que se declare nulidad de del acto administrativo No. 0004329 del 26 de enero del 2016 así como el oficio No. 15674 del 11 de marzo de 2016 y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada, la reliquidación de la asignación dándole aplicación al artículo 16 del decreto 4433 de 2004, sobre la prima de antigüedad, liquidar la asignación de retiro incrementándola en un 60% y la inclusión respectiva de la partida del subsidio familiar.

Debe hacerse claridad que los actos administrativos demandado aunque fue expedido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-Cremil, en cuanto a la pretensión que va dirigida al reajuste de la asignación de retiro para el incremento del 60%, se podría señalar, que resulta necesario la vinculación de la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por cuanto, el demandante, pretende el pago de un reajuste, que debió ser percibido durante el servicio activo, en aras de lograr la integración del contradictorio, y no lesionar los intereses de una entidad que puede verse afectada sustancialmente, se vinculará a la Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, a la voz del artículo 61 del CGP, por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

Respecto de la admisión se procede en los siguientes términos:

Es competente este Despacho para asumir el conocimiento del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter Laboral en primera instancia por los factores funcional, territorial y de cuantía según lo establece el artículo 104 Núm. 4, 155 Núm. 2, 156 y 157, además fue presentada en término según lo dispuesto en el artículo 164, Núm. 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011.

En el expediente, obra a folio 24 del expediente, constancia de conciliación prejudicial en los términos del numeral 1o del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011.

Para efectos de la notificación personal de este proveído a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no habrá lugar al envío físico de la demanda, al tenor de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 3o del Decreto

1365 de 2012.1

Una vez reunidos los requisitos legales establecidos en los artículos 162,166, el despacho procederá a la admisión de la demanda en los términos del artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia se,

DISPONE:

1. Admítase el Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho-Laboral, promovida a través de apoderado judicial, por el señor Luis Antonio Descange Genoy, contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-Cremil y a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional (vinculado).
2. Notifíquese por estado al demandante.
3. Notificar Personalmente a los siguientes sujetos procesales:

* Representante Legal de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional o a quien haya delegado la facultad de recibir notificaciones.
* Representante Legal de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares o a quien haya delegado la facultad de recibir notificaciones.
* Agente del Ministerio Público delegado ante este despacho.
* Al Representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1. La notificación que se surtirá en la forma y términos señalados en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 612 del Código General del Proceso, efectuándose traslado a las partes por el término de 30 días establecido en el artículo 172 de la enunciada Ley. Para tal evento las copias de la demanda y sus anexos quedarán en Secretaría a disposición de los notificados.
2. Ordenase a la parte demandante depositar por concepto gastos del proceso la suma de cuarenta mil pesos ($40.000,oo), a favor del Juzgado en la cuenta No. 469030064141 Convenio No. 13193, del Banco Agrario de Colombia, para lo cual se concede un plazo de tres (3) días, so pena de dar aplicación al artículo 178 de la Ley 1437 de

2011.

1. Con la contestación de la demanda se deberá aportar todas las pruebas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer, así como la totalidad del expediente administrativo que contenga los actos

’ “Decreto 1365 de 2012 Articulo 3. Notificación de autos admisorios y de mandamientos de pago a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La notificación a la que se refiere el inciso 6 del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012 de autos admisorios de demanda y de mandamientos de pago, únicamente será procedente cuando se trate de procesos donde se encuentren involucrados intereses litigiosos de la Nación, en los términos previstos en el parágrafo del artículo 2 del Decreto Ley 4085 de 2011 y el presente Decreto.

“Parágrafo. Para efectos de las notificaciones personales que se deban realizar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se entenderá que el correo electrónico cumple los mismos propósitos que el servicio postal autorizado para enviar la copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, en los términos del artículo 197 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En estos casos, no será necesaria la remisión física de los mencionados documentos"

preparatorios y antecedentes de la actuación objeto del presente litigio y que se encuentran en su poder. La inobservancia de estos deberes constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto. (Artículo 175 C.P.A.C.A)

1. Reconózcase personería para actuar como apoderada de la parte demandante a la doctora Carmen Ligia Gómez López, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.727.844 y portadora de la tarjeta profesional de abogado No. 95.491 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del mandato a ella otorgado.

Notifíquese y Cúmplase,

Juez



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali,

Auto interlocutorio S.E No. ^

Proceso No. Demandante: Demandado: Medio de control:

008-2015-00179- 00

María Eugenia Reina Duque

Municipio de Santiago de Cali

Nulidad y Restablecimiento del Derecho-Laboral

ANTECEDENTES

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede este Despacho a resolver la solicitud de desistimiento efectuado por la apoderada sustituía de la parte demandante.

Desistimiento de pretensiones

Sobre esta temática, el artículo 314 del Nuevo Código General del Proceso por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, dispone que:

Artículo 314. Desistimiento de las pretensiones. *El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia* *que ponga fin al proceso (...)*

El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia (...)

El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las parles, y sólo perjudica a la persona que lo hace y a sus causahabientes.

El desistimiento de la demanda principal no impide el trámite de la reconvención, que continuará ante el mismo juez cualquiera que fuere su cuantía (...)

Así mismo, la misma codificación identifica los casos en los cuales no es procedente el desistimiento de la demanda, de la siguiente manera:

“Artículo 315. Quiénes no pueden desistir de las pretensiones. *No pueden desistir de las pretensiones:*

1. Los incapaces y sus representantes, a menos que previamente obtengan licencia judicial.

En este caso la licencia deberá solicitarse en el mismo proceso, y el juez podrá concederla en el auto que acepte el desistimiento si considera que no requiere la práctica de pruebas; en caso contrario fijará fecha y hora para audiencia con tal fin.

2. Los apoderados que no tengan facultad expresa para ello.

3. Los curadores ad lítem."

Consecuente a lo anterior, queda claro que es procedente el desistimiento de las pretensiones en caso de que los apoderados judiciales cuenten con la facultad expresa para la abdicación de las mismas, sino se cumple tal presupuesto no se podrá desistir de la acción.

Caso concreto

A folio 1 del expediente obra poder especial conferido por la Señora María Eugenia Reina Duque identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 66.834.908 otorgando facultad expresa al profesional del derecho Dr. Yobany Alberto López Quintero, para desistir de las pretensiones propuestas en el presente medio de control. Así mismo, obra memorial de sustitución conferido por el Dr. Yobany López Quintero a la doctora Valentina Noreña Quintero, con las mismas facultades a él conferidas, apoderada que presenta el desistimiento objeto de análisis (fl.74).

En suma a lo anterior, se observa que en el sub-lite, aún no se ha dictado sentencia, es por ello, que resulta procedente decretar la figura procesal del desistimiento de pretensiones.

Siendo esto así, en virtud de la manifestación expresa realizada en la audiencia inicial del 22 de julio de 2016 (fl. 73) presentado por la parte actora, considera el despacho, que es pasible el desistimiento de la pretensión de proceso de la referencia.

En consecuencia, este despacho, en virtud de lo dispuesto en el artículo 316 del Código General del Proceso, aceptará el desistimiento.

Costas en el proceso

No se condenará a la parte actora al pago de costas ni expensas, por no estar acreditadas de conformidad al artículo 365 del CGP1. Se reafirma lo anterior con base en lo siguiente:

El Consejo de Estado, ha indicado que el alcance del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, dispone:

“Si bien una lectura rápida de la disposición que antecede, podría llevar a la errónea interpretación de que la condena en costas debe imponerse en forma objetiva, es decir, de manera forzosa, automática e ineluctable en todos aquellos procesos contencioso administrativos en los cuales se ventile un interés de carácter individual o particular, lo cierto es que cuando la norma utiliza la expresión “dispondrá”, lo que en realidad está señalando es que el operador jurídico está llamado a pronunciarse en todos los casos sobre si es o no procedente proferir una condena en costas en contra de la paiie que ha visto frustradas sus pretensiones procesales 2”

1 “8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación."

2 CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCION PRIMERA-Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AY ALA- Bogotá,

1. C., dieciséis (16) de abril de dos mil quince (2015)-Radicación número: 25000-23-24- 000-2012-00446-01

Igualmente, vale la pena mencionar las conclusiones a las que ha llegado el Consejo de Estado, Sección segunda en esta materia:

“El análisis anterior permite las siguientes conclusiones básicas sobre las costas: a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio “subjetivo” -CCA a uno “objetivo valorativo" -CPACA-. b) Se concluye que es "objetivo" porque en toda sentencia se "dispondrá” sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP. c) Sin embargo, se le califica de “valorativo" porque se requiere que en el expediente el juez revise *si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación.* Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes, d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura), e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas, f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia,,<3 (Resaltado fuera del texto orignal)

En este orden, no se encuentra el expediente la causación de costas sufragadas por la parte demandada, y se advierte, no existe parte vencida en el presente asunto, por cuanto se decreta un desistimiento expreso de las pretensiones por la parte demandante, lo que evita a la postre, un desgaste de la administración de justicia.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de

1. **DECRETAR** el desistimiento de las pretensiones del proceso promovido por la señora María Eugenia Reina Duque a través de apoderada judicial sustituta, contra el Municipio de Santiago de Cali, de conformidad con lo expuesto en este proveído.
2. **TENER** por terminado el presente proceso.
3. **ABSTENERSE** de condenar en costas **y** expensas a la parte actora.
4. En firme el presente proveído, una vez dado cumplimiento a las órdenes aquí establecidas procédase al archivo de la actuación, previo registro en el sistema justicia siglo XXI.

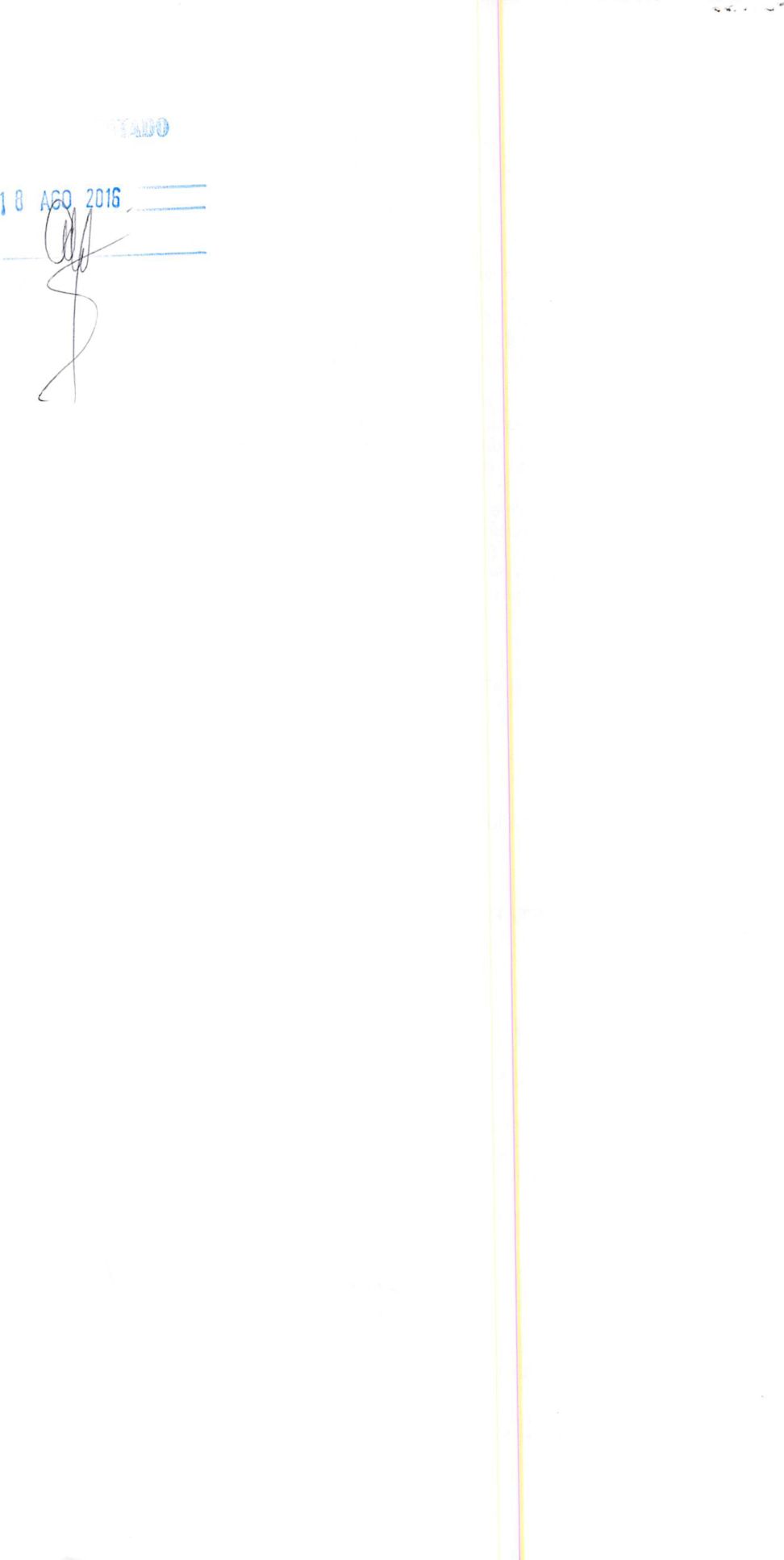
Notifíquese **y** Cúmplase,

3 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A" Consejero Ponente: William Hernández Gómez Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016) Radicación: 13001- 23-33-000-2013-00022-01

Cali,

RESUELVE:

La Juez



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Auto Interlocutorio No.

Santiago de Cali

1S

Proceso No: Demandante: Demandado: Acción:

008-2016-00148-00  
María Cristina Escobar Aguirre  
NUEVA EPS

DE TUTELA - INCIDENTE DE DESACATO

Mediante Sentencia No. 101 del 13 de junio de 2016 proferida por este Juzgado, en su parte resolutiva ordenó:

*“(...) PRIMERO: CONCÉDASE* la tutela del derecho fundamental de la salud de forma integral de la señora María Cristina Escobar Aguirre, identificada con la cédula de ciudadanía no. 39.154.775 de San Andrés, de conformidad a lo expuesto en la presente providencia. *SEGUNDO.-* ORDENAR a la Nueva EPS que en el término de (48) horas, una vez notificados de la presente acción constitucional, autorice y suministre de manera efectiva los medicamentos ordenados por los médicos tratantes de la señora María Cristina Escobar Aguirre. *TERCERO.-* ORDENAR a la Nueva EPS que se abstenga de realizar cobros, en adelante, por concepto de copagos o cuotas moderadoras por la prestación de los servicios en salud que tenga que brindar a la señora María Cristina Escobar Aguirre, identificada con la cédula de ciudadanía no. 39.154.775 de San Andrés, para el tratamiento integral del diagnóstico "leucemia mieloide crónica”, consignado por el médico tratante en la historia clínica visible a folios 8-9 del expediente. *CUARTO.- FACULTAR a LA NUEVA EPS* a recobrar ante el FOSYGA los gastos en que incurra por el tratamiento médico autorizado a la señora María Cristina Escobar Aguirre, identificada con la cédula de ciudadanía no. 39.154.775 de San Andrés, excluidos del Plan Obligatorio de Salud Unificado, con ocasión del diagnóstico emitido por los médicos tratantes. *QUINTO.- NIÉGUENSE* las peticiones sobre ordenes futuras e indeterminadas. *SEXTO.-* En firme esta sentencia de tutela, y en caso de no ser impugnada remítase a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión. *SÉPTIMO.-* Contra el presente fallo procede su impugnación ante el Flonorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 (...)"

El accionante, presentó escrito el 21 de julio de 2016 (fl.1-3), informando el incumplimiento de la providencia referida.

El Despacho mediante auto interlocutorio No. 658 del 25 de julio de 2016, admitió y avocó el conocimiento del incidente de desacato formulado, igualmente requirió a la parte accionada a fin de que diera informe sobre el cumplimiento del fallo emitido por este despacho, para lo cual se libró el oficio correspondiente (fls. 11-16).

Una vez notificada de la providencia mencionada, la entidad accionada allegó memorial explicando que (fls.17-20 y 22-24):

(...)

La afiliada en su escrito (...) indica que la Nueva EPS está incumpliendo el fallo respecto de la exoneración de copagos y cuotas moderadoras ya que le está aplicando este cobro para recibir los servicios de salud; no precisa que tipo de servicios, ya que es importante para corroborar el sistema de información.

Lo anterior por cuanto al hacer respectiva validación no se encuentra que a la paciente se le esté haciendo cobro por servicios de salud relacionados con el diagnostico, si presenta cobro y marcación de pago pero para otros servicios relacionados con otros diagnósticos para servicios diferentes a indicados para el tratamiento de leucemia mieloide crónica.

Manifieste al despacho por cuales servicios de salud ha tenidos que cancelar pagos de cuotas de recuperación demostrando y aportando para ello el soporte de pago efectivo.

Nueva EPS da cumplimiento al mandato tutelar, autorizando los servicios en salud requeridos por nuestro afiliado, los cuales fueron ordenados por su médico tratante y hacen parte de su tratamiento integral para el mejoramiento de su estado de salud, siempre y cuando el usuario haga el respectivo trámite administrativo para lograr la auditoria y la autorización

Posteriormente, el despacho logró establecer comunicación con la accionante, quien manifestó que la Nueva EPS, sí le está cobrando por el suministro de medicamento "milotinic-patcina”, el cual fue ordenado por el médico tratante para el tratamiento de leucemia mieloide crónica, (fl.21).

En tal sentido y conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, como quiera que no se ha demostrado el cumplimiento de la sentencia No. 101 del 13 de junio de 2016, proferida por este despacho judicial, se procede a iniciar INCIDENTE DE DESACATO.

Así las cosas, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali,

PRIMERO: Dar apertura al Incidente de Desacato en contra de BEATRIZ VALLECILLA ORTEGA en calidad de Gerente Regional Suroccidente de LA NUEVA EPS, por no acatar la orden impartida en la sentencia No. 101 del 13 de junio de 2016, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali.

SEGUNDO: Córrase traslado del presente incidente por el término de tres (03) días, conforme al artículo 52 del Decreto 2591 y el inciso segundo (2) del artículo 129 del Código General del Proceso, para que la accionada LA NUEVA EPS, explique las razones por las cuales no ha acatado la orden de tutela, tal como lo denuncia la accionante María Cristina Escobar Aguirre.

TERCERO: Notifíquese personalmente a la señora BEATRIZ VALLECILLA ORTEGA en calidad de Gerente Regional Suroccidente de LA NUEVA EPS, de este auto por el medio más expedito y eficaz allegando copia del mismo y del memorial del accionante, notificación que se surtirá a través del correo electrónico institucional de la parte accionada, adicionalmente se libraran los oficios de rigor correspondientes, conforme al artículo 612 del Código General del Proceso y el articulo 16 del Decreto 2591.

Notifíquese y Cúmplase,

(...)

DISPONE:



Juez

JCO.



2

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali, 1 2

Auto Interlocutorio No.^

Proceso No: Demandante: Demandados: Acción:

008-2016-00108-00  
Daniel Soto (Ernelia Lozano)

UGPP - Consorcio FOPEP  
DE TUTELA- Incidente de desacato

Mediante Sentencia No. 078 del 18 de mayo de 2016, proferida por este Juzgado, en su parte resolutiva ordenó:

*“(...) PRIMERO: TUTELAR* el derecho fundamental de petición, invocado a través de agente oficioso, por la señora Ernelia Lozano identificada con la cédula de ciudadanía no. 29.611.655 de la Unión-Valle, en razón a los motivos expuestos en este proveído. *SEGUNDO.- ORDÉNESE* a La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales-UGPP, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas una vez notificada de la presente decisión, certifique los valores correspondientes al derecho pensional reconocido a la señora Mariana Lozano (Q.E.P.D.), mediante la Resolución RDP 008890 del 06 de septiembre de

1. proferida por dicha entidad. *TERCERO: ORDÉNESE* al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional- Consorcio FOPEP, suministrar si es del caso, toda la información administrativa que de acuerdo a las facultades previstas por la Ley este en la obligación de expedir, para facilitar a La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales-UGPP. el acatamiento de la orden aquí impartida. *CUARTO:* Infórmesele a las partes el derecho que tienen de impugnar, si no comparten la decisión. *QUINTO:* Una vez en firme y en el evento de no ser recurrido el presente fallo remítase a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. (...)”

El Despacho mediante auto interlocutorio No. 607 (fl. 16), admitió y avocó el conocimiento del incidente de desacato formulado, igualmente requirió a las partes accionadas a fin de que dieran informe sobre el cumplimiento del fallo emitido por este despacho, para lo cual se libraron las notificaciones correspondientes (fls. 17-18).

A la notificación, el Consorcio FOPEP respondió en los siguientes términos (fls.

“(...) el Consorcio FOPEP 2015 es un contratista que carece de facultades de disposición de recursos públicos que no le pertenecen, ni tiene en su poder; por lo tanto al no tener reporte de la novedad de inclusión en nómina por parte de la UGPP, el Consorcio se encuentra imposibilitado para suministrar información con la cual no cuenta, pues la UGPP quien tiene en su poder la documentación a través de la cual le fueron reconocidos los derechos pensiónales a la señora María Lozano (Q.E.P.D.), por tal motivo, requerir al Consorcio para que dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, se le estaría imponiendo una obligación que resulta de imposible cumplimiento a pesar de nuestra disposición de acatar y cumplir con lo ordenado en el término señalado.

Así las cosas, es la UGPP la entidad que debe dar cumplimiento al fallo de tutela

19-22 y 40-41):

(...)

(...)

Por su parte, la entidad accionada Unidad Administrativa Especial de Gestión

<

Pensional y Contribuciones Parafiscales-UGPP, manifestó lo siguiente (fls. 23-37 y 42-49):

“(...) esta entidad mediantes oficios (...) a través de la Subdirección de Nómina de Pensionados, informó al accionante que verificados los aplicativos de la entidad se indicó que la beneficiaría Mariana Lozano, falleció antes del 07 de agosto de 2012, razón por lo cual no alcanzó a cobrar valores correspondientes a *la* Resolución RDP No. 08890 del 06 de septiembre de 2012, por lo que no es posible certificar ningún valor teniendo en cuenta que no hubo valores a reportar ni a incluir en la nómina de pensionados.

Asi las cosas es claro que la Unidad dio cumplimiento a lo ordenado por el despacho por cuanto certificó que no hubo valores a reportar en *la* nómina de pensionados (...) ”

La entidad, solicita entonces se declare la figura de hecho superado y como consecuencia el despacho se abstenga de continuar con el incidente de desacato, dado que con ocasión del fallecimiento de la beneficiaría de la pensión antes de su inclusión en la nómina de pensionados, no existe valores a certificar.

Adjunta a la respuesta en mención, la UGPP allega oficio del 05 de noviembre de 2013 (fl.46-49) constancias de correo certificado, mediante el cual da respuesta al Doctor Javier Mendoza Sandoval apoderado accionante, indicando que:

*“(...)*

De acuerdo con el asunto de la referencia en el que solicita el reconocimiento de pago único de herederos a favor de la señora Ernelia Lozano CC. 29.611.655, en calidad de heredera de la señora Mariana Lozano se informa que:

Verificados los sistemas de información de la UGPP se evidencia que con Resolución RDP008890 del 08 de septiembre de 2012 en mención se reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de LOZANO CARMEN ISAURA, a partir del 11 de julio de 2008 día siguiente al fallecimiento en la misma cuantía devengada por el causante, a favor *de* la señora LOZANO MARÍA, en calidad de padre o madre con un porcentaje de 100%. La pensión reconocida es de carácter vitalicio.

Teniendo en cuenta que la señora María Lozano falleció el 7 de agosto *de* 2012, no alcanzo a cobrar lo correspondiente a la resolución RDP 008890 del 06 de septiembre de 2012.

Con relación al reconocimiento y pago único a herederos a favor de la señora Ernelia Lozano, no se evidencia resolución que reconozca el pago a herederos por

lo que los beneficiarios que se crean con derecho deben hacer la solicitud. Anexo copia del histórico de pagos expedido por el Consorcio FOPEP de la señora Carmen Isaura Lozano.

Adicional a lo anterior, la entidad accionada vía correo electrónico, contestó nuevamente al requerimiento hecho por el despacho, adjuntando constancia de correo certificado remitido a la parte accionante; centrando en dicha oportunidad su planteamiento en la prescripción; figura legal que de acuerdo a los argumentos jurídicos expuestos por la UGPP, le son aplicables a las sumas por concepto de mesadas causadas y no cobradas desde la causante principal como de la beneficiaría, hoy reclamadas ante la Unidad, por lo tanto dichas sumas de dinero se encuentran prescritas y por lo tanto no existe valor a certificar (fls. 64-75):

**II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO**

La Honorable Corte Constitucional, en Sentencia T - 763 de diciembre 7 de 1998, hizo precisiones sobre el cumplimiento del fallo de tutela, e incidente de

2

**desacato, que para resolver el presente caso se estima preciso recordar:**

"En primer lugar es indispensable distinguir entre incumplimiento de una sentencia de tutela e incidente de desacato, en cuanto la responsabilidad objetiva es predicable para lo primero pero no para lo segundo, lo normal es que dentro del término que señale el fallo de tutela, la orden sea cumplida. Pero, si excepcionalmente la autoridad responsable del agravio va más allá del término que se señale e incumple, el juez de tutela, al tenor del artículo 27 del decreto 2591 de 1991, debe agotarlos siguientes pasos obligatorios, uno a continuación del otro:

1. Si la autoridad obligada no cumple, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y para que obra el correspondiente procedimiento disciplinario contra el directo responsable del incumplimiento.
2. Si pasan cuarenta y ocho horas a partir del requerimiento al superior y la orden de tutela aún no se cumple, se ordena abrir proceso contra el superior.
3. En el mismo auto que ordene abrir proceso contra el superior, el Juez directamente adoptara todas las medidas para el cabal cumplimiento de la orden. Y para tal efecto mantendrá la competencia hasta tanto este restablecido el derecho.
4. Adicionalmente, el juez encargado de hacer cumplir el fallo PODRA (así lo indica el artículo 27 del decreto 25981 de 1991) sancionar por desacato. Es pues esta una facultad optativa, muy diferente al cumplimiento del fallo y que en ningún instante es supletoria de la competencia para la efectividad de la orden de tutela. Pueden, pues, coexistir al mismo tiempo el cumplimiento de la orden y el tramite del desacato, pero no se pueden confundir el uno (cumplimiento del fallo) con el otro (el trámite de desacato).

Tratándose del cumplimiento del fallo la responsabilidad es objetiva porque no se predica de la autoridad responsable del agravio, sino de su superior y cuando se hubiere requerido al superior para que haga cumplirla orden en la tutela.

Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsable de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva.

Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudieron presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento. Y, si se trata del superior inmediato del funcionario.

Que ha debido cumplir la orden, tratándose de la tutela, adicionalmente ha debido existir una orden del juez requiriéndolo para que hiciere cumplir por el inferior del fallo de tutela, dándosele un término de cuarenta y ocho horas porque así expresamente lo indica el artículo 27 del decreto 2591 de 1991. (Sentencia T - 763 Diciembre 7 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero)”

**Entonces, si tratándose del desacato, que no es más que un ejercicio del poder disciplinario y, por ello, la responsabilidad no puede ser objetiva sino subjetiva, el juzgador al decidir si impone o no sanción al infractor, debe examinar las causas por las cuales incumplió la orden de tutela, causas que necesariamente deben derivarse del material probatorio allegado, y en caso de existir motivos que justifiquen tal actitud, deben relevarse de la sanción, pues un desconocimiento de la prueba constituye una violación al debido proceso y por ende una vía de hecho.**

En el presente caso, encuentra el despacho que la UGPP, sólo hasta esta etapa procesal, allega respuesta del año 2013 remitida a la parte accionante, informando que: “Verificados los sistemas de información de la UGPP se evidencia que con Resolución RDP008890 del 08 de septiembre de 2012 en mención se reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de LOZANO CARMEN ISAURA, a partir del 11 de julio de 2008 día siguiente al fallecimiento en la misma cuantía devengada por el causante, a favor de la señora LOZANO MARÍA, en calidad de padre o madre con un porcentaje de 100%. La

3

*pensión reconocida es de carácter vitalicio”.* A su vez, explica en dicha oportunidad que: “Con *relación al reconocimiento y pago único a herederos a favor de la señora Ernelia Lozano, no se evidencia resolución que reconozca el pago a herederos por lo que los beneficiarios que se crean con derecho deben hacer la solicitud”.*

De lo anterior, encuentra esta operadora judicial que la entidad accionada UGPP, en el año 2013 indicó a la parte accionante sobre qué valor había reconocido la pensión de sobrevivientes a la señora María Lozano, adjuntando la relación de pagos efectuados a la señora Carmen Isaura Lozano, causante.

De igual forma, de la información suministrada por la UGPP en dicha oportunidad, observa el despacho que la mencionada administradora de pensiones advierte a la parte accionante de la no existencia de acto administrativo reconociendo derecho alguno a herederos, a favor de la señora Ernelia Lozano, por lo tanto invita a quienes se crean con derecho hacer la solicitud.

De otro lado, acerca de la información allegada por la UGGP (fls.64-75) y que se remite a sustentar la posición jurídica de la prescripción de las mesadas causadas y no reclamadas dentro del proceso de la referencia, este despacho considera que el presente estadio procesal no es el escenario para debatir dicha posición jurídica, por lo tanto no emitirá ningún pronunciamiento el respecto.

Así las cosas, encuentra el despacho que con la respuesta otorgada por la UGPP a la parte accionante desde el año 2013 (fl.46) y conocida por el despacho sólo hasta en esta etapa procesal, el derecho de petición ejercido por la señora Ernelia Lozano, a través de apoderado, se encuentra satisfecho y por lo tanto, la orden impartida por esta operadora judicial a través de la sentencia No. 078 del 18 de mayo de 2016 fue cumplida.

Luego, siendo esa la realidad procesal, por sustracción de materia, se colige que no habría lugar a imponer sanción alguna a las entidades accionadas, lo que se traduce en dar por terminado el presente incidente, procediéndose a su archivo definitivo.

En consecuencia, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali,

PRIMERO.- CESAR el presente trámite Incidental presentado por la señora Ernelia Lozano, a través de apoderado judicial, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO.- ARCHIVAR el presente expediente.

Notifíquese y Cúmplase,

DECISIÓN

RESUELVE:

La Juez



JCO.

4

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali, nueve (09) de agosto de dos mil dieciséis (2016)

Auto Interlocutorio N° ^22

Proceso No.: 76001-33-33-008-2016-00227-00

Demandante: Fernando Gaspar Manases Prado Flórez

Demandado: Municipio de Santiago de Cali

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral

El señor Fernando Gaspar Maneses Prado Flórez, a través de apoderado judicial instaura demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, contra el municipio de Santiago de Cali, con el fin de que se declare la nulidad del oficio No. 4143.3.13.4097 del 28 de agosto de 2015 suscrito por el subsecretario para la Dirección y Administración de los Recursos, por medio del cual negó a la parte actora la nivelación del salario en calidad de auxiliar administrativo, frente al cargo de profesional universitario, código 340 grado 4.

A titulo de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la entidad territorial pagar las diferencias presuntamente ocasionadas, a partir del año 2003 hasta la fecha.

Respecto de la admisión se procede en los siguientes términos:

Es competente este Despacho para asumir el conocimiento del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter Laboral en primera instancia por los factores funcional, territorial y de cuantía según lo establece el artículo 104 núm. 4, 155 núm. 2, 156 y 157, además fue presentada en término según lo dispuesto en el artículo 164, núm. 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011.

En cuanto al requisito de procedibilidad descrito en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, observa el despacho trámite de audiencia de conciliación adelantada ante el Ministerio Público, tramite solicitado el día 30 de diciembre de 2015 (fl. 2 c. ú) constancia expedida el día 28 de marzo de 2016.

No se notificará a la Agencia Nacional de la defensa Jurídica, por cuanto no se encuentra una entidad del orden nacional conforme lo establece el Decreto 1365 de 2013.

Una vez reunidos los requisitos legales establecidos en los artículos 162,166, el despacho procederá a la admisión de la demanda en los términos del artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia se.

DISPONE:

1. Admítase el Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho-Laboral, promovida a través de apoderado judicial, por el señor Fernando Gaspar Maneses Prado Flórez contra el Municipio de Santiago de Cali.
2. Notifíquese por estado a la parte demandante.
3. Notificar Personalmente a los siguientes sujetos procesales:

'r Representante Legal del Municipio de Santiago de Cali o a quien haya

delegado la facultad de recibir notificaciones (vinculado).

Agente del Ministerio Público delegado ante este despacho.

1. La notificación que se surtirá en la forma y términos señalados en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, efectuándose traslado a las partes por el término de 30 días establecido en el artículo 172 de la enunciada Ley. Para tal evento las copias de la demanda y sus anexos quedarán en Secretaría a disposición de los notificados.
2. Ordenase a la parte demandante depositar por concepto gastos del proceso la suma de cuarenta mil pesos ($40.000,oo), a favor del Juzgado en la cuenta No. 469030064141 Convenio No. 13193, del Banco Agrario de Colombia, para lo cual se concede un plazo de tres (3) días, so pena de dar aplicación al artículo 178 de la Ley 1437 de
3. Con la contestación de la demanda se deberá aportar todas las pruebas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer, así como la totalidad del expediente administrativo que contenga los actos preparatorios y antecedentes de la actuación objeto del presente litigio y que se encuentran en su poder. La inobservancia de estos deberes constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto. (Articulo 175 C.P.A.C.A)
4. Reconózcase personería para actuar como apoderado de la parte demandante al doctor Walter Camilo Murcia Gómez Valderram, identificado con la cédula de ciudadanía No.6.228.009 y portador de la tarjeta profesional de abogado No. 169.683 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del mandato a él otorgado.

Notifíquese y Cúmplase,

2011



Juez

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTIAGO DE CALI NOTIFICACION POR ESTADO ELECTRÓNICO

La suscrita Secretaria certifica que la anterior providencia se notificó a la(s) parte (s) por anotación en el ESTADO ELECTRÓNICO No. el cual

se insertó en los, medios informáticos de la Rama Judicial el

1. ton /f's

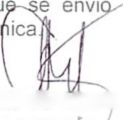
día ^ p 20 iS

",n ¿ais

el cual

Se certifica de igual manera qi " mensaje de datos a quienes

suministraron su dirección electro



CAROLINA HÉRNANpEZ MURILLO  
Secretaria,

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali, nueve (09) de agosto de dos mil dieciséis (2016)

Auto Interlocutorio N° 725

Proceso No.: 76001-33-33-008-2016-00225-00

Demandante: Yesyca Liadyd Gómez Valderrama

Demandado: Municipio de Santiago de Cali

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral

La señora Yessyca Liadyd Gómez Valderrama, a través de apoderado judicial instaura demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, contra el municipio de Santiago de Cali, con el fin de que se declare la nulidad del oficio No. 4143.3.13.4097 del 28 de agosto de 2015 suscrito por el subsecretario para la Dirección y Administración de los Recursos, por medio del cual negó a la demandante la nivelación del salario en calidad de auxiliar administrativo código,

407 grado 06 frente al cargo de profesional universitario, código 340 grado 4.

A titulo de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la entidad territorial pagar las diferencias presuntamente ocasionadas, a partir del año 2012 hasta la fecha.

Respecto de la admisión se procede en los siguientes términos:

Es competente este Despacho para asumir el conocimiento del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter Laboral en primera instancia por los factores funcional, territorial y de cuantía según lo establece el artículo 104 núm. 4, 155 núm. 2, 156 y 157, además fue presentada en término según lo dispuesto en el artículo 164, núm. 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011.

En cuanto al requisito de procedibilidad descrito en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, observa el despacho trámite de audiencia de conciliación adelantada ante el Ministerio Público, tramite solicitado el día 30 de diciembre de 2015 (fl. 8 c. ú) constancia expedida el día 07 de marzo de 2016.

No se notificará a la Agencia Nacional de la defensa Jurídica, por cuanto no se encuentra una entidad del orden nacional conforme lo establece el Decreto 1365 de 2013.

Una vez reunidos los requisitos legales establecidos en los artículos 162,166, el despacho procederá a la admisión de la demanda en los términos del artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia se.

DISPONE:

1. Admítase el Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho-Laboral, promovida a través de apoderado judicial, por la señora Yessyca Liadyd Gómez Valderrama contra el Municipio de Santiago de Cali.
2. Notifíquese por estado a la parte demandante.

3. Notificar Personalmente a los siguientes sujetos procesales:

> Representante Legal del Municipio de Santiago de Cali o a quien haya

delegado la facultad de recibir notificaciones (vinculado).

r- Agente del Ministerio Público delegado ante este despacho.

1. La notificación que se surtirá en la forma y términos señalados en el  
   artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del  
   Código General del Proceso, efectuándose traslado a las partes por el  
   término de 30 días establecido en el artículo 172 de la enunciada Ley.  
   Para tal evento las copias de la demanda y sus anexos quedarán en  
   Secretaría a disposición de los notificados.
2. Ordenase a la parte demandante depositar por concepto gastos del  
   proceso la suma de cuarenta mil pesos ($40.000,oo), a favor del  
   Juzgado en la cuenta No. 469030064141 Convenio No. 13193, del  
   Banco Agrario de Colombia, para lo cual se concede un plazo de tres  
   (3) días, so pena de dar aplicación al artículo 178 de la Ley 1437 de  
   2011
3. Con la contestación de la demanda se deberá aportar todas las  
   pruebas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer, así como  
   la totalidad del expediente administrativo que contenga los actos  
   preparatorios y antecedentes de la actuación objeto del presente litigio  
   y que se encuentran en su poder. La inobservancia de estos  
   deberes constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario  
   encargado del asunto. (Artículo 175 C.P.A.C.A)
4. Reconózcase personería para actuar como apoderado de la parte  
   demandante al doctor Walter Camilo Murcia Gómez Valderram,  
   identificado con la cédula de ciudadanía No.6.228.009 y portador de la  
   tarjeta profesional de abogado No. 169.683 del Consejo Superior de la  
   Judicatura, en los términos del mandato a él otorgado.

Notifíquese y Cúmplase,

•' \_\_ .

m^caTondoño

Juez

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTIAGO DE CALI NOTIFICACION POR ESTADO ELECTRÓNICO

La suscrita Secretaria certifica que la anterior providencia se notificó a la(s)

parte (s) por anotación en el ESTADO ELECTRÓNICO No. el cual

se insertó ren lo.s, medios informáticos de la Rama Judicial el dia - ■

Se certifica de igual manera qpe

suministraron su dirección electronic

CAROLINA H

eptfíó mensaje de datos a quienes

MURILLO



*.X I \*.j*

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI ^

Santiago de Cali, nueve (09) de agosto de dos mil dieciséis (2016)”'

Auto Interlocutorio N°

Proceso No.: 76001-33-33-008-2016-00226-00

Demandante: Alvaro Tulio Valencia Mora

Demandado: Municipio de Santiago de Cali

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral

El señor Alvaro Valencia Mora, a través de apoderado judicial instaura demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, contra el municipio de Santiago de Cali, con el fin de que se declare la nulidad del oficio No. 4143.3.13.4097 del 28 de agosto de 2015 suscrito por el subsecretario para la Dirección y Administración de los Recursos, por medio del cual negó a la parte actora la nivelación del salario en calidad de auxiliar administrativo ocupado, frente al cargo de profesional universitario, código 340 grado 4.

A título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la entidad territorial pagar las diferencias presuntamente ocasionadas, a partir del año 2003 hasta la fecha.

Respecto de la admisión se procede en los siguientes términos:

Es competente este Despacho para asumir el conocimiento del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter Laboral en primera instancia por los factores funcional, territorial y de cuantía según lo establece el artículo 104 núm. 4, 155 núm. 2, 156 y 157, además fue presentada en término según lo dispuesto en el artículo 164, núm. 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011.

En cuanto al requisito de procedibilidad descrito en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, observa el despacho trámite de audiencia de conciliación adelantada ante el Ministerio Público, tramite solicitado el día 30 de diciembre de 2015 (fls. 10 y 11 c. ú) constancia expedida el día 18 de febrero de 2016.

No se notificará a la Agencia Nacional de la defensa Jurídica, por cuanto no se encuentra una entidad del orden nacional conforme lo establece el Decreto 1365 de

2013.

Una vez reunidos los requisitos legales establecidos en los artículos 162,166, el despacho procederá a la admisión de la demanda en los términos del artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia se,

DISPONE:

1. Admítase el Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho-Laboral, promovida a través de apoderado judicial, por el señor Alvaro Tulio Valencia Mora, contra el Municipio de Santiago de Cali.
2. Notifíquese por estado a la parte demandante.

3. Notificar Personalmente a los siguientes sujetos procesales:

> Representante Legal del Municipio de Santiago de Cali o a quien haya

delegado la facultad de recibir notificaciones (vinculado).

Agente del Ministerio Público delegado ante este despacho.

1. La notificación que se surtirá en la forma y términos señalados en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, efectuándose traslado a las partes por el término de 30 días establecido en el artículo 172 de la enunciada Ley. Para tal evento las copias de la demanda y sus anexos quedarán en Secretaría a disposición de los notificados.
2. Ordenase a la parte demandante depositar por concepto gastos del proceso la suma de cuarenta mil pesos ($40.000,oo), a favor del Juzgado en la cuenta No. 469030064141 Convenio No. 13193, del Banco Agrario de Colombia, para lo cual se concede un plazo de tres (3) días, so pena de dar aplicación al artículo 178 de la Ley 1437 de 2011
3. Con la contestación de la demanda se deberá aportar todas las pruebas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer, así como la totalidad del expediente administrativo que contenga los actos preparatorios y antecedentes de la actuación objeto del presente litigio y que se encuentran en su poder. La inobservancia de estos deberes constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto. (Artículo 175 C.P.A.C.A)
4. Reconózcase personería para actuar como apoderado de la parte demandante al doctor Walter Camilo Murcia Gómez Valderram, identificado con la cédula de ciudadanía No.6.228.009 y portador de la tarjeta profesional de abogado No. 169.683 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del mandato a él otorgado.

Notifíquese y Cúmplase,

Juez

ICA LONDONO FORER

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTIAGO DE CALI  
NOTIFICACION POR ESTADO ELECTRÓNICO

La suscrita Secretaria certifica que la anterior providencia se notificó a la(s)

parte (s) por anotación en el ESTADO ELECTRÓNICO No. el cual

se insertó en los medios informáticos de la Rama Judicial el  
día ar <

¡ tí T7T-T5—r-r-ni

Se certifica de igual manera  
suministraron su dirección elec

CAROUNA'HRR!^

Secret

envió mensaje de datos a quienes

<\NDEZ MURILLO

aria



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali,

Auto Interlocutorio No. 'tfib

Acción:

Proceso No:

Demandante:

Demandado:

008-2016-00161 -00 Nelson Alfredo Arciniegas

Superintendencia de Industria y Comercio - Municipio de Santiago de Cali Secretaría de Tránsito Municipal.

DE TUTELA- INCIDENTE DE DESACATO

Mediante Sentencia No. 106 del 24 de junio de 2016, proferida por este Juzgado, en su parte resolutiva ordenó:

*“(...) PRIMERO: TUTELAR* el derecho fundamental de petición invocado por el señor Nelson Alfredo Arciniegas Martínez identificado con la cédula de ciudadanía no. 16.682.550 de Cali, en razón a la solicitud de documentos solicitados a la Secretaría de Tránsito Municipal de Cali, por los motivos expuestos en este proveído. *SEGUNDO: ORDENAR* a la Secretaría de Tránsito Municipal de Cali,

que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, responda de fondo, de manera *completa,* clara y congruente a la solicitud presentada por el señor Nelson Alfredo Arciniegas el día 28 de enero de 2015 (fl.6), en lo referente a la solicitud de copia de los documentos relacionados con el procedimiento administrativo de la sanción económica por infracción de tránsito. *TERCERO: DECLÁRESE* la improcedencia de la presente acción de tutela en lo que respecta a la presunta violación al derecho fundamental del debido proceso por el procedimiento administrativo adelantado por la Secretaría de Tránsito Municipal de Cali, mediante el cual impuso una sanción económica al accionante por infracción al Código Nacional de Tránsito; de conformidad a lo expuesto. *CUARTO: DECLÁRESE* la carencia actual de objeto por hecho superado, frente a la solicitud de protección al derecho fundamental de petición, pretendido por el señor Nelson Alfredo Arciniegas Martínez identificado con la cédula de ciudadanía no. 16.682.550 de Cali, en lo que concierne a la petición elevada a la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. *QUINTO:* Infórmesele a las partes el derecho que tienen de impugnar, sino comparten la decisión. *SEXTO:*

Una vez en firme y en el evento de no ser recurrido el presente fallo remítase a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. (...)"

Una vez conocido por el despacho el escrito de incidente presentado por la parte accionante (fl. 12), el despacho profirió el auto interlocutorio no. 606 del 13 de julio de 2016, mediante el cual y previo apertura de incidente desacato, requirió al Secretario de Tránsito Municipal de Cali, para que diera cumplimiento a lo ordenado a esa dependencia por esta operadora judicial en la sentencia ya enunciada.

Posteriormente el despacho profirió el Auto No. 662 del 28 de julio de 2016, mediante el cual, da apertura al incidente de desacato en contra del Secretario de Tránsito Municipal de Cali (fls. 90-91).

Si bien la entidad accionada en varias oportunidades contestó a los requerimientos hechos por el despacho, adjuntando de forma reiterativa la información remitida al accionante, inicialmente sin los documentos que

evidenciaban la fotomulta y tampoco la citación a la audiencia para controvertir la sanción administrativa y mucho menos, la constancia de notificación al accionante de la entrega de dicha información; finalmente la entidad accionada allegó al despacho constancia de recibido del accionante de los documentos solicitados, a través de derecho de petición.

La Secretaría de Tránsito municipal remitió por correo electrónico (fls. 153-154) “carlos diaz 456”, constancia de recibido por el accionante, quien manifestó, “confirmo recibo de comunicación donde se allega respuesta de la secretaría de tránsito donde se aportan las fotos del vehículo (...)”.

Dicha gestión fue tratada de confirmar con el accionante, quien no contestó las llamadas hechas por el despacho al número 3113456352, sin embargo la gestión administrativa realizada por la autoridad de tránsito municipal, fue ratificada por la doctora María Esperanza Angulo Solís identificada con la cédula no. 1.059.444.503 de Guapi, quien ostenta el cargo de técnico administrativo de dicha dependencia municipal, persona de la administración responsable de atender el incidente de desacato, y quien manifestó al despacho que había confirmado con el señor Nelson Alfredo Arciniegas, el recibido de la documentación.

Así las cosas, aunque el despacho no encuentra justificación alguna al comportamiento de la entidad accionada, en cuanto habiendo transcurrido un tiempo más que prudencial, no atendió con prontitud lo dispuesto por esta operadora judicial mediante sentencia No. 106 del 24 de junio de 2016, no puede desconocerse que finalmente le ha dado cumplimiento.

Luego, siendo esa la realidad procesal, por sustracción de materia, se colige que no habría lugar a imponer sanción alguna a la entidad accionada, lo que se traduce en dar por terminado el presente incidente, procediéndose a su archivo definitivo.

En consecuencia, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali,

PRIMERO.- CESAR el presente trámite Incidental propuesto por el señor Nelson Alfredo Arciniegas, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO.- ARCHIVAR el presente expediente.

Notifíquese y Cúmplase,

DECISION

RESUELVE:

La Juez

lyKÍNÍC



JCO.

REPUBLICA DE COLOMBIA



ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI

Santiago de Cali, nueve (09) de agosto de dos mil dieciséis (2016)

Auto Interlocutorio No. 72-Í5

Proceso No.: 76001-33-33-008-2016-00222-00

Demandante: Ángel Andrés Huila Solis

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Medio de Control: Reparación Directa

El señor Ángel Andrés Huila Solis, en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, y por conducto de apoderado judicial instaura demanda contra la Nación - Ministerio de Defensa Ejército Nacional, con el fin que se declare administrativamente responsable y se condene a pagar perjuicios de orden material e inmaterial, como consecuencia de la presunta lesión sufrida por el señor Huila Solis, en calidad de soldado regular el día 06 de octubre de 2015.

Respecto de la admisión se procede en los siguientes términos:

Una vez recibida la actuación procede el despacho a resolver sobre su admisibilidad, asumiendo el conocimiento del Medio de Control de Reparación Directa en primera instancia por los factores funcional, territorial y de cuantía según lo establece el artículo 104 numeral 1, 155 Núm. 6, 156 Núm. 6, y 157 de la Ley 1437 de 2011, además fue presentada en término según lo dispuesto en el artículo 164. Núm. 2, literal i) Ley 1437 de 2011.

En cuanto a los requisitos de procedibilidad descritos en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, observa el despacho trámite de audiencia de conciliación adelantada ante el Ministerio Público, trámite solicitado el día 28 de marzo de 2016 (fl.7) constancia expedida el día 29 de junio de 2016.

A pesar de que en el escrito de la demanda se refiere a la convocatoria de conciliación extrajudicial, teniendo en cuenta las afirmaciones que se advierten en los numeral 11 y 12 de los hechos, así como en el encabezado de las pretensiones, y la tasación de los perjuicios inmateriales que denominó daño a la salud, numeral 3o, el acápite que titulo 'ARGUMENTOS JURÍDICOS DE LOS CONVOCANTES" obrante a folios 11, 15 y 21, y dando aplicación al principio de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y al acceso de la administración de justicia, (artículos 228 y 229 C.P). se infiere que pretende activar el aparato judicial, a través del medio de control consagrado en el artículo 140 C.P.A.C.A. y no del cumplimiento del requisito de procedibilidad previsto en el artículo 161 Ib.

Para efectos de la notificación personal de este proveído a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no habrá lugar al envío físico de la demanda, al tenor de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 3o del Decreto 1365 de 2012.1

' *"Decreto 1365 de 2012 Articulo 3. Notificación de autos admisorios y de mandamientos de pago a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La notificación a la que se refiere el inciso 6 del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012 de autos admisorios de demanda y de mandamientos de pago, únicamente será procedente cuando se trate de procesos donde se encuentren involucrados intereses litigiosos de la Nación, en los términos previstos en el parágrafo del articulo*

*2 del Decreto Ley 4085 de 2011 y el presente Decreto. ‘Parágrafo. Para efectos de las notificaciones personales que se deban realizar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se entenderá que el correo electrónico cumple los mismos propósitos que el seivicio postal autorizado para enviar la copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio. en los términos del artículo 197 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En estos casos, no será necesaria la remisión física de los mencionados documentos*"

Una vez reunidos los requisitos legales establecidos en los artículos 162,166. el despacho procederá a la admisión de la demanda en los términos del artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia se,

1. Admítase el Medio de Control de Reparación Directa, promovida a través de apoderado judicial, por el señor Ángel Andrés Huila Solis, contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.
2. Notifíquese por estado a la parte demandante.
3. Notificar Personalmente a los siguientes sujetos procesales:
4. Representante Legal de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional o a quien haya delegado la facultad de recibir notificaciones.
5. Agente del Ministerio Público delegado ante este despacho.
6. Al Representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, (artículo 197 C.P.A.C.A., parágrafo del artículo 3o del Decreto 1365 de 2012)
7. La notificación que se surtirá en la forma y términos señalados en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, efectuándose traslado a las partes por el término de treinta (30) días establecido en el artículo 172 de la enunciada Ley. Para tal evento las copias de la demanda y sus anexos quedarán en Secretaría a disposición de los notificados.
8. Ordenase a la parte demandante depositar por concepto gastos del proceso la suma de setenta mil pesos (S70.000,oo), a favor del Juzgado en la cuenta No. 469030064141 Convenio No. 13193, del Banco Agrario de Colombia, para lo cual se concede un plazo de tres (3) días, so pena de dar aplicación al artículo 178 de la Ley 1437 de 2011
9. Con la contestación de la demanda se deberá aportar todas las pruebas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer. La inobservancia de estos deberes constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto. (Artículo 175 C.P.A.C.A.). En efecto, el extremo pasivo deberá allegar al plenario copia de las actuaciones y providencias que se surtieron en cada una de las entidades, se resalta entonces que no existe la posibilidad de solicitar material probatorio emanado de las entidades que representan, pues ello traduce una dilación injustificada al trámite del proceso.
10. Reconózcase personería para actuar como apoderado de la parte demandante a al doctor Juver Alejo Garzón, identificado con la cédula de ciudadanía No. 348.869 y portador de la tarjeta profesional de abogado No. 199.385 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del mandato a él otorgado.

Notifíquese y Cúmplase,

DISPONE:



Juez

REPUBLICA DE COLOMBIA



ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI

Auto Interlocutorio No. SE.797.

Proceso N°: 76001-33-33-008-2016-00197-00

Demandante: Wilson Alvear González

Demandado: Departamento del Valle del Cauca

Medio de Control: Reparación Directa

Santiago de Cali, once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016)

El señor Wilson Alvear González, por conducto de apoderado judicial, promovió demanda de reparación directa contra el Departamento del Valle del Cauca, con el fin, que se declare administrativamente responsable a! pago de perjuicios materiales, derivados de la anulación de los actos administrativos contenidos en los Decretos No. 1857 del 22 de diciembre de 1999 y 15 del 21 de enero de 2000, que establecieron la reestructuración administrativa de la planta de cargos del nivel central, adelantado por la entidad territorial, y como consecuencia de ello fue retirado del cargo que ocupaba el demandante.

Antecedentes:

Mediante la providencia No. 804 del 28 de julio de 2016 esta administradora de justicia solicitó al H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, copia de las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas dentro del proceso de nulidad simple Radicación No. 76001-23-31-00-2005-01449-01, relacionadas con el declaratoria de nulidad de los actos administrativos que establecieron la estructura de la planta global de cargos del nivel centra! del Departamento del Valle del Cauca, durante el año 2000, para tal efecto se destacarán los siguientes apartes:

■ Sentencia No. 115 del 16 de julio de 2010 emitida por el H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de la providencia en mención que negó ¡as pretensiones de la demanda, de la misma se resalta:

"1- La Asamblea Departamental del Valle del Cauca mediante Ordenanza No. 067 de Noviembre 05 de 1999. resolvió conceder facultades al Gobernador del Departamento para crear, transformar; modificar, suprimir o fusionar la estructura orgánica de la Administración.

“2- En Septiembre de 1999,. la entidad territorial adelantó el Plan de Reforma Económica Territorial elaborado por el PNUD.. con apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

“3.- Mediante Decreto 1867 de Diciembre de 1999, se estableció la nueva estructura administrativa, la planta global de cargos del nivel central del Departamento del Valle del Cauca, el cual entró a regir el 1o de Enero de 2000.

*"(■■■)*

‘CONSIDERA:

Controversia Jurídica

"En el presente caso se demanda la nulidad de los siguientes actos administrativos:

'a.- Decreto No. 1867 de Diciembre 22 de 1999 '’Por el cual se establece la estructura administrativa, la planta global de cargos del nivel central del Departamento del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones ".

'■£).- Decreto No. 0015 de Enero 21 de 2000 "Por medio del cual se determina la estala de salarios para los grados de remuneración de los cargos de los diferentes niveles de la Administración Central Departamental '

*"(■■■)*

“4. Conclusión

‘En consonancia con lo anterior, la Sala considera que la presunción de legalidad de los Decretos acusados debe mantenerse incólume, y en vista de ello, que las pretensiones de la demanda deben ser despachadas desfavorablemente.

Sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por el H. Consejo de Estado, a través de la cual revocó la providencia No. 115 del 16 de julio de 2010, y se extrae lo siguiente:

"(...) La Sala estima que si bien es cierto el proceso de reestructuración iniciado por la administración departamental tenía como finalidad adoptar medidas encaminadas a hacer más efectivo el servicio, dadas las conclusiones de mal manejo fiscal y administrativo que arrojaba el estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, esta no es una razón válida para que la administración hubiera omitido realizar un estudio técnico que detallara aspectos tales como las cargas laborales de la dependencias a suprimir y la inoperatividad de ellas, las cargas laborales de las nuevas dependencias, el perfil de los empleados que entrarían a ejercer su función en la nueva estructura, entre otros aspectos fundamentales y. en general, que hubiera desconocido el análisis de cada uno de los aspectos exigidos en el artículo 154 del Decreto 1572 de 1998, necesarios para que la modificación de la planta de personal se ajustara a la ley.

'Ve conformidad con lo anterior, al haberse desvirtuado la legalidad del acto que estableció la estructura del departamento y su planta global de cargos mal podría permanecer en la vida jurídica el acto administrativo en virtud del cual se determinó la escala de salario para dicha planta, no solo porque la anulación del primer acto deja sin sustento la fijación de los salarios de la planta establecida, sino porque en el proceso tampoco se demostró que se hubieran realizado, como ya se dijo, los estudios tendientes a analizar los aspectos relacionados con los perfiles de los cargos que entrarían a conformar la nueva planta, criterio dentro del cual se debía analizar el aspecto salarial de los empleados que harían parte de esa nueva planta.

“En las anteriores, se impone revocar la sentencia de primera instancia que denegó las súplicas de la demanda y en su lugar, declarar la nulidad de los decretos cuestionados. ...

FALLA

REVÓCASE la sentencia de dieciséis (16) de julio de dos mil diez (2010) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda incoada por Tomás Fajardo Hernández contra el departamento del Valle del Cauca. En su lugar se dispone:

“DECLÁRASE la nulidad de los Decretos números 1867 de 22 de diciembre de 1999, mediante el cual se estableció la estructura administrativa y la planta global de cargos del nivel central del departamento del Valle del Cauca, y 0015 de 21 de enero de 2000, por el cual se determinó la escala de salarios para los grados de remuneración de los cargos de los diferentes niveles de la administración central

! Folios 53 a 67 c. ú.

de departamento, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva que antecede

**La anterior providencia se notificó por Edicto el día 13 de junio de 2014, quedando ejecutoriada desde el día 20 de junio de 2014 (folio 129 y reverso c. ú.).**

**Por su parte, el señor Alvear González, presentó la demanda el día 15 de julio de 2016 contra el Departamento del Valle del Cauca, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los Decretos 1867 del 22 de diciembre de 1999 y No. 0015 del 21 de enero de 2000, considera que debe ser indemnizado por los perjuicios ocasionados, al dejar de percibir el pago de los salarios y prestaciones sociales que servían de sustento para su núcleo familiar, desde la fecha de retiro 29 de diciembre de 19993. En efecto, argumenta que el derecho se consolidó desde el momento en que desapareció la presunción de legalidad de los actos administrativos que sirvieron de fundamento a la reestructuración de la planta de cargos; para efectos de efectuar el conteo del término de caducidad citó la sentencia SU-659 del 22 de octubre de 2015, proferida por la Corte Constitucional.**

**Consideraciones:**

**Efectos Ex tune4 de la Sentencia del 22 de mayo de 2014 emitida por el H. Consejo de Estado, declaratoria de nulidad de los Decretos 1867 del 22 de diciembre de 1999 y No. 0015 del 21 de enero de 2000.**

**En relación al tema, el H. Consejo de Estado5, ha sostenido en reiteradas ocasiones que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo general, si bien tiene efectos retroactivos, ello no implica que se afecten los actos particulares que se hayan expedido con base en la norma anulada, si de otro lado se ha utilizado los medios jurídicos para controvertir la decisión y se ha resuelto sobre ella o simplemente, porque ha vencido el plazo para su impugnación, con anterioridad a la fecha del fallo, sin que ello conlleve la consecuencia de revivir términos que otras disposiciones consagran para su discusión administrativa o jurisdiccional o para que el acto quede en firme.**

**Soporte Jurisprudencial**

"... En el presente caso, la actora pretende contar dicho término a partir de la ejecutoria de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 27 de septiembre de 2007, que declaró la nulidad del literal e) del artículo 2o de la Ordenanza No.

050 de 1999. por medio de la cual se suprimieron a partir del 30 de diciembre de 1999, 480 cargos de ¡a planta de la entidad demandada entre ellos el de la actora.

No son de recibo los argumentos de la demandante cuando afirma que en este caso el término debe contarse a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del acto administrativo contenido en la Ordenanza No. 050 del 8 de enero de 1999. puesto que tal declaratoria tendría incidencia solamente respecto de aquellas personas que demandaron los actos que afectaron su situación laboral dentro del término establecido en la ley.

No obstante, encontrarse vigente el parágrafo 2 del artículo 39 de la Ley 443 de 1998, para la fecha en que se adelantó la reestructuración que motivó el retiro de la demandante, se observa que no ejerció la acción dentro del término previsto para el efecto.

2 Folios 70 a 93 c. ú.

3 Ver folio 12 c. ú.

4 (efectos retroactivos - desde entonces) Desde el momento en que se profirió el acto anulado.

0 Consejo de Estado - Sección Segunda Radicación 2008-00382-01 (2751-08) auto del 14 de mayo de 2009 M.P. Alfonso Vargas Rincón.

Finalmente, si bien los efectos de la sentencia de nulidad son erga omnes y “ex tune'' es decir que se tiene para todos los efectos que el acto no ha existido, dada su ilegalidad ello no convalida el término de caducidad, pues dicha institución jurídica limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de consideraciones que no sean el transcurso del tiempo. Dicho plazo como lo ha dicho la jurisprudencia y la doctrina, es perentorio y de orden público., y a él están sometidas las partes. ... "s

**Caducidad del Medio de Control - Reparación Directa**

Sobre el tema particular que nos ocupa es necesario entonces efectuar un análisis del fenómeno jurídico de caducidad, teniendo en cuenta que la parte actora pretende derivar una declaratoria de responsabilidad administrativa y por ende la indemnización de los perjuicios presuntamente causados por el Departamento del Valle del Cauca, como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos contenidos en los Decretos 1867 del 22 de diciembre de 1999 y No. 0015 del 21 de enero de 2000.

Si bien es cierto, la presente demanda se instauró en vigencia de la Ley 1437 de 2011, es necesario revisar la normatividad vigente para la época de los hechos, la disposición que regulaba el asunto era el Decreto 01 de 1984.

En cuanto al término que ha sido establecido por el Legislador para promover éste tipo de demandas se tiene que el numeral 2o, literal i) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expone:

'■ARTÍCULO 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

“ i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición; ..."

En lo pertinente el numeral 8o del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, previo el término de caducidad de las acciones de reparación directa, en los siguientes términos:

"8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

*Adicionado por el art. 7. Lev 589 de 2000*, *con el siguiente texto:* Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que

ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición. ...”

**Por otro lado, de la comunicación efectuada por la entidad territorial, se desprende que el día 29 de diciembre de 1999, el señor Wilson Alvear González, fue retirado del cargo que ocupaba, por ocasión de reestructuración de la planta de cargos, por lo que a partir de la fecha referenciada, se contará el término de caducidad de la acción de reparación directa, pese a que contaba con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es decir el término vencía el día 30 de diciembre de 2001, sin embargo, en dicha fecha la Rama Judicial, se encontraba en vacancia judicial7, por lo que debió presentarse al día hábil siguiente, esto es, el día 11 de enero de 2002, situación que permite concluir que se encuentra ampliamente superado, el término legal.**

**Ahora bien, es cierto que se ha indicado por parte de la jurisprudencia8 que si existen puntos ambiguos respecto a la caducidad, la demanda debe ser admitida conforme a los principios** pro actione **y** pro damato **como un aspecto enriquecedor que garantiza el derecho sustancial de las personas que acceden a la administración de justicia.**

**Sin embargo, en otras oportunidades ha indicado la doctrina conforme a la jurisprudencia que si tai aspecto es cristalino, así debe decantarse9:**

“Ha sostenido en forma reiterada el Consejo de Estado que la caducidad cuando aparezca clara, desde un principio deberá decretarse en el primer auto que se dicte dentro del proceso, por razones de economía procesal y de seriedad, ya que no tiene sentido que las paites se sometan a un debate costoso y de larga duración para terminar con una declaración de tal naturaleza.".

**También ha sido clara la posición del H. Consejo de Estado para definir la caducidad como un aspecto que hace parte de los presupuestos procesales y en razón de ello, como un elemento habilitante del rechazo de la demanda, cuando ella aparezca establecida. Al respecto señala la Alta Corporación10:**

“El criterio mayoritario de la Sala sobre la naturaleza de las normas relativas a la caducidad de la acción, ahora se orienta a que las mismas son de carácter procesal; lo anterior al punto que precisamente, el aspecto de la caducidad debe examinarse dentro de los “presupuestos procesales\* e incluso en caso de verificar su ocurrencia, desde antes del inicio del proceso, se impone el rechazo de la demanda de plano (artículo 143 C.C.A.)”

**Conviene destacar que el fenómeno jurídico de la caducidad opera por el transcurso del tiempo y la omisión en el ejercicio de la acción, el cual se inició en el caso particular desde la publicación, notificación y/o comunicación del acto administrativo que retiró del servicio al demandante, sin que pueda verse alterado dicho plazo perentorio previsto por la ley, máxime cuando la parte alega los efectos se retrotraen desde la sentencia 22 de mayo de 2014 proferida por el H. Consejo de Estado.**

**Por otro lado, el apoderado judicial de la parte actora, señala que debe tenerse en cuenta los argumentos plasmados en la sentencia SU-659 de! 22 de octubre de 2015, donde se unificó el criterio sobre las excepciones al término de caducidad de la acción previsto en el artículo 136 del C.C.A., en las situaciones en que se ignoren hechos o se esté ante circunstancias oscuras, dudosas y poco claras, indicando que el término debe contarse a partir del momento en que se conocieron los elementos que permiten su configurar la responsabilidad patrimonial del Estado, con base ai artículo 228 C.P., sin embargo, bajo los**

' 19 de Diciembre a 11 de enero.

s Consejo de Estado-Sala de lo contencioso Administrativo- Sección Tercera-subsección "A '' C.P: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 09 de diciembre de 2013-(48152)

9 Carlos Betancur Jaramillo. Derecho Procesal Administrativo, cuarta edición. Pág. 156

w Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. No. 16541.

parámetros indicados por dicha Corporación, el presente asunto, no se

encuentra inmerso en las premisas descritas, sin que pueda entonces esta

operadora judicial acoger dicha posición.

**Procedencia del Medio de Control de Reparación Directa ante la Declaratoria de Nulidad de Actos Administrativos.**

Respecto a la procedencia de la acción de reparación directa, encaminada a obtener indemnización de perjuicios ocasionados por actos administrativos que fueron declarados nulos, y ai hacer un estudio de las diferentes posiciones adoptadas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Corporación en cita, precisó:

***“VI.2. Parámetros para determinar la procedencia de la acción de reparación directa para indemnizar perjuicios causados por actos administrativos desaparecidos del ordenamiento***

'14. Teniendo en cuenta la reseña realizada, la Sala encuentra que. a pesar de las diferencias existentes entre los fenómenos de revocatoria y nulidad, las consideraciones que llevaron a restringirla procedencia de la acción de reparación directa para obtener la indemnización de los perjuicios causados por los actos administrativos revocados, son igualmente aplicables para el caso de la reparación de daños originados en la nulidad de actos administrativos que, aunque de carácter general, afectaron directamente la situación particular de personas que tuvieron la posibilidad de ejercer contra ellos la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y ello al margen de los reparos legítimos que pueden formularse contra la regla jurisprudencial fijada para aquellos^ Lo anterior en virtud de la lógica que subyace a la estructura de las acciones contenciosas consagrada por nuestro ordenamiento jurídico (14.1) y en consideración a que dicha postura no contradice las reglas de decisión establecidas sobre el particular por la Sección Tercera (14.2).

“14.1. A propósito de las acciones contenciosas consagradas por el ordenamiento, la corporación ha sostenido de manera constante y reiterada que cada una de ellas persigue una finalidad especifica y, en consecuencia, no podría el juez, sin desconocer la estructura de los medios de control estipulados y, por ende. los principios que le dan su razón de ser, pronunciarse sobre peticiones distintas a aquellas susceptibles de ser ventiladas a través de la acción incoada. Es por ello que la idoneidad de la acción es un requisito sustancial de la demanda, indispensable para poder estudiar de fondo las pretensiones elevadas por un demandante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Asi, de tiempo atrás se ha indicado:

“La Sala relieva cómo a cada acción le corresponde una pretensión, según los hechos que conforman o constituyan el conflicto. El sistema procesal para endilgarle al Estado responsabilidad por daños está, en consecuencia, configurado por los arts. 85, 86 y 87 C.C.A. No se trata de un aspecto o tema librado o la voluntad de la parte actora, o de quien va a accionar. Si de los hechos se desprende una relación laboral, de carácter estatutario, el conflicto surgido deberá ser tramitado procesalmente por la acción prevista en el art. 85 del C.C.A. Si de esos hechos en cambio, se desprende la existencia de una relación contractual, el conflicto se deberá examinar por la acción del art. 87. Y si el conflicto de intereses no surge de ninguna relación jurídica en particular, sino que se fundamenta en el neminem laedere, la acción para enjuiciarlo será el art. 86 del C.C.A. Las pretensiones deben corresponder y armonizar con los hechos y con la acción que éstos determinen. Es en la demanda donde deben qiiedar debidamente fijados los hechos, planteada la acción y exigida la pretensiónL3~i.

"14.1.1. En materia de impugnación de actos administrativos es de anotar que la distinción entre las acciones de nulidad y las de nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, entre las pretensiones que se limitan a obtener la anulación de un acto administrativo y aquellas que, además; persiguen fines de restablecimiento del derecho, ha tenido una gran relevancia en nuestro ordenamiento jurídico, refrendada recientemente por la Ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo. En efecto, a partir del momento en

que la Ley 167 de 1941 "sobre organización de la jurisdicción contencioso- administrativa'’ eliminó el término de caducidad para las acciones de simple nulidad y, paralelamente, consagró uno de cuatro meses para las de plena jurisdicción —antecedentes de las de nulidad y restablecimiento del derecho—.. se estableció un sistema contencioso fundado en el principio según el cual las pretensiones impugnatorias que no impliquen restablecimiento de derechos de particulares pueden formularse en cualquier tiempo, en aras de proteger el principio de legalidad; mientras que aquellas que conlleven a dicho restablecimiento sólo pueden elevarse dentro de un término restringido, lo cual tiene por objeto garantizar la estabilidad de las situaciones jurídicas particulares definidas al amparo de actos administrativos.

"14.1.2. Claro, debe precisarse que, inicialmente, el criterio determinante para distinguir ambos eventos y, con ello, establecer la acción pertinente, era la naturaleza del acto cuya legalidad se cuestionaba ~acción de simple nulidad para los actos de carácter general y de plena jurisdicción para los particulares y concretos-: no obstante, con la adopción de la doctrina de los móviles y finalidades?381, si bien se cambió el criterio considerado -el objetivo perseguido por el actor en lugar de la naturaleza del acto *impugnadose* mantuvo y resaltó el principio enunciado como aquel que estructura el contencioso de la impugnación, esto es. el que distingue las demandas de nulidad susceptibles de ser interpuestas en todo tiempo, de aquellas acompañadas con pretensiones indemnizatorias o de restablecimiento del derecho, cuya interposición se limita temporalmente. Este principio fue mantenido en los artículos 84, 85 y 136 del Decreto 01 de 1984mv retomado en la redacción de los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 aunque con precisiones derivadas de las vicisitudes sufridas por la doctrina de los móviles y finalidades y que atañen. especialmente, a la procedencia de la acción de nulidad contra actos administrativos de contenido particularmi.

'14.1.3. Es precisamente en virtud de este principio, tal como surge de lo consagrado en los artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo. vigente al momento de los hechos y de la interposición de la demanda, que si un particular pretende el resarcimiento de perjuicios derivados directamente de la ilegalidad de un acto administrativo, debe acudir a la acción idónea para obtener ía anulación de este último y solicitar ei restablecimiento perseguido, es decir, debe incoar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término de caducidad previsto para el efecto. Asi pues; no sería procedente, sin desconocer el principio de distinción mencionado, prevalerse de las decisiones proferidas en ei marco de acciones de simple nulidad para alcanzar un pronunciamiento jurisdiccional sobre pretensiones de restablecimiento que, se insiste, debieron ser formuladas por una vía procesal especial. para la cual se estableció un término de interposición restringido. En palabras de la Corte Constitucionalm.

***“En realidad, el hecho de que no se haya reclamado en tiempo el reconocimiento de una situación jurídica individual afectada por un acto administrativo, impide de plano que pueda utilizarse el contencioso de simple anulación como medio para revivir nuevamente la posibilidad de reclamar por vía judicial, el restablecimiento del derecho presuntamente afectado.”***

1. En esta perspectiva, tampoco resultaría procedente que la acción de reparación directa se convirtiera en un mecanismo apto para eludir el término de caducidad de aquella establecida para solicitar la indemnización de perjuicios causados por actos administrativos ilegales, lo cual ocurriría si se admitiera que, por esa via, se estudiaran pretensiones indemnizatorias que debieron y pudieron formularse en el marco de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho que, sin embargo, no fueron instauradas dentro del término expresamente previsto para ello. Así las cosas, en todos los eventos en los que. como en el sub examine; se invoque como fuente del daño el actuar ilegal de la administración, concretado en la expedición de un acto administrativo declarado nulo, corresponde al juez examinar si las peticiones resarcitorias elevadas son de aquellas que pudieron formularse como subsidiarias a la solicitud de declaratoria de nulidad del acto en el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, de ser el caso, la procedente era esta última y no la de reparación directa incoada por fuera del término de caducidad previsto para el ejercicio de aquella.
2. Es importante precisar que a condición de que, en cada caso, se analice si. en realidadel demandante contaba con la posibilidad de interponer con probabilidades de éxito la acción idónea, la regla de interpretación fijada se acompasa con la garantía del acceso a la administración de justicia pues, por una parte, deja claro que el particular siempre cuenta con una acción tendiente a hacer valer las pretensiones indemnizatorias de los daños causados por la administración —aunque existan diferencias en los términos en los cuales puede ejercerlas— y, por la otra, se justifica perfectamente a la luz del principio legislativo que inspira la estructura de los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se recuerda que. al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido

“Integrar los conceptos de antiformalismo e interpretación conforme a la garantía consagrada en el articulo 229 de la Caita, en manera alguna busca desconocer o debilitar el papel protagónico que cumplen las reglas de procedimiento en la ordenación y preservación del derecho de acceso a la justicia, ni contraiiar el amplio margen de interpretación que el propio orden jurídico le reconoce a las autoridades judiciales para el logro de sus funciones públicas. Por su intermedio, lo que se pretende es armonizar y racionalizar el ejercicio de tales prerrogativas, evitando que los criteiios de aplicación de la ley, excesivamente formalistas, en cierta medida injustificados o contrarios al espíritu o finalidad de las nonnas aplicables, puedan convertirse en un obstáculo insuperable que terminen por hacer nugatorio eí precitado derecho a la protección judicial y, por su intermedio, el desconocimiento de valores superiores como la igualdad de trato, la libertad y el debido proceso."

1. Ahora bien, la regla mencionada no contradice la jurisprudencia de la Sección a propósito de la procedencia de la acción de reparación directa para demandar la indemnización de perjuicios causados por actos declarados nulos (14.2.1), aunque sí da tugara repensar algunos de sus elementos (14.2.2).
2. Si bien es cierto que algunos de los argumentos esgrimidos en las sentencias recogidas en la reseña podrían dar lugar a pensar que la regla jurisprudencial fijada por la Sección Tercera es la de la procedencia irrestricta de la acción de reparación directa para obtener el resarcimiento de daños ocasionados por actos administrativos de carácter general declarados nulos, también lo es que todos los supuestos fácticos de los casos decididos -es decir, lo que. junto con la ratio decidendi de la sentencia, constituye el precedente jurisprudencial- tienen que ver con ¡a reparación de perjuicios causados con ocasión de la aplicación de actos administrativos cuyos efectos particulares no se concretaban con su expedición y. en consecuencia. no podían ser demandados en acción de nulidad y restablecimiento inmediamente.

*14.2.1.2.* ***No ocurre asi en casos como en el del sub examine en d de. como se verá, el acto de carácter general afectaba directa*** e ***inmediatamente ¡a situación del particular quien, en esa medida, estaba legitimado para solicitar su nulidad y, de manera subsidiaria, el restablecimiento del derecho conculcado.***

***IV.3. El caso concreto***

15. La Sala encuentra que, a pesar de ser de carácter general, el acto mediante el cual se suprimió la planta de personal de la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía, esto es, el Decreto 2059 de 1997, tenía efectos particulares respecto de todos y cada uno de los empleados de la misma, pues como lo afirma la Sección Segunda:

***En efecto, cuando la administración adelanta un proceso de reestructuración y, en consecuencia, mediante un acto de carácter general suprime la totalidad de plazas dentro de una determinada planta de personal, como en el presente caso, no queda duda de que es el acto de carácter general el que afecta la situación particular del empleado, por lo que la pretensión de nulidad de la actora sobre el Decreto 2869 de 1999 se estima acertadaLm.***



(...)

1. ***En esas condiciones no cabe duda de que los demandantes no sólo tuvieron la posibilidad de ejercer la acción idónea para obtener lo***

pretendido, esto es, la de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Decreto 2059 de 1997, sino que, tal como quedó demostrado, al menos una de ellos asi lo contempló —supra 11.4—, sin embargo, se abstuvieron de hacerlo, por lo que la presente acción de reparación directa resulta improcedente.

1. Es de anotar que aunque en el trámite del proceso hayan indicado que sus pretensiones no eran de restablecimiento del derecho por cuanto no pidieron su reintegro, lo cierto es que sus solicitudes son de carácter eminentemente laboral, se derivan directamente de la declaratoria de nulidad del acto mediante el cual se suprimieron sus cargos y, de acuerdo con lo sostenido por la Sección Segunda de la corporación constituyen, sin lugar a dudas, un restablecimiento del derecho:

El restablecimiento del derecho tiene por objeto retrotraer las cosas a su estado anterior al anular los efectos del acto nocivo, de contera que, en materia laboral se crea una ficción jurídica que permite al juez declarar que no ha existido solución de continuidad. Esta decisión implica no solo el reintegro al cargo de quien fue desvinculado de la administración en forma ilegal, sino también el pago de salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir durante el tiempo transcurrido entre el retiro del servicio y el reintegro, debidamente index ados mes a mes.

Por el contrarío, la indemnización está condicionada previo la nulidad del acto, a la existencia de un perjuicio y su reconocimiento está dado por la compensación que él mismo causó.

Estas dos figuras no son excluyentes, pero si independientes y ambas tienen cabida en la acción subjetiva con la misma causa jurídica

1. Así pues, resulta claro que los demandantes se están valiendo de la declaratoria de nulidad proferida en el marco de una acción de nulidad simple como una manera de revivir los términos para solicitar una indemnización que pudieron pedir mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual la acción incoada resulta improcedente y, en consecuencia, hay lugar a proferir un fallo inhibitorio.,,11 (Negrillas y Subrayas del Despacho).

**En otro pronunciamiento el H. Consejo de Estado, se refirió respecto de los efectos de las sentencias que declaran la nulidad de actos administrativos, así:**

"En conclusión: *la acción de reparación directa es procedente para obtener la* *indemnización de perjuicios causados por un acto administrativo ilegal revocado* *en sede administrativa,* cuando la paite afectada ha solicitado su desaparecimiento por la vía gubernativa o mediante la revocatoria directa como mecanismo de control de la actuación administrativa."

Y-J

Tal y como quedó expuesto. en el apartado anterior, el hecho de que la declaratoria de nulidad de un acto tenga efectos ex tune o retroactivos, en modo alguno significa que dicha decisión judicial incida automáticamente en la validez de los actos administrativos particulares dictados con apoyo en aquel que configure situaciones consolidadas. esto es, que no hayan sido oportunamente discutidas administrativa o judicialmente dentro de los plazos y en la forma indicada por el ordenamiento jurídico.12

11 Sentencia 2003-00514 de octubre 9 de 2014 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA ~ SUBSECCIÓN ,:B': Consejero Ponente: Dr. Danilo Rojas Betancourth Expediente: 32 567 Radicación: 250002326000200300514-01 (acumulado) Actor: Amparo Rubio Díaz y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional Naturaleza: Reparación directa. Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil catorce.

12 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA, Sentencia 24 de agosto de 1998, rad. 13685, C.P. Daniel Suárez Hernández.

Oportunidad para atacar los actos que consideró afectaron su

patrimonio

En otro pronunciamiento, el Alto Tribunal Administrativo, reiteró que los actos que no fueron demandados oportunamente por la parte interesada, la reclamación posterior, no tiene la posibilidad de revivir los términos para activar el aparato judicial, al puntualizar:

"...En criterio de la Sala. con los actos administrativos proferidos con anterioridad[. la administración se pronunció negativamente sobre el reintegro de los descuentos efectuados al salario de la actora durante los meses de maiio. mayo, junio y julio de 2002. agotándose de esta forma la vía gubernativa, motivo por el cual, tales manifestaciones de voluntad, constituyen "actos decisorios'' que definen en forma negativa el derecho reclamado por la actora. actos que no fueron demandados en forma oportuna, transcurriendo en demasía el término de caducidad de cuatro (4) meses, previsto en la ley.

Así las cosas: como tales actos no fueron oportunamente demandados por ia actora. se presentó el fenómeno de caducidad de la acción, situación que inhibe a la Sala para realizar un pronunciamiento de fondo en torno a la legalidad de los mismos. Además: debe tenerse en cuenta que la reclamación que en idéntico sentido formuló la demandante el 29 de marzo de 2005 (fls. 222 a 232, cdno. 2), y que dio lugar a la expedición de los actos demandados mediante la presente acción (res. 1951/2005 y 3175/2005). no tiene la virtualidad de revivir los términos para el ejercicio de la acción, tal y como se desprende del artículo 72 del Código Contencioso Administrativo, cuyo texto consagra lo siguiente:

"Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo".

En este orden de ideas. los nuevos pronunciamientos de la administración contenidos en las resoluciones demandadas, no revivieron ios términos para el ejercicio de la acción judicial que debió interponer la actora en forma oportuna contra los actos administrativos decisorios que se produjeron en tiempo anterior, con los cuales se definió su situación jurídica particular respecto a la pretensión en controversia.

Es decir, los actos demandables para lograr la devolución o reintegro de los salarios descontados, lo eran: oficio S-2002-033725-S de mayo de 2002 (fls. 131 y 131. cdno. 2). oficio 421-S-033729 de 8 de mayo de 2002 (fl. 133, cdno. 2). oficio 420-GN-S-048297 de 25 de junio de 2003 (fls. 178 a 180. cdno. 2). oficio 420-GN- S-047048 de 26 de junio de 2003 (fls. 183 a 184, cdno. 2). oficio S-2004-421- 070763 de 13 de septiembre de 2004 (fls. 197a 201. cdno. 2), pues con ellos se agotó la vía gubernativa respecto a la pretensión de reintegro de salarios de la actora, y no mediante las resoluciones demandadas ya que estas fueron expedidas como consecuencia de un nuevo pedimento efectuado por la demandante el 29 de marzo de 2005[ y no hacen más que reiterar las razones expuestas en los actos anteriores, tal y como se desprende del contenido de ¡as resoluciones 1951 y 3175 de 2005 (fls. 54 a 69), por lo que se reitera, no revivían el término para ei ejercicio de la acción.

Esta omisión en el ejercicio de la acción oportuna contra el acto que le niega a la actora el reintegro de los salarios descontados durante los meses de marzo, mayo, junio y julio de 2002, no puede suplirse como lo pretende la demandante, elevando una nueva petición a la administración en el mismo sentido para así iniciar la demanda teniendo en cuenta el término de caducidad sobre una respuesta en la cual la administración reitera sus planteamientos en torno a ia decisión de negar las pretensiones de la demandante, pretendiendo con ello revivir el término para demandar el acto administrativo que realmente contiene la negativa ai reconocimiento laboral reclamado.

En conclusión, las resoluciones 1951 de 6 de mayo de 2005 y 3175 de 1o de agosto de 2005, no tenían la virtualidad de revivir el término para pretender el reintegro de los salarios descontados, pretensión que le fuera negada a la actora mediante comunicaciones anteriores, siendo la última de ellas, la contenida en la

comunicación S-2004-421-070763 de 13 de septiembre de 2004 (fls. 197 a 201. cdno. 2), por lo cual la Sala no puede efectuar pronunciamiento de fondo sobre tal pretensión.

Así las cosas, como se evidencia un impedimento procesal para pronunciarse sobre la pretensión de reintegro de los salarios descontados durante los meses de marzo, mayo, junio y julio de 2002, la Sala procederá a revocar la sentencia de primera instancia que ordenó dicho reintegro, para en su lugar; inhibirse de decidir sobre el mismo. ”13.

**Conciusión**

**En cuanto lo precedente, es necesario precisar que:**

**Analizada la foliatura, encuentra el despacho que la supresión del cargo que ocupaba el señor Wilson Alvear González, se originó en el año 1999, como consecuencia del proceso adelantado por la entidad territorial con el objeto de reestructurar la planta de cargos.**

**Aclarado que, es una omisión pasible de ser demandada ante la jurisdicción contenciosa administrativa, se considera que en el caso de autos está ampliamente superada la oportunidad para promover ei medio de control de reparación directa, comoquiera que el retiro del servicio del actor se ocasionó en el año 1999, para tal efecto el término máximo para poner funcionamiento el aparato judicial era el día viernes 11 de enero de 2002 y la demanda fue presentada el día 15 de julio de 2016, a pesar de que también tenía a su disposición la declaratoria de nulidad del acto particular, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.**

**Asi las cosas, se rechazará el medio de control promovido, por todas las razones aquí señaladas.**

**En consecuencia, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de**

1. **Rechazar la demanda presentada por el señor Wilson Alvear González, a través de apoderado judicial, contra el Departamento del Valle del Cauca, por las razones anotadas**
2. **Sin necesidad de desglose, devuélvanse a la parte demandante los anexos que en original acompañó con su libelo.**
3. **En firme este proveído, procédase al archivo del expediente previa cancelación de su radicación.**

**Notifíquese y Cúmplase,**

**53** Sentencia 2006-00795 de febrero 27 de 2013 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCtÓN **“S'\*** Rad: 25000-23-25-000-2006-00795-01 (1477-2009) Consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve Actor: Sonia Constanza García Gómez Demandado: Bogotá Distrito Capital - Secretaria de Educación Distrital Autoridades distritales Bogotá. D C., veintisiete de febrero de dos mil trece.

**Cali**

**RESUELVE:**

Juez



I



REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI

Auto Interlocutorio S.E. No.

Proceso N°: 76001 -33-33-008-2014-00356-00

Demandante: MARIA DEL SOCORRO DIAZ BECERRA

Demandado: MUNICIPIO DE PALMIRA

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LABORAL

Santiago de Cali,

Estando pendiente de fijar hora y fecha para la continuación a la audiencia inicial, en cuanto al medio de control interpuesto por la señora MARIA DEL SOCORRO DÍAZ BECERRA contra el MUNICIPIO DE PALMIRA, no obstante se evidencia que este despacho carece de jurisdicción, previo los siguientes:

1. ANTECEDENTES.

La parte demandante promueve el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, y como restablecimiento del derecho, se le reconozca el 50% de la pensión de sobrevivientes por haber demostrado la convivencia con el causante Héctor Antonio Campo.

Así las cosas, procede el Despacho a resolver, previas las siguientes:

1. CONSIDERACIONES
2. **JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.**

El objeto de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, versa sobre ‘‘las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”, en los términos del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esta disposición desarrolla los asuntos objeto de conocimiento, estableciendo en materia laboral y de seguridad social:

*“ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que*

*estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*

*Igualmente conocerá de los siguientes procesos:*

(...)

1. *Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos* y *el Estado,* y *la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.”*

De manera que en materia de seguridad social, los asuntos objeto de conocimiento de esta jurisdicción son aquellos que versan sobre las controversias de los servidores públicos vinculados por medio de una relación legal y reglamentaria, esto es, de los empleados públicos, cuando su régimen se encuentra administrado por una entidad pública.

No obstante, debe tenerse claro entonces que se excluye de esta jurisdicción el conocimiento de controversias generadas entre trabajadores oficiales, el artículo 105 ibidem prescribe:

*“Art. 105.- Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (...) 4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales” (subrayas fuera del texto).*

Por su parte, el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que fue modificado por la Ley 712 de 2001, y finalmente determinado por el artículo 622 del CGP, determina el objeto de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en los siguientes términos:

*“4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica* y *los relacionados con contratos".”*

Así las cosas, en las controversias relacionadas con la seguridad social, habrán de determinarse, en primer lugar, si quien reclama su derecho pensional es un empleado público y en segundo lugar, si la administradora del régimen es una entidad de derecho público, para determinar la jurisdicción que ha de tramitar el asunto.

El artículo 4o del Decreto 2145 de 1948 “Por el cual se reglamenta la ley 6a. de 1945, en lo relativo al contrato individual de trabajo, en general.” sostuvo en cuanto a que no son empleados públicos quienes tengan que ver con construcción o sostenimiento de obras públicas,

*“ARTICULO 4o. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las relaciones entre los empleados públicos y la administración Nacional, Departamental o Municipal no constituyen contratos de trabajo, y se rigen por leyes especiales, a menos que se trate de la construcción o sostenimiento de las obras públicas, o de empresas industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten con fines de lucro, o de instituciones idénticas a las de los particulares o susceptibles de ser fundadas y manejadas por estos en la misma forma.”*

En tratándose de trabajadores oficiales, es necesario remitirse al Decreto 3135 de 1968, que fue expedido con posterioridad al anterior, el cual dispone:

“I Decreto 3135 de 1968, regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales, señalando en su artículo 5o lo siguiente: “Artículo 5°.- Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. Las personas que prestan sus servicios en los Ministerios; Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos *son empleados públicos: sin* *embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras* *públicas son trabajadores oficiales.* En los estatutos de los Establecimientos Públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo

Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industríales y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.

S. ” (Resaltado fuera del texto original)

**Ahora bien, ha sostenido el Consejo de Estado1, que las convenciones colectivas benefician únicamente a los trabajadores oficiales, agregó:**

“Al quedar claro que los únicos servidores públicos que pueden ser beneficiarios de las disposiciones de las convenciones colectivas son los trabajadores oficiales, se debe determinar si las cláusulas convencionales que mejoran las condiciones salariales y prestacionales de dichos trabajadores se siguen aplicando, aun cuando cambie su condición y pasen a ser empleados públicos." (Resaltado fuera del texto original)

**Igualmente, téngase presente que, la parte actora manifiesta, (entendido bajo la gravedad de juramento), que el causante tenía como cargo, el de vigilante y aseador, la Corte Constitucional en sentencia T-485 de 2006, específica:**

“Por su parte, el manual de funciones del Hospital Louis Pasteur E.S.E de Melgar, Tolima, clasificó el trabajo de celaduría, vigilancia y portería, como una labor propia de servicios generales.

Por lo tanto, no podía la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué ignorar lo que preveían las normas legales vigentes que regulan las plantas de personal de las empresas sociales del estado del nivel temtorial y concluir de manera contraria a lo que ellas establecen, que los celadores, porteros y vigilantes no eran trabajadores oficiales, puesto que todas ellas clasifican esa labor como una actividad propia de servicios generales, y asignan a dichos trabajadores el carácter de oficiales. ” (resaltado fuera del texto)

**Igualmente, en tratándose de Empresas Industriales del Estado, la regla general es que sus trabajadores sean oficiales y no empleados públicos, así lo señala el Consejo de Estado2:**

“Se establece que las personas que presten sus servicios a Empresas Industriales y Comerciales del Estado, ostentan la calidad de trabajadores oficiales, excluyendo a quienes en los estatutos de la empresa se precise que desempeñan funciones de dirección o confianza, los cuales se consideran

1 CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCION SEGUNDA-SUBSECCION B-Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE-Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil trece (2013).- Radicación número: 25000-23-25-000-2010-01004-01(2111-12)

2 CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCION SEGUNDA-SUBSECCION B-Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE-Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciséis (2016).-Radicación número: 76001-23-31-000-2010-01895-01 (0234-14)

*empleados públicos. Teniendo en cuenta que lo que determina cuál es la jurisdicción que ha de conocer de los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral no es la naturaleza del acto en el que se consagra el derecho reclamado sino la relación de trabajo dependiente, reitera el Despacho que el asunto bajo análisis no compete a esta jurisdicción, sino a la jurisdicción ordinaria. ” (Resaltado fuera del texto original)*

1. **DEL CASO EN CONCRETO.**

En el presente asunto, se advierte que la señora MARIA DEL SOCORRO DIAZ BECERRA, en calidad de presunta compañera permanente, promueve una demanda a fin de obtener una pensión de sobrevivientes del causante HECTOR ANTONIO CAMPO quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía No. 6.372.358. Es por lo anterior, que se verificará sí en su condición de jubilado como servidor público era la de empleado público o trabajador oficial.

Cabe resaltar que mediante Resolución No. 0805 del 10 de mayo de 1994 (fl. 226-227) en su parte motiva, enuncia “de conformidad en lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo, firmada el 24 de marzo de *1993,* CLAUSULA 78, EMPALMIRA jubilará a sus trabajadores que hayan laborado en ella durante (20) años o más continuos o discontinuos con 48 años de edad y con el 100% del salario promedio devengado en el último mes de servicios.” Reconociéndole su pensión de jubilación en los mismos términos.

Igualmente, obra contrato de trabajo entre el señor Danilo Plata H como representante legal de Empresas Públicas de Palmira denominado patrono y el señor Héctor Antonio Campo, suscrito el 06 de septiembre de 19'73. (fls. 163)

Que mediante Resolución No. 1302 de octubre 02 de 1974, “por medio de la cual se hacen unos nombramientos de obreros" se nombró al señor Héctor Antonio Campo en el cargo de supernumerario sección Alcantarillado.

Al analizar los fundamentos tácticos de la demanda, de conformidad con el material probatorio aportado, se advierte que el objeto de la jurisdicción administrativa no le corresponde ésta clase de asuntos, en cuanto se trata de un trabajador vinculado a través de contrato de trabajo y no de un acto legal y reglamentario. Además fue beneficiario de convención colectiva, a quienes como trabajadores oficiales cobija tal prerrogativa, sin echar de menos que, en ningún momento se trata de un cargo de dirección y de confianza ejercido por el causante.

En cuanto a las funciones desempeñadas por el señor Héctor Antonio Campo si bien no se aportó el manual de funciones de la empresa, no lo es menos que al ser contratado como supernumerario de Alcantarillado, su función hacía parte de los servicios generales, que como se revela, manifestó la parte actora el trabajador estuvo en el cargo de aseador y vigilante, encasillado por el Municipio de Palmira como trabajador oficial.

No obstante a pesar de que el derecho suscitado por la presunta convivencia entre María del Socorro Díaz y el señor Héctor Antonio Campo es administrado por una entidad de derecho público, de conformidad con las consideraciones expuestas, el asunto no es atribuible a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por no acreditarse los supuestos de que trata el artículo 104 numeral del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

*i .* .

La jurisdicción idónea para conocer de los procesos que versen sobre controversias de la seguridad social de los afiliados con las entidades administradoras o prestadoras, cuando los mismos no son empleados públicos, es la ordinaria, de conformidad con las reglas de competencia establecidas en la legislación laboral, en específico, el artículo 2 numeral 4, en concordancia con el artículo 13 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por lo que habrá de declararse FALTA DE JURISDICCIÓN y remitir al juez competente.

En cumplimiento a lo anterior, y de conformidad al artículo 168 de la ley 1437 de 2011 así como el artículo 138 del CGGP, adviértase que lo actuado guardará validez y se procederá a remitir de inmediato al juez competente.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI,

PRIMERO. DECLÁRASE falta de jurisdicción para conocer de la demanda interpuesta por la señora MARIA DEL SOCORRO DÍAZ BECERRA en contra del MUNICIPIO DE PALMIRA, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DETERMINAR que lo actuado guardará validez y en consecuencia, REMITIR el presente asunto al juez laboral del circuito de Cali (Reparto) para lo de su competencia.

Notifíquese y Cúmplase

**RESUELVE:**

juez



/

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali, ¡ j . j

Auto Interlocutorio S.E. No. .

Proceso No.: 76001-33-33-008-2016-00216-00

Demandante: Mónica Castillo Cortes

Demandado: Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores de

Colombia - Embajada de Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho-Laboral

La señora Mónica Castillo Cortes, actuando a través de apoderado judicial, instaura demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia - Embajada de Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución No. 228 del 20 de enero de 2016, suscrita por la Ministra de Relaciones Exteriores, a través de la cual declaró insubsistente a la demandante del cargo que ocupaba, en calidad de auxiliar de misión diplomática código 4850, grado 16 de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Así mismo, solicita que se declare la nulidad del “acto administrativo del cual se desató desfavorablemente el recurso interpuesto por la Demandante", observa el despacho que se refiere al oficio No. S-GAPT-16-038331 del 15 de abril de 2016, suscrito por el Director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del cual informó al apoderado de la demandante, que no es posible acceder a la petición de reintegro, no obstante lo anterior, es menester precisar que en el documento en mención, no desató ningún recurso por su improcedencia, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2o del numeral 2o artículo 74 del C.P.A.C.A.

A título de restablecimiento solicita que se ordene a la entidad demandada, el reintegro al cargo que ocupaba y como consecuencia de ello, el pago de las prestaciones sociales, sin solución de continuidad.

Estando el asunto para el análisis de la admisión del libelo demandatorio, encuentra el despacho que el numeral 3o del artículo 156 de la ley 1437 de 2011 establece el factor territorial en cuanto a medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, señala:

*ARTÍCULO 156. COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO.* Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:

*“(■■■)*

1. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral de determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios (...)”

Ahora bien, teniendo en cuenta el material probatorio que reposa en el plenario, se observa que la señora Mónica Castillo Cortes, fue nombrada mediante la Resolución No 2647 del 01 de julio de 20101, emitida por el Ministro de Relaciones Exteriores, quien tomó posesión del cargo de auxiliar de misión diplomática, código 4850, grado 16, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, el día 12 de julio de 20102, en la ciudad de Londres ante el Embajador de Colombia en el Reino Unido.

Por su parte, se tiene que la demandante prestó sus servicios, como personal de apoyo en el exterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 literal h) y 7 del Decreto 274 de 2000, el cual consistía en ejercer labores propias del servicio doméstico de la residencia oficial del Embajador, colaborar en eventos sociales que se desarrollen en la misión, propia de la representación diplomática, actividades que fueron ejecutadas en la ciudad de Londres (folios 21 y 44).

Convine destacar, que para establecer la competencia como factor territorial, en materia laboral, tiene un fundamento en los principios de eficacia, celeridad, economía procesal, tal como lo indicó la H. Constitucional al señalar lo que se resalta a continuación:

"La Corte encuentra que la competencia territorial establecida en la norma controvertida es razonable, pues conserva un principio lógico de relación entre lo que se pretende con la demanda: la nulidad y restablecimiento del derecho, en un asunto laboral, y el sitio donde se debe incoar: el último lugar donde se prestó o debió prestar el servicio. Obsérvese que no se están introduciendo elementos extraños en la fijación de la competencia, sino que. por el contrario, se parte de un elemento directo: el último lugar donde se prestó el servicio. El legislador consideró que en este lugar se deben encontrar los elementos que permitirán que la administración de justicia se imparta de conformidad con los principios de eficacia, celeridad, economía procesal, al existir el contacto inmediato con los documentos y pruebas de la relación laboral. "3

Sobre este factor territorial ha sido discurrido por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 23 de enero de 20144, al expresar que:

“Por último, se encuentra el criterio territorial con el cual se precisa la asignación horizontal de la competencia. A la luz del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este item es desarrollado por el artículo 156.

La trasgresión a los criterios de competencia constituye una causal de nulidad de

lo actuado en el proceso, de acuerdo con lo señalado en el artículo 140.2 del Código de Procedimiento Civil, aunque comporta consecuencias diferenciadas en razón al tipo específico de vicio que se configure. (...)'5

Así pues, resulta claro que este despacho carece competencia en razón al factor del territorio, debiendo asumir la competencia los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá (Reparto), pues el servicio fue prestado en una circunscripción geográfica diferente a la señalada en este Circuito Judicial, por ende es necesario dar aplicación a la norma de carácter general, en relación con el medio de control ejercido, esto es, de nulidad y

1 Folio 12 c. único

2 Folio 13 c. único

3 *Corte Constitucional - C-540 de 1999 Demandante: Jorge Alberto González Forero. Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA. Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, Distrito Capital, según consta en acta número treinta y cinco (35), a los veintiocho (28) dias del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999).*

4 *Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-M.P: Dr. Jorge Octavio Ramirez- Rad- 110010327000201200065 01 (19842) Conflicto de competencias*

5 *Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera-Subsección C-C.P: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA-17 de octubre de 2013*

3

restablecimiento del derecho, prevista en el 2o del artículo 156 del C.P.A.C.A.

que reza:

*ARTÍCULO 156. COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO.* Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:

*“(...)*

1. En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se expidió el acto, o por el del domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga oficina en dicho lugar. (...)"

En esta medida, resulta claro que el factor territorial determina y asigna competencia a los jueces administrativos pertenecientes a la jurisdicción, teniendo en cuenta que dentro en este Distrito Judicial no prestó sus servicios laborales la demandante, se remitirá al Circuito Judicial donde se emitió el acto administrativo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Acotado a lo anterior, resulta claro que este despacho carece de competencia en razón al factor del territorio, debiendo asumir el asunto, los juzgados administrativos del Circuito Judicial de Bogotá (Reparto). Conforme lo anterior, se dará aplicación al artículo 1686 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo anterior el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali,

RESUELVE:

PRIMERO. Declarar que el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, carece de competencia territorial, para conocer del presente proceso, en virtud de lo señalado con antelación.

SEGUNDO. Remitir a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá (Reparto), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO. Envíese el expediente a la oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados Administrativos para lo de su cargo.

CUARTO. En firme este proveído, cancélese su radicación y anótese su salida.

Notifíquese y Cúmplase,

MQNICA LONDOÑO FORERO

Juez /

*FALTA DE qUfySwICCIÓN* O *DE COMPETENCIA En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motiva^ffjhl\juéz ordenará remitir el expediente al competente*, *en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión.*

CONSTANCIA SECRETARIAL

A despacho del juez, a fin de resolver el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la parte demandada, habiéndose corrido traslado del recurso. Sírvase Proveer.



\_INA HERNANDEZ aria

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Auto Interlocutorio N°

Proceso N°: Demandante: Demandado: Acción:

008-2006-0012-00  
Ángel María Álvarez Murillo  
UGPP  
Ejecutiva

Santiago de Cali,

En virtud de la constancia secretarial que obra en el cuaderno principal respecto a un recurso de reposición, se debe hacer mención a lo siguiente:

**AUTO RECURRIDO**

A través del **Auto interlocutorio No. 269 del 06 de Abril de 2016 (fl. 49-52),**

este despacho decidió librar mandamiento de pago.

**RECURSO DE REPOSICIÓN**

A folio 73-81 del cuaderno principal, el apoderado judicial de la parte demandada, formula recurso de reposición contra el auto que libra mandamiento de pago.

Se corrió traslado del recurso del 26, 27 y 28 de julio de 2016, dentro de los cuales, la parte actora descorrió el traslado (fl. 92-99).

Conforme con lo expuesto, considera el reccurrente, que el título que sirve de base de ejecución debería ser un título complejo, compuesto tanto de la sentencia judicial como del acto administrativo de cumplimiento.

Igualmente, afirma que existe una indebida forma de liquidación del

mandamiento de pago, considerando que se tiene que la no presentación de la documentación en debida forma genera la cesación de causación de

intereses de todo tipo, puesto que este solo causa efectos hasta que se informe

debidamente el titulo ejecutivo, es decir, hasta cuando se aporte la totalidad de

la documentación exigida tal y como lo establece la norma.

También, propone **falta de legitimación en la causa por pasiva.**

**TRÁMITE DE EXCEPCIONES**

Igualmente, mediante memorial visible a folio 59 del expediente, la parte actora formula excepciones denominadas “excepción de pago de la obligación demandada” “Cobro de lo no debido” “Caducidad de la acción ejecutiva”

**CONSIDERACIONES RECURSO DE REPOSICIÓN**

A fin de resolver el recurso interpuesto, la Ley 1437 de 2011, previo lo atinente al recurso de reposición de la siguiente manera:

*Artículo 242. Reposición. Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica.*

*En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.*

Conforme lo ordena tal canon procesal, se debe remitir a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, en lo que tiene que ver con el recurso de reposición, vale rescatar que el artículo 318 precisó que el recurso debe interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto, comoquiera que la providencia fue notificada el 13 de abril de 2016 (fl.53), y el recurso fue formulado el día 13 de Mayo de 2016 (fl.73), se considera que fue interpuesto de manera extemporánea, por lo que será rechazado.

**EXCEPCIONES DE MÉRITO**

Habiéndose propuesto excepciones de mérito por la parte demandada en el término legal oportuno, según documento visible a folio 59 del expediente, se procederá a correr traslado para los fines pertinentes.

Lo anterior, conforme lo dispone el numeral 1 del artículo 443 del CGP, el cual así dispone:

“Artículo 443. Trámite de las excepciones.

*El trámite de excepciones se sujetará a las siguientes reglas:*

1. *De las excepciones de mérito propuestas por el ejecutado se correrá traslado al ejecutante por diez (10) días, mediante auto, para que se pronuncie sobre ellas, y adjunte o pida las pruebas que pretende hacer valer. ”*

En mérito de lo expuesto el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali,

RESUELVE:

1. RECHAZAR POR EXTEMPORANEO el recurso de reposición, promovido

por la demandada en contra del auto que libró el mandamiento de pago.

1. TENER por presentada la contestación por parte de la UGPP, en la que propuso excepciones de mérito.
2. CORRER traslado a la parte ejecutante de la excepción propuesta por la entidad demandada, por el término de Diez (10) días siguientes a la notificación del presente proveído, según las razones expuestas en este proveído.
3. RECONOCER personería jurídica al Dr. Carlos Alberto Vélez Alegría identificado con cédula de ciudadanía No. 76.328.346 y portador de la tarjeta profesional No. 151.741, como apoderado judicial de la UGPP, de conformidad al poder a él otorgado.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez.

MpNICA LONDC



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali,

Auto Interlocutorio No.

ACCION:

DEMANDANTE:

DEMANDADO:

VINCULADO:

RADICACIÓN:

TUTELA- Incidente de desacato

José Joaquín Oviedo Cárdenas (Carmen Ofelia

Cárdenas Oviedo)

NUEVA EPS  
Clínica DESA  
2016-00063-00

Mediante Sentencia No. 060 del 07 de abril de 2016 proferida por este Juzgado, en su parte resolutiva ordenó:

*“(...) PRIMERO: TUTELAR* el derecho fundamental a la dignidad humana de la señora Carmen Ofelia Cárdenas de Oviedo identificada con la cédula de ciudadanía no. 27.398.120 de Pupiales-Nariño, en los términos de la parte considerativa de esta providencia. *SEGUNDO.-* Respecto de los hechos que motivaron la petición de medida provisional se ha evidenciado un hecho superado. *TERCERO.- ADVIÉRTASE* a la NUEVA EPS y a la clínica DESA, para que en ningún caso vuelvan a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela (retención de un paciente), de conformidad a lo establecido en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. *CUARTO.- TUTELAR* el derecho fundamental al mínimo vital del señor José Joaquín Oviedo Cárdenas identificado con la cédula de ciudadanía no. 98.362.708 de Pupiales-Nariño, en razón a los motivos expuestos en esta providencia. *QUINTO.-* ORDENAR a la Nueva EPS que se abstenga de realizar cobros, en adelante, por concepto de copagos o cuotas moderadoras por la prestación de los servicios en salud que tenga que brindar a la señora Carmen Ofelia Cárdenas de Oviedo identificada con la cédula de ciudadanía no. 27.398.120 de Pupiales-Nariño, para el tratamiento integral del diagnóstico “artritis reumatoide”, así como también, para el diagnóstico médico establecido en la remisión 201603020155-1 del 03 de marzo de 2016, consignado por el médico tratante Fernando Arturo Chacón Yépez del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., visible a folios 10-14 del expediente. *SEXTO.-* FACULTAR *a LA NUEVA EPS* a recobrar ante el FOSYGA los gastos en que incurra por el tratamiento médico autorizado a la señora Ofelia Cárdenas de Oviedo identificada con la cédula de ciudadanía no. 27.398.120 de Pupiales-Nariño, excluido del Plan Obligatorio de Salud Unificado y que fueron objeto de esta acción constitucional. *SÉPTIMO.- NIÉGUENSE* las peticiones sobre ordenes futuras e indeterminadas *OCTAVO.-* En firme esta sentencia de tutela, y en caso de no ser impugnada remítase a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión. *NOVENO.-* Contra el presente fallo procede su impugnación ante el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. (...)”

El accionante, presentó escrito el 08 de agosto de 2016 (fl.1-4), informando el incumplimiento de la providencia referida.

Por lo antes expuesto, el despacho ordenará requerir y oficiar previo a dar apertura al incidente de desacato a la Gerente Regional de la entidad accionada, para que en un término no mayor a (48) horas, se sirvan dar cumplimiento a la sentencia No. 060 del 07 de abril de 2016, proferida por este Juzgado.

Por lo expuesto anteriormente y acorde a lo dispuesto en el artículo 27 del decreto 2591 de 1991, el Despacho

**RESUELVE**

PRIMERO-. Requiérase y Ofíciese previo a dar apertura al Incidente de Desacato a la Gerente Regional de la Nueva EPS, para que en un término no mayor a (48) horas, se sirva dar cumplimiento a la sentencia No. 060 del 07 de abril de 2016, proferida por este Juzgado

SEGUNDO.- Hágase entrega de la copia simple de este auto, así como de la sentencia y los memoriales del incidentante.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Jue¿



JCO.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali, once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016)

**Auto Interlocutorio N° 728**

Proceso No.: 76001-33-33-008-2016-00211-00

Demandante: Elmer Enrique Reyes Briñez y otros

Demandado: Municipio de Santiago de Cali

Medio de Control: Reparación Directa

Al revisar la actuación contenida en el plenario, se observa que la presente demanda se admitió, a través de la providencia No. 712 dei 08 de agosto de 2016, donde se plasmó el motivo que originó la demanda e indicó parcialmente la conformación del extremo activo.

Ahora bien, mediante escrito presentado por la apoderada de la parte actora afirma que no se incluyó el nombre de la menor Laura Tatiana Reyes Giraldo en calidad de hija del señor Elmer Enrique Reyes Briñez, así señala que el señor Franklin Raúl Reyes Briñez, que es el hermano y el señor Nelson Reyes, es el padre del lesionado.

Sobre la figura de ia corrección de providencias, el H. Consejo de Estado ha discernido lo siguiente:

'(...) Los artículos 309 a 311 del Código de Procedimiento Civil establecen las figuras de la aclaración, corrección y adición de la sentencia, como un conjunto de herramientas dispuestas por el ordenamiento para que de oficio o a petición de parte, se corrija por el juez, las dudas, errores, u omisiones en que se pueda haber incurrido al proferir una determinada decisión judicial o. se constate por este, la falta de pronunciamiento o resolución de uno de los extremos de la litis o de cualquier aspecto que debía ser objeto de decisión expresa.

*Así, la aclaración y la corrección tienen su razón de ser en cuanto buscan solucionar las posibles incongruencias que se hayan presentado en el texto de las providencias judiciales. Se traducen, concretamente, en la potestad de dar claridad sobre ciertos aspectos que se encuentran contenidos en la parte motiva de los autos o sentencias, y que, de una u otra forma, se ven reflejadas en la resolutiva de manera directa o indirecta; ahora bien, la corrección busca subsanar cualquier tipo de yerro aritmético o gramatical, bien por acción, ora por omisión, que influyan en la providencia.*

Cabe advertir que por medio de estos mecanismos no les es dado a las partes o al juez abrir nuevamente el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que se corrige, aclara o adiciona. (...) " (N.f.d.o.)

El artículo 286 del Código General del Proceso, estableció lo concerniente a la corrección de providencias, precisando:

' Sentencia 1995-00389 de enero 30 de 2013 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Rad.: 05001-23-31-000-1995-00389-01 (25.179) Consejero Ponente: Dr. Ennque Gil Botero Actor: Leonel Antonio García Patino y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil Asunto: Acción de reparación directa Bogotá. D.C, treinta de enero de dos mil trece.

*“Articulo 286. Corrección de errores aritméticos y otros.*

Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.

‘Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.

“Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en ¡a parte resolutiva o influyan en ella."

Por su parte, la apoderada de la parte actora, citó el artículo 287 del C.G.P., argumentando que debe incluirse en el auto admisorio a las personas antes citadas:

*“Articulo 287. Adición.* Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debia ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementadon podrá recurrirse también la providencia principal."

Respecto al tema, es importante aclarar la competencia del juez en la emisión del auto admisorio de la demanda, y tener en cuenta el estudio efectuado por el H. Consejo de Estado, en relación a su alcance y efectos del auto admisorio de la demanda, al precisar:

*“ii) Finalidad, alcance y efectos del auto admisorio de la demanda.*

El artículo 75 del C. de P. C., prevé los elementos que necesariamente debe contener la demanda, en tanto hacen parte del conjunto de presupuestos necesarios para que el proceso se desarrolle normalmente, es decir. de conformidad con las etapas e instancias previstas por el ordenamiento y. por supuesto, con observancia del debido proceso, en ausencia, por ende, de cualquier evento o circunstancia que implique la invalidez o vicio del mismo.

TJ

Ahora bien, una de las etapas de control y saneamiento del proceso prevista en el ordenamiento la configura el instante en el cual el Juez realiza el análisis de admisibilidad de la demanda, a partir del cual la ley lo faculta para ejercer una de tres actuaciones; la admisión, la inadmisión o el rechazo de la demanda!

Por el contrario, cuando la demanda reúna los requisitos legales se admitirá y se le dará el trámite legal que corresponda.

Con todo, debe mencionarse que las atribuciones otorgadas a los operadores judiciales en la etapa de admisibilidad de la demanda se encuentran sometidas a unos límites impuestos por el mismo ordenamiento y por los extremos contenidos en la propia demanda, estos últimos, en tanto manifestación de la voluntad de los sujetos de derecho.

*'(...)*

Ahora bien, en relación con los efectos del auto admisorio de la demanda respecto de las personas que figuran en dicho acto procesal como demandantes, las

*anteriores consideraciones encuentran plena aplicación; en el sentido de que la aludida providencia judicial no tiene como objeto o efecto modificar excluir, incluir, condicionar o determinar de manera alguna quiénes deben integrar los extremos activos o pasivos del proceso, a menos que para ello el juez ejerza las atribuciones previstas en el ordenamiento, caso en el cual dichas funciones deben ejecutarse en los precisos términos regulados, sea, por ejemplo, para inadmitir o rechazar el libelo o para integrar el litisconsorcio necesario, de conformidad con el artículo 83 del C. de P. C2.*

***Refuerza la anterior argumentación, la circunstancia de que la ley no exige de manera obiigatoria e ineludible que en el auto que admita la demanda se deban mencionar ios demandantes con nombre propio, en la medida en que la ley es clara al indicar que si el libelo reúne los requisitos “ei ponente debe admitirla***" ***sin expresar mayores formalidades en cuanto a ia estructura de la providencia***.

*Lo anterior permite concluir sin mayor dificultad, que la mención de los nombres de los demandantes en el auto que admita la totalidad del escrito no resulta vinculante de forma alguna, de manera que el ponente bien podría no hacer referencia alguna a la identidad del demandante o, si son varios, no habría problema en que se indicara el nombre de una persona seguido de las palabras* "y *otro(s)’!.*

*En este orden de ideas, si la mención de los nombres de los demandantes -caso en que sean varías personas las que formulen pretensiones~ en el auto que admite la demanda no resulta obligatoria y por tanto, no es vinculante, en el evento en que el ponente decida incluir la identificación de los actores y omita mencionar a alguna de ellas o incurra en algún tipo de error en su tipografía, de ninguna manera habría lugar a concluir que la persona cuyo nombre se omitió o aquella respecto de ia cual se incurrió en el yerro mencionado habría quedado excluida ipso facto de la litis, a menos que. vale la pena volverlo a expresar, tal circunstancia hubiere obedecido al ejercicio de las competencias otorgadas a los operadores judiciales, caso en el cual deben ejecutarse en estricto cumplimiento del trámite y formalidades previstas para ello. (Subrayas del texto original y Negrilla de texto original).*

**De lo anterior se infiere, que dicha circunstancia de manera alguna podría significar que las personas que no fueron nombradas en el auto admisorio de la demanda, quedara vinculada ai proceso al momento en que se trabe litis, en la medida en que, se notifica la demanda, y ello no se predica frente al auto admisorio de ia misma, pues el escrito de demanda, lo que determina quienes son los que demandaron, esto es quienes son los que formularon pretensiones y quienes están llamados, inicialmente, a tener la condición de**

**2** •'ARTÍCULO 83. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACION DEL CONTRADICTORIO. <Artículo modificado por el artículo 1. numeral 35 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto **es** el siguiente:> Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas: si no se hiciere así, ***el juez en e¡ auto que admite la demanda*** ordenará dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para ei demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de ofícío o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderé durante el término para comparecer los citados.

Si alguno de los citados solicitare pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas: si las decretare, concederá para practicarlas un término que no podrá exceder del previsto para el proceso, o señalará día y hora para audiencia, según el caso.

Cuando alguno de los lítisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su citación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio, efectuada la cual, quedará vinculado al proceso”.

3 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA **-** SUBSECCION A CONSEJERO PONENTE: Mauricio Fajardo Gómez Bogotá, D.C., junio veintisiete (27) de dos mil trece (2013) Radicación: 250002326000200301537 - 01 (30034) Demandante: Gustavo Alberto Rodríguez Liévano y otros. Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros. Asunto: Apelación sentencia de reparación directa.

parte en el proceso. En efecto habrá de negarse la solicitud impetrada por la parte actora, máxime cuando en ningún momento esta administradora de justicia omitió resolver alguna solicitud objeto del pronunciamiento, tal como lo prevé el artículo 286 del C.G.P.

Conforme a lo expuesto, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali,

PRIMERO: NIÉGASE la petición de adición, formulada por la apoderada de la parte actora, en virtud de lo expuesto con antelación.

SEGUNDO: Entiéndase que el extremo activo, se encuentra conformado por las personas enlistadas en la demanda, que se encuentren debidamente representadas, y no las consignadas en el auto admisorio de la demanda, por las razones anotadas.

TERCERO: Continuar con el trámite del presente asunto.

Notifíquese y Cúmplase,

Juez

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTIAGO DE CALI  
NOTIFICACION POR ESTADO ELECTRÓNICO

La suscrita Secretaria certifica que la anterior providencia se notificó a la(s)

parte (s) por anotación en el ESTADO ELECTRÓNICO No. el cual

se insertó en los, medios informáticos de la Rama Judicial el

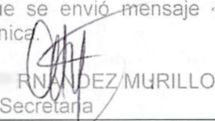
**RESUELVE:**



día y 8 MSP ^ü 'a

Se certifica de igual manera qi je datos a quienes

suministraron su dirección electrói



CAROLINA HE

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Auto de Sustanciación No. Bto

Proceso No. Demandante Demandado Acción

76001-33-33-008-2015-00145-00  
HERNANDO LEON ZAMBRANO PEÑA  
UGPP

EJECUTIVO

Santiago de Cali,

Estando pendiente de continuar con la audiencia de instrucción y juzgamiento en el proceso de la referencia y de resolverse lo concerniente a la excepción propuesta por la entidad demandada, se hace mención a lo siguiente:

**Prueba pericial-traslado**

Habiendo sido decretada una prueba de oficio, con miras a obtener una liquidación previa del interés presuntamente adeudado, de conformidad con el Articulo 228 del Código General del Proceso, se dispondrá el traslado a las partes por el término de tres (3) días, del dictamen pericial rendido por el AUXILIAR DE JUSTICIA, JESUS ANTONIO BONILLA GONZALEZ, vistos a folios 175-178 del cuaderno principal, allegado 07 de junio de 2016.

En consecuencia, y con el fin de incorporar al contradictorio la prueba aludida, se correrá traslado a las partes por el término de tres (03) días, al tenor de lo dispuesto en el artículo 228 del C.G.P.

**Corrección u aclaración del dictamen**

Este despacho encuentra de oficio, una corrección del dictamen. Por lo anterior, proceda auxiliar de la justicia, a excluir el capital arrojado de su dictamen pericial, y únicamente verifique lo solicitado en la demanda ejecutiva, (fl. 51 y s.s) en atención a que la parte ejecutante sólo pretende el pago de intereses generados., comoquiera que la entidad demandada ya generó un pago por valor de $63.429.384; valor que deberá tenerse en cuanto para todos los efectos (folio 45 del expediente). Adviértase que mediante Resolución No. RDP 041883 del 09 de octubre de 2015, la entidad ordenó el reconocimiento de intereses, (fl. 169-174)

Conforme a lo expuesto, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de

PRIMERO: CORRER TRASLADO a las partes por el término de tres (03) días del dictamen pericial obrante a folios 175-178 del c. ppal.

Cali

**RESUELVE:**

SEGUNDO: Vencido el término anterior, y no habiendo otra aclaración y corrección presentada por las partes, ORDENAR corregir u aclarar el dictamen aportado, por las razones que considera éste despacho.

TERCERO: En firme la anterior decisión y una vez cumplido lo precedente, se procederá a fijar fecha y hora para la audiencia de instrucción y de juzgamiento. Lo anterior, sin perjuicio de que los valores sean corroborados por el contador que apoya a los juzgados administrativos.

Notifíquese y Cúmplase,

M0ÑICA LONDOÑO FORERO

Juez

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTIAGO DE CALI NOTIFICACION POR ESTADO ELECTRÓNICO

La suscrita Secretaria certifica que la anterior providencia se notificó a la(s)

parte (s) por anotación en el ESTADO ELECTRÓNICO No.

el cual

se insert

día

ó en pbs^rfnedios informáticos de la Rama Judicial el

Se certifica de igual manera que se envió mensaje de datos a quienes

suministraron su dirección electrónica.

CAROLINA

Af^DEZ MURILLO

Secretaria



REPÚBLICA DE COLOMBIA



**JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI**

Santiago de Cali,

Auto de Sustanciación N° W

Proceso No: 76001-33-33-008-2014-00445-00

Demandante: RICARDO ALFONSO MOSQUERA CAMPAZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO

NACIONAL Medio de Control: REPARACION DIRECTA

En atención al oficio No. DJ-16-689.J.P.R. de fecha agosto 04 de 2016, allegado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, el Despacho pone en conocimiento del apoderado de la parte actora lo informado por dicha entidad, a fin de determinar la pérdida de la capacidad laboral del Señor RICARDO ALONSO MOSQUERA CAMPAZ.

Por ello, se le advierte a la parte interesada que es su obligación colaborar con la obtención de las pruebas, pues ello contribuye a la celeridad que se le imparte a la respectiva actuación procesal, quien deberá asumir todo lo relacionado con el diligenciamiento de lo solicitado por dicha entidad. Adviértase que de no cumplir con todo lo concerniente a la práctica de la prueba se entenderá desistida, en los términos establecidos en el artículo 178 del CPACA.

Así el despacho,

**DISPONE**

PRIMERO.- PONER en conocimiento del apoderado de la parte demandante Doctor Henry Bryon Ibáñez, el oficio No. DJ-16-689.J.P.R. de fecha agosto 04 de 2016, allegado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, a fin de que asuma las cargas procesales relacionadas con la prueba pericial, véase el diligenciamiento de los puntos solicitados.

SEGUNDO.- Adviértase a la parte interesada que de no cumplir con los requisitos que lleven al cumplimiento de la prueba se entenderá el desistimiento de la misma en los términos establecidos en el artículo 178 del CPACA.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

**IVJONICA LONDONO FOREROy t**

Juez.

NOTIFICACIÓN POR ESTADO 11 auto anterior se notifica por: Estado No.



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali,

Auto de Sustanciación No. £65

Proceso No.: 008 - 2016- 00210- 00

Demandante: Margarita Hurtado

Demandado: UGPP

Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho-Laboral

La señora Margarita Hurtado en representación del menor Juan Camilo Garcés Hurtado, instaura medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin que se declare la nulidad de actos administrativos por medio de las cuales se reconoció al menor, los derechos en la pensión de su difunto padre el señor Humberto Garcés Angulo en una proporción del 6.25%

Este despacho a fin de verificar el último lugar donde prestó o debieron prestarse los servicios del cuasante, requerirá a la entidad demandada para que allegue la respectiva certificación.

En consecuencia, previo admitir, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, DISPONE:

1. Requiérase por intermedio de la secretaría, al representante legal de la UGPP o quien haga sus veces, para que envíe con destino a este despacho, certificación en la que indique el último lugar donde prestó o debieron prestarse los servicios por parte del señor Humberto Garcés Angulo identificado con cédula de ciudadanía No. 16.465.677 de Buenaventura.
2. La parte actora, igualmente podrá aportar los documentos que acrediten el último lugar donde prestó los servicios el causante, remitiéndolas a este despacho.

Notifíquese y Cúmplase

m¿nicaÍx)ndoño forero7

Juez

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTIAGO DE CALI NOTIFICACION POR ESTADO ELECTRÓNICO

La suscrita Secretaria certifica que la anterior providencia se notificó a la(s)

parte (s) por anotación en el ESTADO ELECTRÓNICO No. el cual

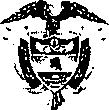
se insertó, en los, medios informáticos de la Rama Judicial el

día ■ iVcJ

Se certifica de igual manera que se, envió mensaje de datos a quienes suministraron su dirección electrónica:).!-

CAROLINA HÉRNÁNDEZ MURILLO Secretaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI**

**Santiago de Cali,**

**Auto de Sustanciación N° •**

**Proceso No.:**

**008-2014-00431**

**Demandante: CARLOS AUGUSTO MURILLO SINISTERRRA Y OTROS**

**Demandado: NACION- MINDEFENSA- POLICIA NACIONAL.**

**Medio de Control: REPARACION DIRECTA**

**Verificada la constancia secretarial que antecede, observa el Despacho que la parte demandante dentro del proceso de la referencia, interpuso recurso de apelación (fls.292-302) contra la sentencia No. 094 de Mayo de 31 de 2016 (fls.279-290), decisión judicial que fue notificada a la parte demandante el dia 07 de Junio de 2016 (fls. 291).**

**En lo pertinente al recurso de apelación contra sentencias, la Ley 1437 de 2011 en el artículo 247, dispone:**

*"Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:*

1. *El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.*
2. *Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior, quien decidirá de plano si no se hubiese pedido la práctica de pruebas. Si las partes pidieron pruebas, el superior decidirá si se decretan según lo previsto en este Código.*

**Teniendo en cuenta lo anterior, observa el Despacho que el demandante interpuso la apelación el dia 15 de junio de 2016 (fl.292-302), fecha que se encuentra dentro del término señalado por la Ley para interponer el recurso de alzada.**

**Por lo anterior, el Juzgado**

**PRIMERO: Conceder el recurso de apelación interpuesto por encontrarse dentro del término señalado por la Ley.**

**SEGUNDO: Remítase al H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el presente proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.**

Notifíquese,

(...)

**DISPONE:**

It

Juez.



REPUBLICA DE COLOMBIA



**JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI**

Santiago de Cali

Auto de Sustanciación N° ^

Proceso No.:

008-2015 - 00034

Demandante: FREDY CASTAÑO OSORIO

Demandado: NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICIA

NACIONAL-CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL CASUR.

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LAB.

Verificada la constancia secretarial que antecede, observa el Despacho que la parte demandante dentro del proceso de la referencia, interpuso recurso de apelación (fls. 118-125) contra la sentencia No. 093 d e mayo de 31 de 2016 (fls. 110-116), decisión judicial que fue notificada a la parte demandante el 01 de Junio de 2016 (fls. 117).

En lo pertinente al recurso de apelación contra sentencias, la Ley 1437 de 2011 en el artículo 247, dispone:

“Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
2. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior, quien decidirá de plano si no se hubiese pedido la práctica de pruebas. Si las partes pidieron pruebas, el superior decidirá si se decretan según lo previsto en este Código.

Teniendo en cuenta lo anterior, observa el Despacho que el demandante interpuso la apelación el 16 de junio de 2016 (fl. 118), fecha que se encuentra dentro del término señalado por la Ley para interponer el recurso de alzada.

Por lo anterior, el Juzgado

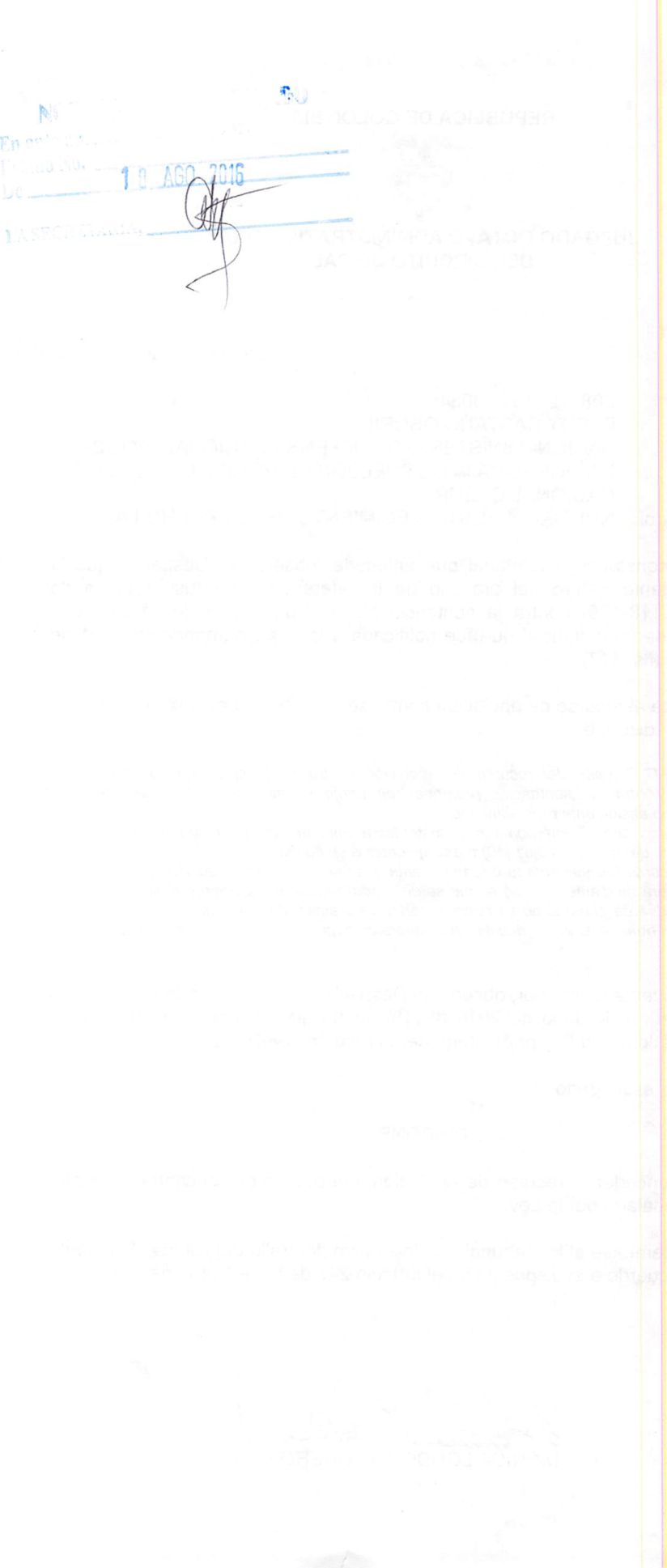
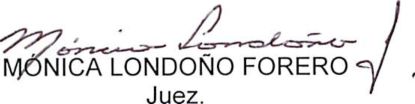
PRIMERO: Conceder el recurso de apelación interpuesto por encontrarse dentro del término señalado por la Ley.

SEGUNDO: Remítase al H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el presente proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

Notifíquese,

(...)

**DISPONE:**



REPUBLICA DE COLOMBIA



**JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI**

Santiago de Cali,

Auto de Sustanciación N°£to

Proceso No.: Demandante: Demandado: Medio de Control:

008-2014- 00308  
REDOX COLOMBIA S.A.S  
MUNICIPIO DE CALI  
REPARACION DIRECTA

Verificada la constancia secretarial que antecede, observa el Despacho que la parte demandante dentro del proceso de la referencia, interpuso recurso de apelación (fls.325-333) contra la sentencia No. 073 de Abril de 29 de 2016 (fls.308-323), decisión judicial que fue notificada a la parte demandante el dia 03 de mayo de 2016 (fls. 374).

En lo pertinente al recurso de apelación contra sentencias, la Ley 1437 de 2011 en el artículo 247, dispone:

“Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
2. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior, quien decidirá de plano si no se hubiese pedido la práctica de pruebas. Si las partes pidieron pruebas, el superior decidirá si se decretan según lo previsto en este Código.

Teniendo en cuenta lo anterior, observa el Despacho que el demandante interpuso la apelación el dia 18 de mayo de 2016 (fl.325-333), fecha que se encuentra dentro del término señalado por la Ley para interponer el recurso de alzada.

Por lo anterior, el Juzgado

**DISPONE:**

PRIMERO: Conceder el recurso de apelación interpuesto por encontrarse dentro del término señalado por la Ley.

SEGUNDO: Remítase al H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el presente proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

Notifíquese,

